

R 84015

# COLECCION PÓSTUMA

DE

PAPELES CIENTÍFICOS, HISTÓRICOS, POLÍTICOS

Y DE OTROS RAMOS

SOBRE LA ISLA DE CUBA,

YA PUBLICADOS, YA INEDITOS

POR

D. JOSE ANTONIO SACO.



HABANA.

EDITOR: MIGUEL DE VILLA, OBISPO 60.  
1881.

## LOS CHINOS EN CUBA (1).

## I.

En el artículo titulado ESTADÍSTICA CRIMINAL DE CUBA EN 1862, hablé de chinos en Cuba. ¿Pero cómo y cuándo se introdujeron en ella? ¿Son libres ó esclavos los introducidos, ó ocupan una posición intermedia entre esas dos clases? ¿Existen esclavos en China ó individuos que tengan con ellos alguna analogía en su condición social? La respuesta á estas preguntas está enlazada con la historia futura de Cuba y con la antigua de China.

Así como los primeros negros se introdujeron en Cuba para llenar el vacío que dejaba en los trabajos de la colonia la mortandad de los indios, así también en nuestros días se han importado chinos para suplir la insuficiencia de los negros, pues entrando estos allí de algunos años acá en menor número que antes, y no bastando para las grandes necesidades de la isla, llamóse en auxilio á los hijos del celeste imperio. Formóse expediente, como es costumbre en España formarlos para todo, y según dijo el Sr. Ulloa, ex-director de Ultramar, en la sesión del Congreso de 10 de Abril de 1863, «este expediente tiene la información más amplia. Han informado en él todos los capitanes generales, segundos cabos, corporaciones y autoridades de Cuba; han informado el Consejo real y el Consejo de Estado; y además el decreto que fué resultado de tantos informes, suprime todo privilegio que es precisamente su gran ventaja.»

(1) *La América* de Madrid de 12 de Febrero de 1864.

Léjos de acriminar yo la intencion de los promovedores y primeros ejecutores de un proyecto que vá llenando de chinos nuestra tierra, creo que procedieron de buena fé y movidos únicamente del deseo de fomentar la agricultura cubana. Pero este asunto, sencillo á primera vista, es muy grave en sus consecuencias, pues debe considerarse bajo de tres aspectos distintos, á saber: el de los intereses puramente materiales, el de la moral pública y el de los peligros políticos que encierra el porvenir. Por desgracia ni en Cuba ni en la metrópoli se atendió á más que á los intereses materiales, y sacrificando á éstos los morales y políticos, se ha complicado nuestra situacion aumentándose los males con que hace algun tiempo nos amenaza la raza africana. Cuba empieza ya á sentir el veneno que en las costumbres públicas están derramando esos corrompidos asiáticos, y á seguir las cosas como van, no tardarán muchos años sin que se nuble nuestro horizonte y descargue alguna tempestad.

Los primeros chinos introducidos en Cuba en 1847, fueron los que en número de 600 contrató por vía de ensayo con un empresario particular la ya extinguida Junta de Fomento. No era libre su importacion, y todo introductor necesitaba de un permiso especial del Jefe Superior de la isla. En 1852 concedióse uno tan extenso, que autorizaba llevar á ella 6,000 chinos. La ordenanza provisional que regia en la materia fué abolida, cuando el real decreto de 22 de Marzo de 1854 aprobó el reglamento formado para la introduccion y régimen de los chinos en Cuba. La facultad de importarlos sólo se concedió por dos años, debiendo el introductor obtener prévia licencia del gobierno y someterse á otras condiciones que se le imponian. Es de advertirse, que aquel reglamento no se le limitó á permitir la introduccion de chinos, sino que se extendió á la de indios de Yucatan y colonos españoles; pero sucedió lo que era de esperar; sucedió que el espíritu de especulacion, desatendiendo á éstos completamente, dirigió todos sus esfuerzos á la inmigracion de aquéllos.

Continuó la introduccion de chinos en los años posteriores; y tan lucrativo era el negocio, que en 1860 había ante el gobierno supremo 40 peticiones solicitando el privilegio de llevarlos á Cuba; á una de ellas ofrecía al Tesoro públi-

co por la concesion, la suma considerable de 900,000 pesos. El Consejo de Estado rechazó esta proposicion, y consultó que la introduccion de chinos confiada hasta entónces á ciertas compañías, debía dejarse á la industria privada. Conformóse el gobierno con este dictámen, y de aquí nació el nuevo reglamento, que, revocando el de 22 de marzo de 1854 y todas las demás disposiciones anteriores, fué comunicado al Capitan General de Cuba por el real decreto de 7 de julio de 1860.

Cuando se compara la conducta del gobierno en la importacion de los chinos con la que él siguió en otro tiempo en la introduccion de los negros, se notan tres grandes diferencias.

1.º El gobierno nunca ha introducido de su cuenta chinos en Cuba; mas en cuanto á negros, él mismo los importó muchas veces, no sólo en aquella isla, sino en las demás colonias americano-hispanas. Esto hizo en los primeros tiempos de la conquista; esto en vários años posteriores, y esto tambien desde 1689 á 1662.

2.º El período de las prévias licencias para introducir chinos ha sido de muy corta duracion, pues habiendo empezado en 1847, año de la primera importacion, cesó con el reglamento de 1860. No sucedió así con la importacion de negros; y yo pudiera demostrar con documentos oficiales, que el sistema de prévias licencias y de contratas privilegiadas, prevaleció por el largo espacio de tres centurias.

3.º Las licencias para introducir chinos siempre han sido gratuitas; mas las concedidas para los negros fueron siempre pagadas y bien pagadas. Á los pocos años de haberse descubierto la América, el gobierno convirtió en objeto de lucro el tráfico de esclavos que en ella se empezaba á hacer. Estableció el sistema de vender licencias para introducirlos á razon de dos ducados por cabeza, y la primera cédula se despachó en 22 de julio de 1513. Con la necesidad de negros en América se fué aumentando su valor y con su valor creció el precio de cada licencia. Pagaban por ella (1) á razon de 30 ducados por

---

(1) D. José Veitia Linage, del Consejo de S. M. y juez oficial de la real Audiencia de la Casa de la Contratacion de las Indias, en el lib. 1.º, cap. 3.º de su obra, *Noticia de la Contratacion de las Indias Occidentales*, impresa en Sevilla en 1662.

cabeza, y más 20 reales del derecho que llamaban de aduanilla, y los que no podían pagar en Sevilla al tiempo de despacharlos, se obligaban en lugar de 30 ducados en contado á pagar 40 en las Indias, y 30 reales por los 20 que llamaban de aduanilla . . . Y es de advertir, que estos derechos eran por lo tocante á la corona de Castilla, además de los cuales por lo que miraba á la de Portugal, se cobraba otro derecho, y tambien por la entrada en las Indias.»

De las licencias particulares se pasó á los asientos, y en los que se ajustaron de 1586 á 1631, los asentistas se comprometieron á pagar á la Real Hacienda por el privilegio concedido, 5.063,240 ducados, ó sean casi 2.800,000 pesos fuertes.

En los asientos celebrados de 1662 á 1713, el derecho más bajo que debía pagarse al gobierno por cada negro introducido, era de 33½ pesos; mientras que hubo caso en que subió á 112½ pesos y aun á más. Yo soy tan enemigo del tráfico de negros como del de chinos; pero ya que éste existe, prefiero verlo libre de todo tributo, pues el que se impusiera por cada chino que entrase en Cuba, agravaría la situación del hacendado y de las demás personas que los tomasen.

Aunque incompleto, tengo un estado de las importaciones anuales de chinos en Cuba; pero habiéndoseme traspapelado, no puedo hacer ahora uso de él. Limitaréme pues á decir, que en los siete años, de 1853 á 1859, se introdujeron 42,501 chinos, y que éstos no figuraron en el censo que se hizo en Enero de 1861, sino por 34,825, de cuyo número solamente hubo 57 mujeres. No es extraño que éstas fuesen tan pocas, aunque es permitida la introduccion de familias chinas, porque no teniendo las mujeres, y particularmente los niños, la aptitud para el trabajo que los hombres y los muchachos de corta edad, no hallan colocación en Cuba; y empresario que á ella los llevase sufriría un gran quebranto. ¡Quiera Dios que este estado sea por siempre durable, porque si la importacion de esas familias llegara á ser lucrativa, Cuba se convertiría en una pequeña China.

He dicho que el censo de 1861 presentó 34,825 chinos. Corto es este número comparado con el que habrá

en los años venideros; pero así corto, ¿no se ven ya estallar insurrecciones en muchos ingenios, acompañadas de sangre y de muerte? ¿No han difundido á veces la alarma en los campos, temiéndose que se levanten en todo un distrito? De los temores que hubo en el de Cárdenas, testigo fui cuando en Enero de 1861 recibía yo del Sr. D. Domingo Aldama una honrosa hospitalidad en su ingenio Santa Rosa. Y si esto acontece hoy, ¿qué no será cuando el torrente de la inmigracion los acumule en aquella isla en número formidable?

Si las cosas siguen como van, es seguro que los chinos se aumentarán rápidamente. El tráfico de negros, sobre ser ilegal encuentra cada día nuevos obstáculos, así dentro como fuera de Cuba. El de los chinos al contrario, es lícito y libre, y tan exento está de cruceros como de la intervencion y reclamaciones de los gobiernos extranjeros. En estas circunstancias, y exigiendo el desarrollo de la agricultura y de otros trabajos cubanos un incremento considerable de brazos, es claro que Cuba los pedirá de preferencia á la China, cuya inmensa poblacion se los proporcionará á precios relativamente más baratos que otros paises. Nada, pues, exagero al decir, bajo la perspectiva que se presenta, que la actual generacion podrá encontrarse en breves años con 200,000 ó más chinos, no compuestos de mujeres, niños ni ancianos, sino de hombres jóvenes y robustos en su inmensa mayoría, y dispuestos ya por sí, ya por ageno impulso, á acometer las empresas más funestas y criminales contra Cuba.

Si los chinos que van entrando fuesen tambien saliendo al paso que cumplen sus contratas, los peligros no serian tan inminentes; pero su exportacion de la isla, léjos de ser obligatoria, depende enteramente de su voluntad; y el único caso en que se les puede compuler, es una eventualidad tan remota, que yo no sé si se ha realizado aún una sola vez. Entrarán, pues, y seguirán entrando chinos á millares y millares; y cuando nuestra tierra se halle henchida de ellos, ¿podremos gloriarnos de haber asegurado nosotros y nuestros hijos los materiales intereses en pos de los cuales habremos corrido con tanto afán? ¿No bastan ya los inmensos peligros de la raza africana, para que tambien los aumentemos con los de otra todavía más perniciosa?

En un informe que á nombre de un opulento hacendado extendí en la Habana en Junio de 1861 sobre el proyecto de introduccion de colonos africanos en Cuba, dije lo que ahora trascribo:

«Si la raza africana ha comprometido en estos últimos tiempos el feliz porvenir de Cuba, la raza china, que se ha comenzado á introducir, complica más nuestra situacion, pues que en vez de dos razas inconciliables que ántes teníamos, ahora viene á juntarse una tercera parte que no puede amalgamarse con ninguna de las dos, por ser del todo diferente en su lengua y su color, en sus ideas y sentimientos, en sus usos y costumbres, y en sus opiniones religiosas.»

«Política muy aventurada es la que se empeña en mantener la tranquilidad de Cuba introduciendo varias razas y contraponiendo unas á otras. Este equilibrio no puede ser de larga duracion, y por más esfuerzos que se hagan por mantenerlo, dia vendrá en que forzosamente se rompa, ora juntándose todas las razas contra los blancos, ora dividiéndose entre sí y auxiliando á alguna de ellas ó haciéndose mútua guerra. Nunca se olvide que al negro esclavo se le incitará á la revolucion ofreciéndole la libertad, y que al negro libre y al asiático se les convidará con los mismos derechos que disfruta el blanco. En nuestra peligrosa situacion, vale más una prosperidad lenta, pero segura, con brazos blancos, que no un rápido engrandecimiento con negros y con chinos, para caer despues en la sima insondable que ya se abre á nuestros piés.»

Esto se dijo en aquel informe en 1861. ¿Pero es fácil que Cuba se resigne á entrar por esa nueva senda? Ella forzó desmesuradamente su produccion desde fines del pasado siglo; y la forzó no con brazos de su propio suelo, sino con agenos, introducidos del continente africano. ¿Continuará importándolos para satisfacer con ellos todas sus necesidades? Esto sería su perdicion. ¿Pediralos y recibirlos exclusivamente de China? Su ruina futura sería inevitable. ¿Volverá la vista á Europa para que ella le envíe sus labradores y artesanos? Hé aquí su única salvacion. ¿Pero cómo inducirlos á que emigren bajo el peso de las instituciones que rigen á Cuba? Aquí se presenta con toda su fuerza la cuestion de libertad, esa cuestion

pendiente tantos años há, y que nunca se resuelve. Repítense las promesas, caen y se levantan los partidos, suben y bajan ministerios, y Cuba siempre sumisa sigue arrastrando su cadena. Llámásenos hermanos; pero esta dulce palabra que pronuncian todos los labios, los hechos la desmienten. Cuba tiene derecho á pedir su libertad, no una libertad de embuste ó de aparato, sino una libertad franca, verdadera y digna del pueblo que la recibe. Entonces, y sólo entonces, Cuba hallará remedio á los profundos males que la aquejan; y entonces, y sólo entonces, restablecida la unidad en los principios y en los hechos, se podrá decir sin mentira que España es Cuba y que Cuba es España.

## II. (1)

Una de las preguntas que hice en mi artículo precedente, fué si los chinos que existen en Cuba son libres ó esclavos, ó una clase intermedia entre éstos y aquellos. Para dar una respuesta satisfactoria, es menester indicar brevemente algunos de los requisitos que se exigen para la importacion de los chinos en Cuba y su estado ó condicion despues de introducidos en ella.

El Reglamento de 1860, único que rige en la materia prescribe entre otras cosas:

1° Que ningun chino pueda entrar en Cuba sin que antes se haya hecho una contrata entre él y su introduccion, con intervencion y autorizacion del Cónsul de España en China ó de sus agentes ó delegados.

2° Estas contratas se extenderán cuadruplicadas y las traducirá por triplicado el intérprete del consulado.

3° El cónsul ó su agente autorizará los cuatro ejemplares; devolverá uno al representante de la empresa y remitirá los tres restantes, á cada uno con la traduccion respectiva, uno al gobierno Supremo de España y dos al Capitan General de Cuba, quien reservará su traduccion y un ejemplar, y entregará el otro al chino, para que lo conserve en su poder, luego que haya sido declarada legítima su introduccion.

(1) *La América* de 12 de Marzo de 1861.



4° La contrata ha de expresar el nombre, edad, sexo y pueblo de la naturaleza del chino contratado; el tiempo que ha de durar la contrata, y el salario y la especie, cantidad y calidad de los alimentos y vestidos que ha de recibir.

5° Cuando por cualquiera de los motivos que señala el artículo 20 del Reglamento, los empresarios pierdan todos sus derechos sobre los chinos, entónces dispondrá el Capitan General de Cuba el desembarque y alojamiento de aquéllos á expensas del consignatario, y dejará á los mismos en libertad para que se contraten como trabajadores menestrales, criados domésticos ó de labor, adoptando todas las medidas que más eficazmente protejan al chino contra las desventajas de su situacion.

6° Dado el caso anterior, si trascurridos dos meses desde el desembarque no hubieren logrado los chinos su acomodo, ó hubieren manifestado en cualquier tiempo su ánimo de no contratarse en Cuba, el Capitan General exigirá del consignatario la suma necesaria para la reexportacion de todos ellos, y la dispondrá directamente con las mayores garantías posibles, consultando en lo que sea dable la voluntad de los chinos.

Todo lo enumerado hasta aquí, y otros artículos del Reglamento de 1860 que más adelante citaré, bastan para probar que los chinos no son esclavos en Cuba.

Efectivamente, ¿qué es lo que constituye un esclavo? Esta palabra es tan vaga que se toma en varios sentidos, y puede aplicarse hasta el hombre libre privado de los derechos políticos. Aun circunscribiéndola á la esclavitud *personal*, todavía no siempre tiene en las leyes y en la historia una significacion fija y bien determinada, porque á veces se designa con ella á los esclavos rigurosamente tales, y á veces á los *siervos*. Esto fueron los *hilotas*, los *periecos*, los *clariotas*, *penestes* y otros en la antigua Grecia, y sin embargo, indistintamente se les dió y se les dá el nombre de esclavos.

Restringiendo esta palabra todo lo posible, y aplicándola exclusivamente á los que en todos tiempos han sido considerados como verdaderos esclavos, encuéntranse entre ellos diferencias tan notables, segun las diversas naciones, y aun las épocas de una misma, que bien pudiera

decirse que aquellos á quienes en un tiempo cuadró perfectamente la denominacion de esclavos, ya después no podría dárseles con igual exactitud. Dura y terrible fué la condicion del esclavo en Roma durante la república; pero desde el segundo siglo del imperio empezó á templarse el rigor de la antigua legislacion. Adriano abrió una nueva era arrancando á los amos el poder de matar á sus esclavos; y las leyes benéficas de los Antoninos, de Diocleciano, Constantino, Theodosio y otros emperadores, ya paganos, ya cristianos, enfrenaron á tal punto la autoridad del amo, que si se compara la condicion del esclavo romano en el siglo quinto del imperio, con la del que vivió en tiempos de la república, parece que al primero ya no le conviene propiamente el nombre de esclavo.

Pero en medio de las restricciones que sufrió la autoridad del amo, siempre se conservó en los códigos de Roma el carácter esencial que distingue al esclavo, no sólo del hombre enteramente libre, sino de todas las clases intermedias sometidas á servidumbre. Ese carácter se transmitió de siglo en siglo, ya por la índole misma de la esclavitud, ya por la influencia de la legislacion romana y llegando hasta las regiones del Nuevo Mundo marcóse tambien con él á los míseros africanos que en ellas se introdujeron desde los dias de Colon. En ningún pueblo de la antigüedad se consideró al esclavo como *persona*: túvosele tan sólo como *cosa*, como un instrumento vivo de trabajo; y bajo este punto de vista se le miró, así en la edad bárbara y media, como en todas las colonias que las modernas naciones de Europa fundaron en América.

Sancionado, pues, el terrible principio de la *impersonalidad* del esclavo y de su trasformacion en cosa, siguióse como consecuencia forzosa que él carece de todos los derechos civiles; y si de ellos carece es incuso, que no puede contratar, ni adquirir bienes sin el consentimiento del amo, ni testar ni legar ni tener familia ante la ley, ni ejercer, por consiguiente, la autoridad marital sobre la mujer ni la patria potestad sobre los hijos (1) en una pa-

(1) En la antigüedad el esclavo pudo contraer ciertos enlaces para no verdaderamente matrimonio. Este fué en Roma de tres especies, á saber, por *uso*, por *confusio* y por *compa. realda* (*Usus, confusio, emptio*.—*Inst. l. 2 § 103 á 113*). Por *uso* fué cuando una mujer con consentimiento de sus padres ó tutores vivía un año entero con un hombre, para casarse con él, sin ausentarse tres noches de su casa. De este modo

labra, privósele de todos aquellos actos civiles, que son permitidos á los que la ley considera como persona. Si pues, tal es la naturaleza del esclavo, apliquémos los caracteres que la constituyen á la condicion del chino en Cuba, para ver si le convienen ó le repugnan.

Hemos dicho que el esclavo no tiene persona por expresa declaracion de la ley; más ésta ó sea el Reglamento de 1860, la reconocen muy explicitamente en el chino.

El esclavo no puede contratar; pero el chino sí, puesto que para entrar en Cuba debe hacer una contrata con su introductor. Esta facultad de contratar, la conserva aún despues de introducido en aquella isla, segun aparece de los artículos 40, 46 y 47 del citado Reglamento.

El esclavo nada adquiere para sí, sino todo para el amo, y si algo posée es tan sólo por consentimiento de éste y de un modo tan precario que puede quitársele cuando se lo antoje. El chino, empero, puede adquirir bienes para sí, como terminantemente lo dispone el artículo 40 del Reglamento.

El esclavo no puede testar ni aún de aquellos bienes de que el amo le permita gozar. El chino, al contrario, puede hacer toda especie de última voluntad, no sólo porque no le está prohibido, sino porque puede disponer libremente de sus bienes por título oneroso ó lucrativo. (1).

Si el esclavo carece de autoridad marital sobre la

legaba á ser su mujer legítima ó propiedad adquirida por prescripción. Por *confurcacion* fué cuando el hombre y la mujer eran pasados por el *Fumen Diet*, en presencia de diez testigos á lo ménos, pronunciando cierta fórmula de palabras, y probando una tortu ó pan hecho de sal, agua y harina, llamado *far ó pan furco*. La compra *venta* se hacia, dándose mutuamente el hombre y la mujer una moneda pequeña, y mediando ciertas preguntas y respuestas entre los dos.

Prohibida fué al esclavo toda especie de matrimonio, y sólo se le permitió la bastardía unida llamada *contubernio*. Los vínculos de familia que de este enlace nacian, fueron reconocidos por el antiguo derecho, mas la legislación del imperio cupió á respetarlos, prohibiendo en los casos de *redubitoria* y de repartimiento de bienes por herencia ó por legado, que los esclavos contubernales se separasen, éstos de sus hijos y los hermanos de los hermanos. Constantino dió un nuevo paso, y generalizando la ley que antes era especial consignó en ella estas magníficas palabras: «¿Quién podrá sufrir, que se separe á los hijos de los padres, á las hermanas de los hermanos, y á las mujeres de los maridos?» (Código Teodosiano, lib. 2, tit. 25, l. 1. P.; y Código Justiniano, lib. 3, tit. 38, l. 11.)

Por ese tiempo aún no se habia elevado á matrimonio el contubernio de los esclavos; pero despues no sólo la Iglesia sino algunos emperadores del imperio de Oriente les permitieron que se casasen y recibiesen la bendicion nupcial. Estos matrimonios, aunque válidos á los ojos de la religion, no producen efectos civiles, pues los derechos marital y paternal del esclavo desaparecen ante el poder absorbente del amo.

(1) Artículos 40, 46 y 47 del Reglamento.

mujer y de patria potestad sobre los hijos, el chino puede ejercer ambos derechos en toda su plenitud (1).

Propiedad del amo, el esclavo debe trabajar sin retribucion alguna; mas el chino recibe un salario por sus servicios.

Todos estos caracteres marcan una diferencia fundamental entre el esclavo y el chino en Cuba.

Diríase que éste tambien lo es, porque la persona que lo toma, entrega por él cierta cantidad al empresario que lo introduce, y que esto es cabalmente lo que se hace cuando se compra un esclavo africano. Es verdad, que en ambos casos media un precio; pero éste representa en el esclavo la enagenacion completa de una propiedad, la venta de un hombre, mientras que en el chino no es sino una indemnizacion más ó ménos lucrativa de los capitales empleados por la empresa en la introduccion de los chinos. Si á esto se quiere llamar venta, llámesele en hora buena; pero esta venta, que jamás se extiende á la persona, tan sólo recae sobre los servicios que ésta ha de prestar por un tiempo determinado y pagándosele siempre un salario.

Ya que de precio y salario he hablado ya cuánto ascienden aquél y éste?

Atendiendo á que los empresarios dan á cada chino en su tierra doce pesos de embarque y dos mudas de ropa; atendiendo á los cuantiosos capitales que aquéllos tienen que emplear para la introduccion de esos asiáticos en Cuba, y atendiendo tambien á que la concurrencia y la demanda no se hallan siempre en armonía, es claro que á veces debe haber grandes fluctuaciones en el precio de los chinos. Estos se vendieron en años anteriores por los empresarios hasta en 408 y 425 pesos por cabeza; pero en Febrero de 1861 yo ví vender en la Habana dos partidas, una de 25 chinos y otra de más de 100 al precio de 221 pesos al contado. Del mismo modo se vendieron otros en Junio de aquel año á razon de 170 pesos, bien que no eran de tan buena calidad física como los anteriores. Ausente en la Habana desde Julio de 1861, ignoro el precio que hoy se da por ellos en Cuba.

---

(1) Artículo 26 del Reglamento.

El salario que gana el chino no está sujeto á las variaciones que el precio. Aquel es fijo, pues durante la contrata, que es de ocho años, siempre se pagan 4 pesos al mes. Vencido el plazo de la primera contrata, y renovada por el chino, éste gana entónces mayor salario, y de un caso tengo noticia, en que llegó á 9 pesos mensuales. Esto consiste en que ya los chinos están aclimatados, son prácticos en las tareas que desempeñan, y el hacendado tiene un ahorro en no comprar nuevos brazos que reemplacen á los salientes. Sin embargo, al lado de estas ventajas puede haber inconvenientes, y el mayor de ellos será la perniciosa influencia que á veces podrán ejercer los chinos recontratados en los nuevos introducidos en los ingenios.

Si es innegable que el chino en Cuba no es esclavo en el sentido legal, ¿se dirá que es enteramente libre? Yo no lo afirmaré. ¿Es por ventura enteramente libre el hombre que compromete su libertad por el largo espacio de ocho años, y que empieza por renunciar á gran parte de los derechos civiles de que goza? Es enteramente libre el hombre que, siendo mayor de edad, nunca puede comparecer en juicio sino acompañado de un patrono ó empleado público que lo represente? ¿Es enteramente libre el hombre que sin su consentimiento ni consultar su voluntad, puede ser cedido ó traspasado del poder de uno al poder de otro? Pues tal es el chino en Cuba.

Pero si él no es enteramente libre ni tampoco enteramente esclavo, síguese forzosamente que su posición fluctúa entre la libertad y la esclavitud, y que en cierta manera y de un modo muy imperfecto, se asemeja á la clase numerosa que vivió bajo del *colonato* romano en los primeros siglos del imperio, y á los siervos de la edad media. Digo que se asemeja en cierta manera y de un modo muy imperfecto, porque comparar situaciones tan diferentes sería un absurdo. Aquellos *colonos* y siervos permanecieron en perpétua servidumbre, y tan arraigada estaba en ellos esta condición, que se transmitía de padres á hijos. Atados á la tierra que cultivaban vivían y morían en ella, pues formando un vínculo indisoluble, ni la tierra podía enagenarse sin ellos, ni ellos sin la tierra.

Por más que se revuelva la historia de la antigüedad

y la edad media, no se encontrará ninguna clase que pueda equipararse á los chinos en Cuba. Bajando á los tiempos modernos, yo me guardaré bien de establecer aún la más remota comparacion entre esos asiáticos y los indios de América, que dados en *encomienda* á los pobladores desde el principio de la conquista, sufrieron, sin ser legalmente esclavos, una esclavitud mucho más dura que la de los mismos africanos. Donde únicamente hallo una condicion análoga á la de los chinos en Cuba, es en las Antillas francesas, cuando se empezaron á poblar en el siglo XVII. Entonces fueron introducidos en ellas por empresarios particulares muchos colonos de Francia; y como se les contrataba por tres años, para que mediante un salario cultivasen los campos y se dedicasen á otros servicios, llamémosles *engagés à terme* *six mois*. Los historiadores franceses de aquella época nos pintan con tristes colores la situacion de esos colonos, pues sin leyes ni garantías que los protegiesen, sus patronos los castigaban y trataban como esclavos. Esta materia es importante y curiosa para el estudio de las colonias extranjeras: pero si ahora me propusiese desenvolverla, ella me llevaría demasiado lejos.

Paréceme haber dicho, no todo lo que puedo, pero á lo ménos lo bastante para conocer que los chinos no son verdaderos esclavos, ni tampoco enteramente libres; y que aunquo fluctúan entre la esclavitud y la libertad, no por eso se les puede equiparar á los colonos y siervos de la antigüedad y edad media, ni mucho ménos á las *encomiendas* de América. Mas aún suponiendo que los chinos fuesen esclavos en Cuba ó que perteneciesen á otra clase verdaderamente servil, ¿sería esto para ellos alguna novedad tan extraña que nunca la hubiesen visto en su propia tierra? No por cierto, que la esclavitud es conocida en China desde muy antiguo; y para probar este aserto, daré á luz en otro número de *La América* un capítulo de una obra intitulada, *Historia de la esclavitud desde los tiempos más remotos hasta nuestros días*, obra que he dejado de la mano algunos años há, y que creo moriré sin concluirla, porque alejándose más y más cada día la esperanza de publicarla, confieso que me faltan fuerzas para trabajar en ella.

## VOTO PARTICULAR

del Sr. D. José Antonio Saco en la Junta de Informacion sobre reformas en Cuba y Puerto Rico, oponiéndose al nombramiento de Diputados á Córtes. (1)

SRES. PRESIDENTE Y COMISIONADOS:

Habíame alejado de este recinto por el espacio de cuatro meses dos causas poderosas; una física, que son mis crónicas dolencias, y otra política. Si la primera continúa, la segunda ha cesado con la presentacion del tercer Interrogatorio que es por donde se debió empezar la Informacion, segun el Real decreto de 25 de noviembre de 1865. No habiendo podido asistir á ninguna de las Conferencias celebradas acerca de los dos primeros Interrogatorios, quizá se querrá saber cuál es el juicio que ha formado sobre los puntos que contiene.

Al tráfico de negros, al alivio de la condicion de estos infelices, á la reglamentacion del trabajo agrícola y á la inmigracion de varias razas en Cuba se refiere todo lo sustancial del primer Interrogatorio. ¿Pero necesitaba yo venir á Madrid en 1866 para que el Gobierno y la Junta de Informacion supiesen lo que sobre estas materias pien-

(1) En el legajo donde se encontraban estos papeles, hemos hallado una nota que dice así:

"En este paquete está mi Voto presentado á la Junta de Informacion en Madrid en 1867, oponiéndome á que Cuba tuviese Diputados á Córtes. Este Voto se imprimió sin mi consentimiento ni aun conocimiento. Salí plagado de errores materiales y cuando recibí un ejemplar, lo corregí. Añadí tambien un papel, *La Política*, en que publiqué noticias muy interesantes sobre el embrion de las legislaturas primitivas en los primeros tiempos de las Antillas. Tengo que agregar á este trabajo un breve prólogo para inteligencia del lector."

Este prólogo no llegó á escribirlo el autor.

Al reproducir el Voto en esta *Coleccion*, hemos cotejado el original con el texto oficial publicado en Madrid en 1869 por el Ministerio de Ultramar, y notado que ambos coinciden en lo esencial. — V. M. M.

so? Sin que se me tache de inmodesto, permítaseme preguntar: ¿Quién atacó por primera vez en Cuba, en 1832, el infame contrabando africano cuando, por el más lamentable extravío de la opinion, se consideraba allí como un crimen de *lesa patria* revelar los males y peligros que envolvía? ¿Quién el que siempre ha suspirado por que en Cuba se cortase el cáncer que la devora? ¿Quién con más empeño ha defendido la blanca inmigracion contra las funestas razas asiática y africana? A mi no me toca decirlo, pues á esas preguntas responden los hechos y los escritos de toda mi vida.

Respecto al segundo Interrogatorio, doy con gusto mi aprobacion al luminoso informe en que mis dignos colegas desarrollaron el gran pensamiento de suprimir las Aduanas en Cuba, y de establecer entre ella y su metrópoli el comercio de cabotaje. ¿Ni cómo podría dejar de darlo, cuando hace dos años que publiqué en el extranjero un papel pidiendo esas mismas reformas económicas? Pero si esto pedí entonces, y pido ahora, no fué, ni es para que aquellos habitantes sean gravados con nuevos y pesados tributos, sino para que se les aligere la enorme carga que los oprime, y puedan vivir libres y contentos, unidos á su metrópoli. Yo creo que las Aduanas se pueden suprimir, no sólo sin echar nuevos impuestos al contribuyente, sino aun disminuyendo los que ha pagado hasta aquí; y á todo el que niegue esta verdad, bien fácil es demostrársela con los presupuestos en la mano.

Vengámos ya al tercer Interrogatorio, que es el político, y el más interesante de todos, porque sin él no se pueden realizar satisfactoriamente ni las reformas sociales, ni tampoco las económicas y administrativas. Miembro de la Comision especialmente nombrada para informar acerca de él, he suscrito el excelente dictámen extendido por mis amigos políticos en que piden amplias libertades para Cuba y Puerto-Rico (1). Pero al tener la hon-

(1) Los Sres. D. Manuel de Armas, D. José Morales Lomax, D. José Antonio Echevarría, Conde de Pozos Dulces, D. José J. Acosta, D. José Miguel Angulo y Heredia, D. Tomás Terry, D. Nicolás Azcárate, D. Manuel Ortega, D. Agustín Camelo, D. Francisco M. Quiñones, D. Antonio Rodríguez Ogea y D. José de la Cruz Castellanos. Los Sres. D. José Antonio Saco y D. Calixto Bernal se adhirieron al informe de estos Sres. sobre las preguntas 1.ª y 2.ª del Interrogatorio político, excepto en la parte en que se piden Diputados á Cortes para las provincias de Ultramar. El informe de aquéllos se presentó en 26 de marzo de 1867. — V. M.



ra de asociar mi nombre á los suyos, cábeme la desgracia de disentir de ellos en la parte del informe en que además de legislaturas provinciales se piden Diputados á Cortes por las Antillas. Si la materia sobre que recae esta divergencia, fuese de poca importancia, gustoso me callaría. Mas en cuestion de tan gran momento, yo no puedo resignarme á representar en la Junta el papel de los *monosílabos*, diciéndo simplemente *si* ó simplemente *no*. (1) Pues qué, cuando todos los Comisionados que la componen, han usado largamente del derecho de emitir sus opiniones, y de fundarlas en los motivos que han tenido para admitirlas ó rechazarlas; á mí me será negado lo que á todos es permitido? Yo no vengo aquí á pedir lo que el Gobierno y las Cortes estén dispuestos á conceder á las Antillas, sino á reclamar lo que en mi concepto son dignas de merecer. Cuba tiene el derecho de preguntarme, y yo el deber de responderle, por qué no admito Diputados, *ni con legislaturas provinciales, ni sin ellas*; y al exponer mis razones, no me circunscribiré á ese punto, sino que tambien trataré de otros del Interrogatorio, que me pareca conveniente esclarecer.

Hallámonos en presencia de cinco combinaciones ó sistemas de Gobierno para las Antillas españolas: la continuacion del estado actual: un cuerpo consultivo al lado del Gobierno en que haya necesariamente un número determinado de personas elegidas por las provincias de Ultramar: la *asimilacion* que hoy se bautiza con el nombre de Diputados ultramarinos en las Cortes: una legislatura provincial en cada una de las islas de Cuba y Puerto-Rico compuesta de dos asambleas, sin representantes en la Península; y esa misma legislatura con el aditamento de Diputados en el Congreso de la metrópoli. Tales son las cinco combinaciones que hoy se presentan ante la Junta de Informacion. Mas, ántes de proseguir, debo observar, que reconociendo y respetando en cada uno de los Sres. Comisionados el derecho que tienen de impugnar mis ideas, decidido estoy á no contestarles ni una sola palabra, pues el profundo silencio que guardaré, fúndase:

---

(1) Dije esto, porque algunos Comisionados pretendian que yo no fundase mi voto.

1° En que el decadente estado de mi salud ya no me permite entrar en debates de esta naturaleza: 2° En que estando intimamente persuadido de que ni ellos podrán convencerme á mí, ni yo tampoco á ellos, malgastáramos el tiempo que á otros objetos debemos consagrar. 3° En que hay cuestiones que no pueden debatirse entre ciertas personas, ni mucho ménos en ciertas circunstancias; y 4° En que no pretendo hacer triunfar mis ideas, que sé muy bien que no triunfarán, sino dejar consignados en este Voto los principios que, segun mi conciencia, son los únicos que pueden elevar las Antillas al grado de libertad y grandezas que son dignas de gozar.

Contra el régimen actual mucho he clamado desde mi primera juventud; pero ya nada diré; porque si se pretende mantenerlo, tanto peor para sus partidarios, pues recogerán, y no en lejano día, el amargo fruto que semejantes instituciones producirán. (1)

De pernicioso índole considero al cuerpo consultivo que se propone. Su idea ni es nueva ni española, pues viene del extranjero; mas no me fundo en esto para rechazarla, porque siempre estoy dispuesto á recibir todo lo que venga de fuera, con tal que sea conveniente al Gobierno y á la sociedad. Para que no andemos en tinieblas, preciso es subir á su origen, y trazar brevemente las vicisitudes que ha tenido en la tierra que le dió el ser.

Cuando por la ley de 24 de abril de 1833 recibieron las colonias francesas una organizacion política dotándolas de Consejos coloniales, se estableció que la isla de Bourbon ó Reunion, la Martinica, la Guadalupe con sus dependencias, y la Guayana tuviesen siete delegados al lado del Gobierno del Rey, esto es, dos cada una de las tres primeras, y uno la Guayana. Podía ser delegado todo francés de la edad de treinta años y que gozase de los derechos civiles y políticos: nombrados eran por el Consejo de cada colonia en su primera sesion, en la que se les señalaba tambien el sueldo que debían disfrutar, y su mision duraba tanto, cuanto el Consejo colonial que los elegía. Sus atribuciones consistían en reunirse en Consejo,

(1) Estas palabras escribí al término de marzo de 1837, y á los 18 meses se oyó el terrible grito de Vain.

dar al Gobierno del Rey las noticias é informes relativos á los intereses generales de las colonias, y seguir el efecto de las deliberaciones y votos de los Consejos coloniales.

Sobrevinieron los acontecimientos de 1848; proclamóse en Francia la república, y alzado el imperio sobre sus ruinas, alteróse la constitucion de las colonias francesas. La Guayana perdió todos sus derechos políticos. El Senado-consulta de 3 de mayo de 1854 dió nueva organizacion á la Martinica, Guadalupe y Reunion; suprimió en ellas los Consejos coloniales; en su lugar puso Consejos generales y estableció una Comision consultiva, compuesta de siete delegados, que debía permanecer cerca del ministro de la Marina y las Colonias. Estas perdieron en el cambio los derechos de que ántes gozaban.

Por la ley de 24 de abril de 1833, todos aquellos delegados eran elegidos por los Consejos coloniales, los cuales eran de nombramiento popular; mas los miembros de la Comision consultiva establecida por el mencionado Senado-consulta de 1854, son nombrados, cuatro por el Emperador y uno por el Consejo general de cada una de las tres colonias Martinica, Guadalupe y Reunion. Pero estos tres delegados elegidos por los Consejos generales, son tambien producto del Gobierno, porque dichos consejos no emanan como los Consejos coloniales del voto popular, pues que son nombrados, mitad por el Gobernador de cada colonia, y mitad por los Ayuntamientos, los cuales siendo tambien, segun el referido Senado-consulta, exclusivamente nombrados por el Gobernador de la colonia, resulta que en la eleccion de los delegados que forman la Comision consultiva, no entra ningun elemento popular.

Por la ley de 1833 los delegados podian ser elegidos indistintamente de entre todos los franceses de cualquier clase y condicion que fuesen; mas hoy este nombramiento está circunscrito por el Senado-consulta, pues no pueden serlo los miembros del Senado, los del Cuerpo legislativo y del Consejo de Estado, ni ningun francés investido de funciones que gocen de sueldo.

Esta Comision carece de toda iniciativa, sus deliberaciones son secretas, y sólo puede ocuparse en los negocios que le someta el ministro de las Colonias ó en su nombre el Director de este ramo.

Tal fué la índole de los delegados por la ley de 24 de abril de 1833, y tal es la de los que hoy componen la comision consultiva del Senado-consulta de 3 de mayo de 1854. Imposible es adivinar desde ahora cual sería el modo de elegir, y cuales las atribuciones que tendría el Cuerpo consultivo que se indica en la tercera pregunta del presente Interrogatorio; pero de su tenor aparece, que si en ese Cuerpo habría personas elegidas por las provincias de Ultramar, tambien se puede inferir que el gobierno se reserva la facultad de nombrar otras nacidas en las demás partes de la nacion. Aun suponiendo que aquéllas lo fuesen por un voto popular, bien se puede asegurar desde ahora que no sólo serían impotentes en su accion, é incapaces de llenar las justas aspiraciones y grandes necesidades de las Antillas, sino que sobre no tener una posicion política equivalente á la de los Diputados, estarían sujetas á los mismos inconvenientes que éstos y aun á otros más graves: porque en rigor se hallarían bajo la inmediata dependencia del Ministerio. Este Cuerpo consultivo está desacreditado en Francia, porque de él, poco ó ningun bien derivan las colonias, y aun uno de los mismos delegados de ellas acaba de escribir en el año próximo pasado contra tal institucion.

La tercera combinacion se reduce al llamamiento de Diputados ultramarinos á las Córtes, que es á lo que hoy se dá generalmente el nombre de *asimilacion*. Esta palabra y las de *leyes especiales* oyense resonar por do quiera, pero la *asimilacion* y las *leyes especiales*, son cosas incompatibles, pues aquélla destruye á éstas, y éstas á aquélla. A juzgar por el artículo 80 de la Constitucion de 1845 que es el 2º entre los adicionales á la de 1837, la *asimilacion* no es aplicable á las provincias del Ultramar, pues que en aquellos artículos se dice: «Las provincias de Ultramar serán gobernadas por leyes especiales.» Mas el Gobierno no considera obligatoria esta disposicion constitucional, toda vez que pregunta en su interrogatorio, si en caso de no ser aceptable la *asimilacion*, convendría la creacion del cuerpo consultivo de que acabo de hablar.

Para marchar sobre un terreno firme, conviene que antes preguntemos: ¿qué es *asimilar*? y ¿qué es *asimilacion*?

Signos las palabras de las ideas, si aquéllas son cla-

ras y precisas, éstas tambien lo serán: y si vagas ó confusas, éstas adoleceran de igual defecto. De aquí la necesidad de fijar con rigurosa exactitud el verdadero sentido de las palabras *asimilar*, *asimilacion*, pues su mala inteligencia en la materia que nos ocupa, puede ocasionar males trascendentales á las Antillas españolas. *Asimilar* ó *asemejar*, son voces derivadas del latin *assimilare*, así como *asimilacion* ó *semejanza* provienen de *assimilatio*. Lengua muy precisa fué la latina; pero aquí le faltó esta calidad, porque bajo de un mismo nombre expresó dos ideas del todo diferentes, abriendo así campo á la discusion. Hija nuestra lengua de aquélla, transmitióse tambien á nosotros el mismo ambiguo sentido de las antedichas palabras. En latin se entendió por *asimilacion*: ó la transformacion, la identificacion de una sustancia en otra, quedando una sola existencia, ó un solo cuerpo donde ántes había dos; ó la semejanza que una cosa tiene con otra, en cuyo caso, ninguna de las dos desaparece, pues que cada una conserva su existencia propia. Esta distincion en abstracto es muy sencilla; pero cuando se aplica á la política, es vaga y muy dada á equivocaciones.

La asimilacion en el órden físico, ó mejor dicho en el fisiológico, es la funcion por la cual los cuerpos organizados transforman y convierten en sustancia propia los seres exteriores, que entrando en su organismo, sirven para nutrirlos. Si éste es el sentido que se ha de dar á la *asimilacion* en política, entónces significa la desaparicion, la absorcion completa del ciudadano y de la provincia por el Estado; y yo no creo que tan monstruosa reconcentracion la acepte hoy en España ninguna persona sensata.

¿Pero qué es lo que se entiende en el Interrogatorio por *asimilacion*? El artículo 1.º dice: «¿Convendrá que todos los derechos políticos establecidos por las leyes para los habitantes de la Península é Islas adyacentes, se hagan extensivos á Cuba y á Puerto-Rico?» y el artículo 2.º se expresa así: «¿Supuesta la asimilacion de derechos políticos á que la pregunta anterior se refiere &c.» De estas palabras claramente se deduce, que el Interrogatorio entiende por *asimilacion* la extension á Cuba y á Puerto-Rico de todos los derechos políticos que tienen los habitantes de la Península é islas adyacentes. Yo no estoy de

acuerdo con este modo de entender la asimilacion, y la diverjencia en que nos hallamos, procede en mi concepto de que la lengua española ha tomado como sinónimos las voces *asimilar*, ó *asemejar* y *asimilacion* ó *semejanza*. Parece que todas las dudas se removerán, y que llegaremos á un sentido claro y determinado, si consideramos en política esas palabras como del todo diferentes, dándole á cada una un significado particular y exclusivo. Partiendo de este principio, aplicaré la palabra *asimilacion* solamente á los casos en que diversos pueblos ó provincias gocen de los mismos derechos, y sean además regidos todos por una misma Constitucion; y emplearé la palabra *semejanza* únicamente respecto de aquellos países que dependiendo unos de otros ó formando partes de un todo, tengan los mismos ó casi los mismos derechos; pero no consignados en una misma Constitucion. Fundado en estas ideas me atrevo á asegurar, que entre España y América no hubo verdadera asimilacion, sino en el corto período en que ambas regiones vivieron bajo el régimen de la Constitucion de 1812, incurriendo en grave error los que piensan que la asimilacion entre la metrópoli y sus colonias fué, desde la conquista la política tradicional de España.

La ordenanza 14 del Consejo sancionada por Felipe II y confirmada por Felipe IV en la 13 de 1636, sirvió de elemento á la ley 13, tit. 2.º, lib. 2.º de la Recopilacion de Indias, la cual dice:

«Porque siendo de una corona los Reinos de Castilla, y de las Indias, las *leyes y órden de Gobierno de los unos, y de los otros, deben lo más semejantes y conformes que ser pueda*, los de nuestro Consejo en las leyes y establecimientos que para aquellos Estados ordenaren, procuren reducir la *forma y manera del Gobierno de ellos al estilo y órden que son regidos y gobernados los Reinos de Castilla y de Leon*, en enanto hubiere lugar, y permitiero la diversidad, y diferencia de las tierras y naciones.

En esta ley se han apoyado muchos, para sostener que la asimilacion fué desde un principio la política seguida entre España y sus colonias del Nuevo Mundo. Pero su imparcial lectura manifiesta que ella no se refiere á la identidad de instituciones, pues en vez de emplear la pa-

labra asimilacion, sólo usa de las de *semejanza*, *conformidad*, *estilo* y *orden* con que debían ser gobernados aquellos países; palabras que lejos de significar identidad de instituciones, no dan á entender otra cosa sino que éstas debían parecerse y aproximarse en su espíritu á las de Castilla, en cuanto ser pudiese. Si la indicada ley se refiere á la identidad de instituciones, ¿cómo se explica la innumerable muchedumbre de Reales Cédulas, Ordenanzas y leyes que desde un principio se dictaron para los pueblos de América? ¿Cómo la existencia del voluminoso Código de Indias que aún rige en algunos casos? ¿Cómo á virtud de esa ley se quieren traer Diputados á Cortes, cuando al mismo tiempo de publicarla se mandó, según más adelante probaré, que ellos se congregasen en las Juntas especiales al efecto establecidas en América?

Enemigo de la *asimilacion* entre las Antillas y España, partidario decidido soy de la *semejanza*, porque con ésta se remueven de un golpe todos los obstáculos de aquella, y se consiguen todos los beneficios de la libertad en su más ámplia latitud, pudiendo establecerse todas las diferencias que exigen las circunstancias especiales de las Antillas. No hay en el mundo colonias tan bien gobernadas como las inglesas, y sin embargo, ningún hombre entendido cometerá el absurdo de decir que están asimiladas á su metrópoli; pues en rigor, entre ésta y aquéllas no hay más que una semejanza de instituciones.

Admitido el principio de la semejanza entre las instituciones de la Península y las de Cuba y Puerto-Rico, llegaremos sin ningún tropiezo al logro del objeto que nos proponemos. ¿Gozan los peninsulares del derecho electoral? Hácelo también por *semejanza* los habitantes de las Antillas. ¿Hay en la Península Ayuntamientos libremente elegidos? Háyalos por *semejanza* en Cuba y Puerto-Rico. ¿Hay diputaciones provinciales de libre eleccion en la metrópoli? Háyalas también por *semejanza* en las islas del Archipiélago de las Antillas. ¿Hay representantes que se congregan en la Península? Háyalos también por *semejanza* que se reúnan en Cuba y Puerto-Rico. ¿Hay en la Península libertad de imprenta? Háyalas también por *semejanza* en aquellas islas. De esta manera, sin identificar las instituciones de la Península con las de Cuba y

Puerto-Rico, se podrá dar á éstas toda la especialidad y libertad que tan justamente merecen.

Aun cuando la asimilacion ó identidad de instituciones hubiese sido la constante política de España con sus colonias, yo nunca admitiría la entrada en las Cortes de Diputados ultramarinos, porque esto perpetuaría la centralizacion en Madrid de los negocios que se deben resolver en Cuba y Puerto Rico. La materia es grave, porque de ella depende la verdadera libertad de las Antillas; y para ilustrarla bajo todos sus aspectos, subiré al origen de los Diputados ultramarinos en las Cortes españolas.

Las revueltas y desgracias que afligieron á la Nacion en 1808, despertaron en los españoles la noble idea de restablecer sus antiguas leyes fundamentales y de formar con las modificaciones, hijas de la experiencia de los siglos, una Constitucion que afianzase su libertad. Concedió aquella Constitucion, como era justo, iguales derechos civiles y políticos á las provincias hispano-americanas; mas no siendo entónces posible darles leyes especiales, á pesar de que su índole particular las reclamaba, se dispuso que todas enviasen sus representantes á las Cortes generales que en la Península se habían de congregar. Con alternativas varias, así se hizo hasta 1836 en que se abrió una nueva era política para los países de Ultramar que siempre se habían mantenido fieles á la bandera española.

En las Cortes Constituyentes de aquel año y del siguiente trató de darse á esos países una legislación especial, y al intento se nombró una comision, cuyo informe ocasionó largos debates en que no pudieron tomar parte los Diputados ultramarinos por habérseles cerrado las puertas de las Cortes. No faltaron Diputados que, fundándose en el llamamiento hecho á los de Ultramar por Real convocatoria y viendo que ya estaban en Madrid algunos de ellos y aun aprobándose los poderes de los de Puerto-Rico, pidieron que todos tomasen asiento en las Cortes, para que con su intervencion se discutiesen las leyes especiales que se proyectaba dar; pero esos justos deseos fueron desatendidos, y el 16 de abril de 1837 resolvieron las Cortes, á excepcion de dos votos, que las *Provincias de Ultramar no tuviesen representacion en la metrópoli y que fuesen gobernadas por leyes especiales.* Este voto tan



general y casi unánime, en medio de tantos Diputados pertenecientes á diversos partidos y de las más encontradas opiniones, pueda invocarse como prueba de la necesidad de que las Provincias de Ultramar sean regidas por leyes especiales y de que no conviene que tengan Diputados en las Cortes españolas.

Estas confirmaron su resolución, promulgando un decreto que sirvió de base al artículo segundo de los adicionales á la Constitución de 1837, que ya he citado más arriba, y con el que tambien se han conformado todas las posteriores. Si de esto quisiera yo prevaleirme, concluiría, que la cuestion de los Diputados ultramarinos está ya juzgada y condenada, y que por lo mismo no podría suscitarse de nuevo para volver á un sistema proscripto treinta años há por las Cortes constituyentes de 1837, y por las demás posteriores. Mas no me apoyaré en este argumento para ahogar la voz de ninguno que quiera promover tal cuestion; ántes al contrario, prescindo enteramente de él, y abro campo á todas las discusiones, porque no es la ley existente la que debe prevalecer en esta materia, sino la justicia y conveniencia de los pueblos ultramarinos. Plantada la cuestion en este terreno, preguntemos si es útil y provechoso á Cuba y Puerto-Rico la presencia de sus Diputados en las Cortes. Yo respondo francamente que nó, y fúndome en las razones que no paso inmediatamente á exponer, porque ántes debo deshacer la equivocacion de los que piensan que yo fuí partidario en otro tiempo de la venida de esos Diputados á las Cortes.

Reconozco que es muy honroso modificar ó cambiar las opiniones, cuando tambien se han modificado ó cambiado las circunstancias en que se apoyaban, ó cuando el hombre que las tenía, advierte que son erróneas. Pero en mi caso no acontece ni lo uno ni lo otro, porque la situacion especial de Cuba y Puerto-Rico es hoy la misma que ántes, mis convicciones son tan firmes y profundas como siempre lo han sido; mas como para probar esta aseveracion, necesito citar varios pasajes de mis opúsculos publicados sobre Cuba, imploro la benevolencia de los Señores que en este momento me escuchan.

Un papel que escribí en Madrid en enero de 1835, intitulado *Carta de un patriota, ó sea clamor de los cubanos*,

dirigido á sus procuradores á Córtes, y que se halla en la página 81 del tomo 3.º de la *Coleccion de mis papeles sobre la isla de Cuba*, que di á luz en París en 1858, fué el primero en que asomé el pensamiento de que á Cuba debía darse una representacion que ejerciese en ella sus derechos, y no en la metrópoli. Hé aquí lo que entónces dije:

*Junta provincial ó colonial.*—Una junta de esta especie, pues nada importan los nombres, con tal que estemos bien gobernados, seria uno de los presentes más aceptables que nuestros diputados pudieran hacer á su patria. Esta Junta, en cuya naturaleza no podemos entrar ahora, produciría ventajas incalculables, y siendo el intérprete más fiel entre Cuba y España, serviría para estrechar más y más los vínculos que deben unir á la madre con la hija.»

Aun no habían corrido dos años de escrito este papel, y ya habían surgido las graves cuestiones que terminaron por esclavizar á todas las provincias de Ultramar. De estos acontecimientos nació la *Protesta* que como Diputado electo por Cuba extendí el 21 de febrero de 1837, y que firmada tambien por mis dignos colegas que á la sazón se hallaban en Madrid, fué presentada á las Córtes entónces reunidas. ¿Mas habrá quien se funde en esa Protesta para pretender que yo fuí entónces partidario de la diputacion americana en Córtes?

Esta Protesta no es, ni pudo ser un plan ni sistema de gobierno que para las Antillas se proponía: fué tan sólo un acto especial, hijo de las más extraordinarias circunstancias, para reclamar contra la violencia que las despojaba de cuantos derechos políticos habían adquirido por la Constitucion de 1812. Vigente estaba esa Constitucion, y en virtud de ella las provincias de Ultramar gozaban del pleno derecho de tener representantes en las Córtes de las cuales formaban parte integrante. Habíase expedido una Real convocatoria á todas las provincias que componían la Monarquía, y obedeciendo al llamamiento general del Gobierno, hicieron en Ultramar las elecciones; surcado habían los mares algunos de sus diputados: llegan á Madrid, y cuando enderezan sus pasos hacia el santuario de las leyes, donde estaban congregados los demás representantes de la nacion, una mano violenta, armada de la fuerza, y quebrantando el mismo código fundamental que se

acababa de jurar, les cierra las puertas del Congreso y los arroja de su recinto. En tan terrible situación, ¿no era imperioso deber de los diputados ultramarinos protestar contra tal violencia, y reclamar el incontestable título que tenían para sentarse en aquellas Cortes? Si entonces se hubiera empezado, no por arrancar todos sus derechos á los pueblos ultramarinos, sino por presentar un proyecto orgánico de leyes especiales en que afianzada la libertad, se les hubiese permitido ejercerla completamente en su propia tierra por medio de legislaturas provinciales, yo, en vez de lanzar aquella protesta, habría entonado un cántico á las Cortes de 1837. Tan cierto es que yo no era entonces partidario de Diputados americanos en la metrópoli, sino de legislaturas en las Antillas, que cuando en aquellos mismos días impugné el informe de la comisión nombrada por las Cortes para que diese su dictámen acerca del régimen futuro de las provincias de Ultramar y de la admisión ó exclusión de sus diputados, me expresé en los términos siguientes en el *Exámen analítico* que imprimí en Madrid, y cuyo pasaje se halla en la página 116 del citado tomo 3.º:

«Muy explícito quiero ser en esta parte de mi discurso. De acuerdo estoy con la Comisión, y reconozco tal vez con más motivo que ella, la necesidad de que los países ultramarinos sean gobernados por una legislación especial. Pero si en este punto convengo, apártome de su sentir, no sólo en cuanto á la naturaleza de los argumentos que emplea, sino en cuanto á los medios de que piensa valerse, y al carácter odioso que se propone dar á las mismas leyes que recomienda. Que las provincias de Ultramar tengan constituciones particulares formadas con intervención de sus representantes; que en ellas se establezcan asambleas provinciales, popular y periódicamente elegidas; en las que se propongan y discutan las leyes que deben regirlas, se examinen y aprueben todos sus presupuestos, y se ventilen otras materias que no es del caso mencionar; que se desarmen á los gobernantes de las dictatoriales facultades de que están formidablemente revestidos; que se rompan las trabas de la prensa, restituyendo su libertad á este órgano del entendimiento; que se afiancen en fin, por medio de leyes protectoras, los derechos y garantías de aquellos habitantes ultrajados: hé aquí cuáles han sido,

cuáles son, y cuáles serán mis ardientes y constantes deseos. Pero la Comision, entrando en lucha abierta con ellos, me pone en el amargo conflicto de combatirla, no porque pida *leyes especiales para Cuba*, pues que segun he dicho estamos acordos en este punto; sino por los medios de que pretende servirse para formarlas, y de la ignominiosa esclavitud en que con ellas piensa sumerjirnos. Sentadas estas ideas marcharé con paso más libre, y siguiendo de cerca las huellas de la Comision, podré señalar á la luz de un claro exámen los escollos en que ha tocado, y los parajes donde ha caido.»

Esto escribí muy pocos dias despues de la presentacion de la Protesta á las Córtes, y aún no había corrido un mes, cuando publiqué el *Paralelo entre la Isla de Cuba y algunas colonias inglesas*; Paralelo que no es otra cosa sino una entusiasta apología de las legislaturas con que la Gran Bretaña rige á sus colonias, sin que éstas hayan tenido jamás representacion en el Parlamento. La *Protesta* el *Exámen analítico* y el *Paralelo*, todos salieron á luz en los primeros meses de 1837.

Al finalizar el 1846, y en el trascurso del 1847, tuve una ruidosa polémica con uno de los empleados más entendidos y capaces que de la metrópoli han pasado á Cuba y que hoy ocupa dignamente un puesto distinguido en el Senado. En esa polémica hay un pasaje relativo al asunto que me ocupa, y que hallándose en la página 304 del dicho tomo 3.º, dice así:

«Indiqué tambien que aquella isla (la de Cuba) necesitaba de una organizacion política, semejante en lo posible á la de las colonias inglesas.» A esta indicacion se me contestó, que esto era fácil de decir, pero no de hacer, y yo entónces repliqué: «Si es fácil de decir que Cuba se organice segun las colonias inglesas, tambien es fácil de hacer, y la dificultad sólo está en la falta de querer...» Y más adelante proseguí: «No se tema nada por mi paciencia: muchos años há que está á prueba y á trineque de que mis paisanos lograsen en su propia tierra una asamblea colonial ó provincial, no en el nombre sino en la sustancia, haría muy gustoso el sacrificio de verlos etc.»

En otra polémica que tuve con el *Constitucional* de Madrid, á fines de 1851 y principios de 1852, dije en la página

473 del ya citado tomo 3.º lo que paso á transcribir:

«De la raza española tengo yo más alta opinion que el *Constitucional*, y créola muy digna y muy capaz de ejercer la libertad, ora en el viejo, ora en el nuevo Continente. La libertad, aunque severa en sus principios, es muy elástica y flexible en la práctica, y puede aplicarse á los pueblos en grados diferentes, y bajo de formas diversas. No se trata, no, de copiar ciegamente las instituciones de las colonias británicas; lo que se pide, es que desaparezca de Cuba el despotismo, y que se establezca en ella un régimen liberal, que siendo semejante en su espíritu al de la legislación colonial de Inglaterra, procure ajustarse á las bases de la libertad española y á las costumbres, hábitos y tradiciones de la raza española.»

Otros pasajes de mis obras pudiera citar, en que siempre he presentado la misma idea; mas cerraré este asunto, transcribiendo como de fecha más reciente un párrafo de la primera *Carta* que en 22 de marzo de 1865 dirigí desde París al Excmo. Sr. D. Manuel Seijas Lozano, ex-ministro de Ultramar, y que se publicó en la *América* de Madrid del 12 de abril de aquel año. (1)

«Permitido es á V. E. pensar, que si yo alzo ahora mi voz, es con el interesado fin de que á Cuba se den Diputados, para que se me vuelva á elegir. En este punto, mi conciencia es sólo mi juez. Pero si cuando tenía delante de mí una larga carrera, llena de brillantes esperanzas, nunca aspiré á tal honor, ¿cómo pudiera ambicionarlo, cuando los años, y más que los años, los trabajos de una tormentosa vida me tienen ya tan cerca del sepulcro? No son, en mi concepto, Diputados los que pueden hacer á Cuba completamente feliz. Otra forma de gobierno es la que yo creo que le conviene, aunque estoy convencido de que no la alcanzaré; y si pudiera alegrarme de que Diputados cubanos volviesen á las Córtes, sería tan sólo como un signo de que se rompe con lo pasado, y que se entra al fin en una nueva senda.»

Queda, pues, demostrado que, desde mi temprana juventud hasta mi vejez, siempre he sustentado la misma opinion en cuanto á legislaturas provinciales; y que res-

(1) V. la página 196 de esta Colección.

pecto á Diputados ultramarinos nunca he deseado que viniesen á las Córtes. ¿Pero cuáles son las razones que me han movido á no tener tales deseos? Pasemos á manifestarlas.

1.º Uno de los requisitos más esenciales para la formación de buenas leyes, es, que el legislador conozca perfectamente la índole y las necesidades del pueblo para quien legisla. ¿Pero los legisladores que componen las Córtes, tienen esos conocimientos acerca de las Antillas españolas? Nadie se atreverá á sostenerlo. En tales circunstancias, ¿qué prestigio ni autoridad podrán tener en Cuba y Puerto-Rico unas leyes dictadas por hombres que ignoran las materias sobre que legislan? Esta sola consideración revela todo el mal que se podrá ocasionar así en el orden material como en el moral y político.

Diráse, que los Diputados ultramarinos ilustrarán á las Córtes y que de este modo se asegurará el acierto en las leyes que se dicten. Es preciso no hacernos ilusión sobre el papel que esos Diputados representarán en las Córtes. En medio de las pasiones que siempre irritan á los diferentes partidos que se combaten en la arena parlamentaria, y de los encontrados intereses que los arrastran, ¿será escuchada con serena imparcialidad la voz de los representantes de Puerto-Rico y de Cuba? ¿No serán ahogados sus clamores por la formidable oposición que muchas veces encontrarán en el Congreso, ya por considerarse sus proyectos como inútiles, ya inoportunos, ya contrarios á los intereses de la metrópoli? Nunca se olvide que el número de Diputados de aquellas dos Islas siempre será insignificante respecto al de los Diputados peninsulares y de islas adyacentes, los cuales subieron en el último Congreso, según la ley electoral de 19 de setiembre de 1865, al total de 347; y si á esto se agregan 250 ó 300 Senadores, de los que á veces ha habido más, entónces se sentirá la fuerza irresistible con que los representantes ultramarinos serian abrumados en las Córtes.

Esto sentado, y aún admitiendo la mejor intención en los Diputados peninsulares, jamás se podrá vencer ni subsanar el vicio capital de que adolecerán las leyes para Ultramar; porque éstas, ó serán propuestas por los representantes de las Antillas, ó por el Gobierno.

Si por aquéllos, de esperar es, que serán favorables á

las dos islas. Supongamos que son votadas por una mayoría del Congreso; ¿pero se podrá afirmar que esa mayoría ha procedido con verdadero conocimiento y con íntima convicción de que es justo y saludable á las Antillas lo que ha votado, cuando ignora sus necesidades, y cuando los elementos de su informacion sólo descansan en la relacion de lo que haya oído á algunos Diputados ultramarinos; relacion que en parte ó en su totalidad bien pudiera ser errónea, ó apasionada, ó estar expuesta á otros inconvenientes? A la verdad que este modo de legislar, por útil que pudiera ser en alguno que otro caso á las Antillas españolas, es por lo comun un modo muy vicioso de legislar.

¿Son propuestas las leyes por el Gobierno? Si son favorables á las Antillas y las vota una mayoría del Congreso, siempre resultará lo que ya he dicho, y es, que esa mayoría vota sobre una materia que no entiende, y que por lo mismo no será más que ciego instrumento en manos del Gobierno. ¿Son contrarias á los intereses de Cuba y Puerto-Rico? Consolatorio es pensar, que no faltarán Diputados antillanos que las combatan; pero como el Gobierno ha de tener siempre mayoría en el Congreso, so pena de caer, ó de disolver las Cortes, esas leyes serán votadas. Y si esto ha de suceder á pesar de ser contrarias á los intereses de Cuba y Puerto-Rico, ¿de qué sirve entonces la presencia de esos Diputados en el Congreso? ¿Cómo se recibirían en aquellas islas, unas leyes dictadas contra la opinion y voto de sus legítimos representantes? ¿No se irritarían los ánimos de aquellos isleños y se empezarían á rumiar planes que los sacasen de tan comprometida situacion? Ved aquí una de las consecuencias fatales á que forzosamente nos arrastraría la presencia de Diputados ultramarinos en las Cortes.

2.º Los intereses de las Antillas sufrirían gravemente enviando Diputados á la metrópoli. Los asuntos peculiares á ésta, que pesan sobre las Cortes, son tantos, de tan distinta naturaleza y á veces de tanta urgencia, que no se pueden resolver con la prontitud y oportunidad que el bien público reclama. En semejante estado ¿cómo podrá el Congreso volver su atencion á los negocios ultramarinos, que sobre no conocer, los considera de mucha ménos im-

portancia que los que se agitan en la Península? ¿qué retardo tan considerable no experimentarían los asuntos más vitales de aquellas islas? ¿Qué clamor no se alzaría contra sus Diputados acusándolos de negligencia por no satisfacer á sus más urgentes necesidades? ¿No empezarían muy pronto á sentir la ineficacia ó poca influencia de sus Diputados en las Cortes, y á desear tambien con más fuerza una legislatura local, que no esté expuesta á los retardos y perjuicios inevitables que ocasiona el sistema de Diputados que impugno?

Pero no son los negocios de verdadera utilidad para la Península los únicos que paralizarían la pronta y oportuna resolución de los intereses de aquellas islas. Sólo tambien la multitud de partidos que desgraciadamente desgarran á la Península, las pasiones que tristemente los enfierecen y los ardientes debates en que con frecuencia se malgasta el tiempo que debiera emplearse en provecho y honra de España. Tal es el actual estado de nuestra nación, y, aunque me duele decirlo, tal será por algun tiempo. Con semejante perspectiva, ¿cabe esperar que en las Cortes se dé cumplido despacho á las numerosas é interesantes cuestiones en que están cifradas la libertad y ventura de las Antillas españolas?

Ni es posible que este bien se consiga, porque esa deplorable condicion de los partidos ocasiona frecuentemente cambios de ministerios, y suspensiones y disoluciones de Cortes. Las Antillas entre tanto carecerían de Diputados, no por causas que les fuesen propias, sino por otras extrañas, y todos los proyectos procedentes de la iniciativa, ya de sus representantes, ya del Gobierno, quedarían interrumpidos y paralizados con grave detrimento de aquellas islas.

3.º Por doloroso que sea, fuerza es decir la verdad. Creo firmemente que entre los Diputados ultramarinos, ora residan en la Península, ora vengan de las Antillas, habrá algunos que jamás harán traicion á los intereses del país que los honre con su confianza; pero flaca nuestra naturaleza, y más flaca todavia por la detestable educacion política que hemos recibido en Cuba y Puerto-Rico, creo tambien que habrá otros que, olvidándose de sus deberes, convertirán la diputacion en escabel de sus personales



pretensiones. Cuando Cuba gozó de derechos políticos, sólo eran cuatro ó cinco los Diputados que nombraba para representarla en Cortes; mas á pesar de tan corto número, y de que por lo mismo se podía hacer una buena eleccion, si bien hubo algunos que desempeñaron dignamente su alta mision, otros sólo aspiraron á ella por bastardos fines. Más de un ejemplo pudiera yo citar, y todavía resuenan en mis oídos las palabras que uno de aquellos Diputados pronunció treinta y tres años há: *Yo he venido, así dijo, yo he venido á Madrid á sacrificarme en las aras del ministerio. ¿Y cuántas y cuántas víctimas de este género no veríamos, si se llamasen á las Cortes Diputados por las Antillas, sobre todo, cuando su número, atendida la actual poblacion, se habría de aumentar considerablemente?* La historia de lo pasado nos revela el porvenir.

Bien podrá replicarse que lo mismo acontecería con las personas nombradas para la legislatura cubana ó portorriqueña; pero enorme es la diferencia entre venir de Diputado á España y serlo para la legislatura de aquellas islas. La diputacion en la metrópoli presenta un teatro incomparablemente más grande que en Cuba ó Puerto Rico, y de aquí nacerán en muchos, injustas y aun culpables aspiraciones para venir á las Cortes. Un ministro tiene infinitamente más medios de seducccion ó de corrupcion, que un jefe superior de aquellas islas, pues éste no puede dar embajadas, títulos, senadurías, condecoraciones, empleos, ni otros destinos de que aquel puede profusamente disponer. Ni se diga, que esto se impediría prohibiendo que los Diputados acepten empleos y honores durante cierto término despues de concluido su encargo. Sometidos los Diputados de Ultramar á la ley comun de los Diputados peninsulares, sería preciso, que se alterase la constitucion para que esas prohibiciones alcanzasen á todos indistintamente y nadie puede asegurar que esto se haría, y que sería la regla constante en un país tan expuesto como España á vaivenes y trastornos. Por otra parte, por más restricciones que se pudiesen, nunca se podría obtener un resultado feliz, porque un gobierno tiene en su mano mil medios de seducccion que puede emplear eludiendo todas las leyes. En este punto no hay más sólida garantía que la moralidad.

Reflexiónese tambien, que cuando el Diputado estuviere en Cuba, no sería tan fácil que se apartase de sus deberes, como cuando se halle en España, porque allí es más conocido de todos, está en medio de sus comitentes y por lo mismo más sujeto á la vigilancia y censura de la pública opinion.

Esta última consideracion, es otro de los argumentos contra la idea de que vengan á las Córtes Diputados ultramarinos. Casi á dos mil leguas del país que representan, no es dable que en las cuestiones que se agiten, pueda la opinion pública ilustrarlos con la prontitud que se requiere, ni tampoco contenerlos á tiempo en sus extravíos para enderezarlos á buena parte. Una de las ventajas del sistema representativo consiste en que la opinion pública pueda ejercer su poderoso influjo sobre sus representantes; no sólo mes por mes y semana por semana, sino día por día, y hasta hora por hora, si es necesario. De este inmenso beneficio están privados los pueblos ultramarinos por la distancia que los separa de sus Diputados en las Córtes. A veces acontecería que la primera noticia que tuviesen de lo que en ella se discutiera, les iría acompañada de una votacion irrevocable; de manera que por importante que fuese el asunto que se hubiese resuelto, la opinion de Cuba y Puerto-Rico, no podría ser oportunamente escuchada, y sus representantes encontrarían en este silencio una disculpa hasta cierto grado admisible, de cualquier error en que hubieren incurrido. Este es el mal irremediable de unas leyes dictadas por legisladores que se hallan á tan remota distancia de sus representados.

4.º El llamamiento de Diputados ultramarinos á las Córtes, falsearía en las Antillas el sistema representativo, porque si en España pueden ejercer fácilmente el derecho de diputacion todos aquellos á quienes lo otorga la ley, en Cuba y Puerto-Rico, no podrán practicarlo muchos de los mismos á quienes ella lo concede. Poco distantes del centro del Gobierno, los Diputados peninsulares pueden acudir á las Córtes en algunas horas hasta de los confines del territorio, haciendo muy pocos gastos, sin alejarse apenas de sus familias y bienes, pudiendo tener diariamente noticias de tan caros objetos, ocurrir oportunamente á

cualquiera novedad, y aún volver en brevísimo tiempo á sus hogares si el caso lo requiere. Nada de esto podrán hacer los Diputados que vengan de las Antillas.

¿Elevárase en ellas, á tal punto la renta para ser Diputado, que sólo puedan ser elegidos los ricos? Entonces la diputacion sería allí un privilegio, mientras que en la metrópoli no lo es, como no debe serlo. Si solamente los ricos han de ser Diputados por las Antillas españolas, téngase desde ahora por cierto que muchos no vendrán á Madrid á ejercer la diputacion, porque no podrán separarse ni de sus bienes ni de sus familias. En Europa abundan ricos que cuentan con una renta fija, procedente ya de tierras que ni cultivan ni administran por sí, ya de capitales empleados en los fondos públicos, ó en algunas empresas bastante sólidas. Estas personas por lo tanto, pueden ausentarse de su país con sus familias, gozando siempre de la misma renta, y sin comprometer su fortuna. Pero no es esta la situacion de los que se dicen opulentos en Cuba ó en Puerto-Rico, porque el producto de sus capitales es muy variable y perecedero, así como lo son los elementos de que se componen; siendo allí la propiedad de tal naturaleza, que casi siempre exige la presencia y continua vigilancia del amo, por ser muy pocos los que se hallan exentos de esta condicion comun. Es, pues, seguro que de los que se denominan ricos en las Antillas, pocos vendrán, y que de entre esos pocos, algunos lo harán más por utilidad propia que por servir al país.

¿Se permitirá que los pobres sean elegidos? Entónces será menester que se les señalen dietas para subsistir en Madrid durante su diputacion. Pero esto supone, que se establecerá en las Antillas el sufragio universal, porque sería la más absurda contradiccion, que siendo el cargo de Diputado de mucha más responsabilidad é importancia que el derecho de ser elector, á éste por ser pobre se le niegue lo que al primero se concede. Por eso fué por lo que la Constitucion de 1812 estableció en toda la Monarquía el sufragio universal, sin decirlo expresamente; sufragio que hoy no conviene á la metrópoli, ni tampoco á las provincias de Ultramar. De todo esto se infiere, que de la clase pobre no saldrán los Diputados, y que si de ella saliesen, caeríamos con más motivo en los inconvenientes ya ex-

presados, pues aunque hay pobres muy honrados, no es prudente ni político, poner á prueba la pobreza.

¿Se concede la aptitud de ser Diputado, no sólo á los ricos sino tambien á los que gocean de una mediana fortuna? En este último caso resultará, que los habitantes de las Antillas, llamados por la ley á la diputacion, aunque tengan una renta equivalente ó superior á la de los españoles residentes en la metrópoli, no podrán ejercerla de hecho mientras que sus hermanos de la Península que se hallen en igual estado podrán ocupar un asiento en las Cortes. Supongamos que un Diputado peninsular electo en la metrópoli, goce de tres mil pesos de renta anual, claro es, que este Diputado puede desempeñar decorosamente su diputacion. Pero supongamos tambien que el Diputado electo por Cuba ó Puerto-Rico tenga la misma renta, ¿podrá él sufragar todos los gastos de viaje, de permanencia en Madrid y de retorno á su Antilla, sobre todo si tiene familia? Imposible. ¿Dejará ésta allá en el suelo natal? ¿Mas habrá muchos hombres que se resignen á tal sacrificio? ¿Vendrán á Madrid acompañados de sus familias? Para acometer tamaña empresa, y vivir con mediana decencia en esta capital, sería preciso una renta, no de tres mil pesos, sino á lo ménos del doble ó triple. ¿Pero cuántos son los que puedan ó que estén dispuestos á hacer gastos tan considerables, dejando sus intereses y ocupaciones para venir á ejercer una diputacion, que segun la creencia general de aquellos pueblos, á lo ménos del de Cuba que es el que yo conozco, es de tan poco provecho para su bien y verdadera libertad?

La consecuencia necesaria de todo lo dicho es, que los ricos no vendrían sino en corto número, y que algunos de éste, no tanto sería por patriotismo, cuanto por miras privadas; que los pobres quedarían completamente eliminados de toda diputacion, á no ser que se cayese en el sufragio universal y en el señalamiento de dietas; y que muchos poseedores de medianas fortunas se retraerían de una diputacion que tantos perjuicios les ocasionara. No son éstas simples conjeturas, sino hechos que han pasado en épocas anteriores, pues en Cuba se vió que personas propuestas para la diputacion á Cortes, la rehusaron por tener ante sus ojos el ejemplo de

que entre los pocos que vinieron á desempeñarla, algunos encontraron á su vuelta su fortuna muy quebrantada. Por eso fué que en 1820 y en 1824, parte de los nombramientos de los Diputados cubanos recayeron en personas domiciliadas en Madrid desde muy largos años.

Esto no acontecerá si nos circunscribimos á nuestra legislatura provincial, por que en ellas se concentrarán todas las fuerzas vivas del país. El rico, y el ciudadano de mediana fortuna, el aventajado jurisconsulto y el inteligente hacendado, el médico entendido y el hombre que se dedica á otras científicas profesiones, el activo comerciante y el industrial laborioso, todos, todos ocuparán un modesto asiento en aquella asamblea, sin emprender largas, y costosas peregrinaciones por estas tierras de Europa.

El nombramiento de Diputados al Congreso exige que éntre en el Senado un número proporcional de Senadores cubanos y porto-riqueños. ¿Pero cuántos de éstos vendrían á ocupar sus asientos? A juzgar de lo futuro por lo pasado y por lo presente, debo concluir que muy pocos serían, pues de todos los Senadores cubanos hasta aquí nombrados, solamente asisten al Senado las personas que residen en Madrid, despues de haberse alejado de una vez de su isla natal. En virtud de todo lo expuesto se puede vaticinar que al lado de nobles patricios, se verían aspirar al Congreso y al Senado hombres que sólo buscasen sus medros personales.

5.ª De grande importancia es en el sistema representativo la reeleccion de Diputados por los conocimientos y hábitos parlamentarios que éstos adquieren; pero las Antillas carecerían de esta ventaja si enviásen representantes á la metrópoli, porque la reeleccion envolvería la necesidad de permanencia perpétua en la Corte, ó la penosa tarea de hacer continuos viajes pasando y repasando los mares, sobre todo si tiene familia. Es, pues, forzoso para que esa reeleccion se efectúe, que los Diputados antillanos se resignen á vivir fuera de su tierra, y á renunciar á todas las comodidades y afectos de que en ella gocen; y esta consideracion es bastante poderosa por sí sola para retraer á muchos del cargo de Diputado á Cortes. Por otra parte, la índole misma del

Gobierno representativo exige que entre los representantes y los representados haya frecuente y activa comunicacion, para que unos y otros puedan penetrarse de sus reciprocas ideas y sentimientos, lo que no puede conseguirse cuando están separados por largas distancias y por largo tiempo. Esto es lo que irremediabilmente aconteceria con Diputados permanentes en Madrid. Aun hay más todavía. Con indecible placer reconozco que entre estos Diputados habria algunos que jamás se olvidarian de los intereses de su patria, y que siempre los defenderian con talento, habilidad y la más laudable abnegacion; pero al mismo tiempo habria otros que despues de haber dado un adios eterno al suelo en que nacieron, ya no estarian animados de los mismos sentimientos.—¿No iria la ausencia aflojando poco á poco los vínculos que los ligaban? ¿No se entibiarían con las nuevas relaciones que acá contrageran las antiguas que allá dejaran? Ojalá que estas ideas fuesen hijas de la imaginacion de un visionario; pero yo he conocido cubanos á quienes una larga permanencia en la Península no sólo les ha debilitado y apagado el amor que en otro tiempo profesaban á su patria, sino que los ha hecho del todo indiferentes á su suerte. Tal es la humana naturaleza.

6.° Ni estoy tampoco conforme con el plan de que existiendo legislaturas en las Antillas, éstas envíen Diputados á las Cortes, para que tomen parte en los asuntos de Cuba y Puerto-Rico, que se rocen con los generales de la nacion. Pero yo pregunto ¿si no se conceden las legislaturas que se piden y si Diputados, no quedarán entonces frustradas las esperanzas que se han concebido con ese proyecto? Porque es forzoso convenir en que es mucho ménos improbable que se concedan Diputados que legislaturas provinciales, y denegadas éstas, venimos á caer en Diputados que tratarían no sólo de los negocios de las Antillas con su metrópoli, sino tambien de los exclusivamente locales. Esto sería la concentracion en la metrópoli de todos los asuntos que se deben decidir en Ultramar, y tal concentracion, á pesar del barniz de libertad que se le quiera dar cubriéndose con la pantalla de los Diputados, no sería otra cosa en realidad que un sistema más ó ménos absoluto con visos de libertad. Mas yo supongo que

se nos déen legislatura y Diputados. Aun así léjos de evitarse los inconvenientes que llevo expuestos, nacerían otros de diversa naturaleza.

Ese plan mixto de legislaturas en las provincias y de Diputados en la metrópoli, supone que la potestad legislativa de aquellas se dividiría en dos partes; una permanente allá y otra acá, ocupándose la primera exclusivamente en los asuntos *locales*, así como la segunda en los asuntos *generales*.

De esas dos partes, la de las Antillas sería la más débil, y la de la Península la más fuerte, porque los Diputados cubanos y porto-riqueños, no se congregarian solos en Madrid, sino que se reunirían á los de la metrópoli; formando todos por su gran número, por su prestigio y por sus muchas y soberanas facultades, un cuerpo tan poderoso que anonadaría las pequeñas legislaturas de aquellas dos islas.

Diráse que esto se impediría, trazando exactamente una línea divisoria dentro de cuyos límites respectivos debieran quedar encerradas las atribuciones de los Diputados ultramarinos que viniesen á las Cortes, y las de los representantes que formasen las legislaturas provinciales; y que esto se conseguiría reservando exclusivamente á los primeros todos los asuntos *generales*, y á los segundos todos los puramente *locales*. Pero esta teoría fácil y seductora en la apariencia, es muy difícil y peligrosa en la práctica, porque la tendencia innata de todo poder, es ensanchar el círculo de sus atribuciones. De aquí nacerán conflictos entre las dos fracciones de esa potestad legislativa así dividida; y como la fraccion que existiría en la Península sería incomparablemente más fuerte que la de las Antillas, estas empezarian poco á poco á perder las facultades que les fueran concedidas por sus constituciones especiales.

No es tan fácil como al primer golpe de vista aparece, á lo ménos en muchos casos, marcar exactamente la línea divisoria entre los asuntos propiamente locales que incumban á las legislaturas, y los asuntos generales que correspondan á las Cortes; pues á veces esto depende más de la prudencia y de la buena armonía que se quiera guardar que de la íntima naturaleza de las cosas.

En la múltiple variedad de las relaciones que tienen los objetos unos con otros, no siempre es dado considerarlos aisladamente, pues todos cual más, cual ménos, tienen entre sí diferentes puntos de contacto y que dan márgen á que si bajo de un aspecto se puedan considerar como particulares ó locales, bajo de otro se puedan mirar hasta cierto punto como generales. Pongamos algunos ejemplos. La instruccion primaria de la isla de Cuba es asunto puramente local y por tanto debe confiarse exclusivamente á su legislatura. Pues bien; esa misma instruccion se puede igualmente considerar por sus relaciones é influencias como un objeto general, y por lo mismo ya incumbe á los Diputados ultramarinos en las Córtes, pues podrá alegarse, no sólo que el honor nacional está interesado en que los habitantes de Cuba y Puerto-Rico adquieran alto grado de ilustracion, sino que la enseñanza que se diere á esos isleños podrá influir poderosamente en las ideas que se les infundan respecto de su metrópoli, y de los planes futuros que contra ella puedan concebir. He aquí cómo este punto que superficialmente mirado no ofrece ninguna dificultad, las presenta muy graves cuando se examina bajo de sus distintas relaciones, y que podría ser el origen de conflictos desagradables.

Lo que digo de la instruccion se puede aplicar á otros ramos que parecen todavía más locales, como son los caminos, puentes, canales y telégrafos. ¿Quién responde de que Diputados antillanos ó peninsulares, no intentasen alguna vez reclamar la intervencion de las Córtes en la construccion y conservacion de aquellas mismas vías de comunicacion? Porque bien podrían fundarse para ello en que á las Córtes toca promover y fomentar la prosperidad de la nacion, y que siendo Cuba y Puerto-Rico una parte de ella, el poder legislativo metropolitano tiene derecho incontestable á tomar parte activa y directa en aquellos objetos. Lo mismo podría acontecer en cuanto á la inmigracion ó colonizacion, que es, y por algun tiempo será uno de los asuntos más vitales de Cuba. Bien veo que para remover toda duda, estos, y otros asuntos podrán declararse como atribuciones propias de las legislaturas coloniales; pero sobre ser



muy difícil especificarlos todos, queda siempre el campo abierto para disputar si deben pertenecer á dichas legislaturas, ó á los diputados que vengan á las Cortes.

Nótese tambien que esta division de la potestad legislativa, introduce la *disimilacion* en el mismo punto en que cabalmente se quiere establecer la *asimilacion*, por que en la Península la potestad legislativa de las Cortes es una é indivisible, y á negarlo nadie se atreverá, fundándose en que hay dos cuerpos legisladores, cuales son el Congreso y el Senado. Estos dos cuerpos se congregan en un mismo lugar, pues el uno no está en Barcelona, y el otro en Cádiz, sino que ambos se juntan en Madrid. Las facultades del Congreso son las mismas que las del Senado, y las del Senado las mismas que las del Congreso. Ambos deliberan sobre los mismos asuntos y ningun acto puede transformarse en ley, sin que sea recíprocamente discentido y aprobado por la una y por la otra Cámara. Esto no sucedería con la legislatura provincial y los diputados ultramarinos en las Cortes, porque aquélla se reuniría en la provincia ultramarina y éstos en la metrópoli; aquélla deliberaría sobre asuntos que no serían de la incumbencia de éstos, y éstos deliberarían á su vez sobre asuntos que no serían de la incumbencia de aquélla. La legislatura provincial, pues, y los Diputados ultramarinos en las Cortes legislarían sin mútuo enlace ni acuerdo, y con total independencia entre sí, pudiendo por lo mismo considerarse la potestad legislativa de aquélla, como complemento de la de éstos.

¿Por ventura no existen en la Gran Bretaña intereses generales que se rozan con sus colonias, pero intereses que por las vastas relaciones mercantiles y políticas de aquella nacion en todo el orbe son mucho más numerosos é importantes que los que tiene España con sus Antillas y otros países? Mas acaso porque así sea, ¿tantas y tantas colonias inglesas que gozan de legislaturas, envian Diputados al Parlamento para que en él traten de esos negocios? No por cierto; y sin embargo, ni en toda la antigüedad, excepto Grecia, ni en los tiempos modernos, ninguna nacion ha gobernado ni gobierna á sus colonias con tanta justicia y libertad como la Gran Bretaña. So pretexto de aquellos intereses no hay necesidad de Diputa-

dos ultramarinos en las Córtes; y si en los casos que puedan ocurrir se quiere consultar la opinion de las Antillas, deben preferirse las legislaturas de las dos islas, porque ellas con más datos, con más luces y ménos expuestas á extrañas influencias, podrán conducir al acierto más seguramente que los representantes enviados á la metrópoli.

Quizá sería conveniente para estos casos, y para el pronto despacho de las leyes que se han de sancionar por la Corona, tener cerca de ella uno ó dos apoderados elegidos por la legislatura con un sueldo fijo, pudiendo recaeer el nombramiento en Diputados peninsulares de alta influencia en las Córtes, cuya voz, exenta de las prevenciones que sobre los americanos pesan, serán más escuchada y respetada por la nacion y el gobierno. Así lo hicieron con provecho en otro tiempo las colonias francesas. Al apuntar esta idea, entiéndase que dejó á las legislaturas provinciales la más amplia libertad, así en el señalamiento de sueldos, como en la duracion de tiempo que haya de tener cada apoderado, pues éste ó éstos podrán ser revocados y reemplazados por otros al arbitrio de aquellas legislaturas.

¿Se desean Diputados ultramarinos en las Córtes para que reclamen contra las faltas que puedan cometer el ministerio y las autoridades principales de las Antillas? ¿Mas compensarán estas reclamaciones los gravísimos inconvenientes que por otra parte le ofrecen esos Diputados?

Para apreciar en su justo valor el efecto de estas reclamaciones, reflexiónese que, ó el gobierno está dispuesto á dar á las Antillas libres instituciones, ó no lo está. Si lo primero, esas instituciones son la única y verdadera garantía que tendrán aquellos habitantes, pues enfrenado entónces el poder, no transpasará los límites dentro de los cuales debe girar; y si alguna vez lo hiciere, la opinion pública, legalmente expresada por la prensa y por el órgano de las corporaciones del país, ejercerá una fuerza mucho más pronta y enérgica que la débil y remota de los Diputados existentes en la Península.

¿No están dispuestos el gobierno y las Córtes á darnos libres instituciones? Entónces el clamor de los Diputados será ineficaz, porque el gobierno, empeñado por una parte en sostener la conducta de sus empleados, y apoyado por

otra en la mayoría que tendrá en las Cortes, siempre hallará medios de frustrar los deseos de los Diputados ultramarinos. Además, ¿podremos gloriarnos de que estos serán unánimes en sus reclamaciones? ¿No podrán contraponerse unos á otros, ya por el distinto modo con que los hombres suelen ver los mismos objetos, ya por los halagos y seducciones del poder?

Diráse tambien, que así como el Parlamento británico, puede ejercer su alta potestad legislativa en las colonias, no obstante sus legislaturas; del mismo modo podrán las Cortes españolas usar de igual derecho, y que para este caso es necesario la presencia en ellas de los Diputados ultramarinos. Yo acepto este argumento con todas sus consecuencias.

El Parlamento británico usa de aquellas prerogativas con tanta parsimonia que las legislaturas coloniales funcionan con plena libertad, sin que las embarace en su marcha la intervencion parlamentaria. ¿Imitarán esta conducta nuestras Cortes? Si así fuere, ya son necesarios en ellas los Diputados ultramarinos, así como tampoco lo son los de las colonias inglesas en el Parlamento británico.

¿No imitarán las Cortes la conducta de éste? Aquí conviene distinguir: ó los Diputados peninsulares emplean su prerogativa en tratar solamente de los asuntos comunes á las Antillas y á la metrópoli, ó la extienden tambien á los puramente locales, reservados á aquellas legislaturas. En el primer caso, claro es que se mezclarán los Diputados ultramarinos, pues que se dice que justamente vienen para eso á las Cortes. Hasta aquí todo va bien, segun la teoría en virtud de la cual se pide la presencia de tales Diputados en las Cortes. Pero cuando los Diputados peninsulares se lancen á tratar de las cuestiones puramente locales de las Antillas; ¿qué es lo que harán los Diputados ultramarinos? ¿Se callarán como deben hacerlo para ser consecuentes con sus mismos principios, puesto que no vienen á la Península para tratar de dichos intereses locales? Si esto han de hacer, su presencia es del todo inútil en las Cortes. ¿Toman parte en la discusion de esos negocios locales? He aquí que ya iraspasan los límites de su mandato, porque las Antillas no los envían

á las Córtes para que se mezclen en tales negocios: hélos aquí tambien usurpando las atribuciones reservadas á las legislaturas provinciales, y hélos, en fin, concurriendo á menguarlas y á reducir las á la nulidad. Para esto sería ménos malo que desapareciesen las legislaturas provinciales, y que sólo se admitiesen Diputados como en tiempos anteriores; pues de este modo se impedirían los conflictos que necesariamente habrian de surgir entre las atribuciones parciales de los Diputados ultramarinos en las Córtes y las atribuciones parciales de las legislaturas en las provincias.

Estos inconvenientes y peligros cesarán, cuando las legislaturas provinciales puedan girar libremente en la órbita de sus funciones sin el elemento perturbador de los Diputados ultramarinos en las Córtes. Su presencia en ellas es una amenaza continua á la potestad legislativa de las legislaturas provinciales, pues los debates más ó ménos frecuentes en que entrarán ya movidos por sí, ya por el ejemplo de los peninsulares sus colegas, son incompatibles con la marcha asentada y serena que deben seguir aquellas asambleas.

Si nos elevamos á los principios fundamentales del gobierno representativo, veremos que es imposible la admision de Diputados ultramarinos en las Córtes cuando existan legislaturas en las Antillas. Elegido que sea un Diputado por alguna provincia, ya este Diputado no lo es sólo de ella, sino de toda la nacion; y bajo de tal concepto tiene derecho á mezclarse, así en todos los asuntos de la provincia que lo nombró, como en los de todas las demás que pertenecen á la Monarquía. Tales son las facultades de que vienen investidos á las Córtes todos los Diputados que las componen.—Siendo esto así, ¿con qué carácter se presentan en ellas los Diputados ultramarinos? ¿Gozan de los mismos derechos y prerogativas que los peninsulares? Entónces pueden tratar, no sólo de cuantos asuntos pertenecen á la Península, sino tambien á las Antillas; y ved aquí ya completamente absorbida por ellos la potestad legislativa de las legislaturas provinciales. ¿No gozan de las mismas prerogativas que los Diputados peninsulares? Entónces tenemos que los Diputados ultramarinos vienen con atribuciones tan

menguadas, que ni pueden ocuparse en los asuntos de la Península, ni tampoco en todos los de Cuba y Puerto-Rico, sino únicamente en los pocos que se les hayan reservado por la Constitucion especial de estas Antillas.

¿Pero admitirán las Córtes en su seno á Diputados de especie tan anómala? ¿podrán consentir que tomen la palabra ni ménos que voten en los negocios generales de la nacion, cuando sólo son especialmente nombrados para que traten de ciertos asuntos de Cuba y Puerto-Rico? A la verdad que tal representacion en Córtes, ni es digna de éstas, ni decorosa á las provincias de Ultramar, ni muy satisfactoria á los mismos representantes que viniesen bajo de tan raquíticas atribuciones.

7.º Otro de los graves inconvenientes que ocasionaría la presencia de los Diputados ultramarinos en el Congreso español, sería la necesidad de someter los presupuestos de aquellos países al exámen y aprobacion de las Córtes. Máxima fundamental es de todo gobierno libre que el contribuyente sea quien imponga, discuta, apruebe y vigile la buena inversion de sus contribuciones, pudiendo asegurarse con precision matemática, que el país donde esto no se hace, es país despóticamente gobernado. Diputados y presupuestos, cosas distintas son; pero en el órden representativo tienen tan estrecho enlace, que quien dice Diputados, dice presupuestos, porque el exámen de éstos es una de las atribuciones esenciales de aquéllos; y quien dice presupuestos supone Diputados, á no ser que se viva en pleno absolutismo. ¿Mas qué es lo que hoy sucede con los presupuestos de Cuba y Puerto-Rico? ¿Y qué es lo que sucedería con ellos si conforme con semejantes ideas tuvieran Diputados en el Congreso español, por cualquier motivo que fuese? Para que mejor resalte lo que hoy pasa entre nosotros, y la influencia que en los presupuestos de las Antillas ejercerían aquellos Diputados en las Córtes, contemplemos ántes lo que pasa en otras colonias.

No es España la única nacion que las tiene en América. Entre otras pòtencias poséenlas tambien la Francia y la Gran Bretaña. La primera, como ya he dicho, tiene dos, que son la Guadalupe y la Martinica con sus

pequeñas dependencias en el Archipiélago de las Antillas, y otra que es Borbon ó Reunion en el mar de las Indias. Estas tres islas me servirán de ejemplo, por ser de las más antiguas, de las ménos mal gobernadas, y más asemejadas á su metrópoli; pues gozan de muchas de sus instituciones y se rigen por el código de Napoleon, por el código penal y por los códigos de comercio, de procedimiento civil y de instruccion criminal; habiéndose introducido en ellas las modificaciones hechas en Francia á la legislacion civil y criminal ántes y despues de la promulgacion del decreto de 27 de abril de 1848 que abolió la esclavitud. En cuanto á la isla Reunion, la semejanza es ménos completa, porque si bien todo lo concerniente al órden de las jurisdicciones civiles y correccionales es semejante al de la metrópoli, no así en lo tocante á la jurisdiccion criminal.

Los gastos de esas tres colonias, están divididos en dos clases; unos que pertenecen exclusivamente á la metrópoli, y que los paga de su presupuesto, y otros que gravitan exclusivamente sobre ellas. Cuáles son los ramos que bajo el nombre de gastos de *Gobierno* y de *proteccion* debe pagar la metrópoli, los enumera expresamente el artículo 14 del Senado-consulta de 3 de mayo de 1854, como se verá más abajo. El importe de estos gastos ascendió en 1864 para Martinica y Guadalupe, y en 1862 para la Reunion ó Borbon á las cantidades que presenta la siguiente tabla, y que he tomado de las noticias sobre las colonias francesas, publicadas en 1866, por órden del Sr. Marqués de Chasseloup-Laubat, ministro de Marina y de las colonias en Francia.

## GASTOS HECHOS POR EL PRESUPUESTO METROPOLITANO.

## CAPITULO I.

## Personal Civil y Militar.

	Martínez. 1864.	Guadalupe. 1864.	Borbon ó Revueta. 1862.
	Francos. Cs.	Francos. Cs.	Francos. Cs.
Gobierno colonial.....	60,000	60,000	60,000
Administracion general.....	242,440	245,830	211,050
Justicia.....	333,800	373,600	382,200
Culto.....	251,400	243,700	217,100
Subvencion á la instruccion publica.....	100,000	100,000	
Estados mayores.....	103,723.50	112,632	
Servicios maritimos.....	28,770	20,400	
Gendarmeria colonial.....	441,467	481,533	404,894
Tropas indígenas.....	67,116.78	67,116.78	67,000
Accesorios de sueldo.....	34,800	34,800	22,000
Tratamiento en los hospitales.....	425,427	489,731	146,491.60
Viveres.....	492,561.60	587,395.80	471,059.60
Gastos necesarios y diversos.....	47,520	41,500	63,140
Compañia disciplinaria.....		114,786.87	104,502.40
Totales.....	2,628,525.88	2,973,045.55	2,119,787.80
A deducir 1/30 por incompletos.....	87,617.33	99,101.52	70,659.59
Total del personal.....	2,540,908.35	2,873,944.03	2,049,128.31

## CAPITULO II.

## Material Civil y Militar.

Conservacion de puertos y radae.....	29,000	25,000	10,000
Edificios públicos.....	25,000	7,000	50,000
Acuartelamiento y campamento.....	7,000	4,500	
Artilleria y trasportes.....	70,000	63,000	296,000
Trabajos de ingenieros.....	192,000	313,900	
Alquileres y amueblamientos.....	60,000	75,000	40,000
Impresiones y suscripciones.....	15,000	17,000	18,500
Introduccion de trabajadores.....	150,000	150,000	
Gastos de justicia y de procedimientos.....	45,000	45,000	34,000
Total del material.....	593,000	700,400	448,500

## RECAPITULACION.

Capº 1º Total del personal civil y militar. (Cifra redondas).....	2,540,910	2,873,940	2,049,128
Capº 2º Total del material.....	593,000	700,400	448,500
TOTAL GENERAL.....	3,133,910	3,574,350	2,497,628

Debo advertir que en estos gastos no están comprendidos los del servicio de la marina, que se elevaron en la Martinica en 1862 á 2.075,603 francos á causa del gran número de tropas que de Francia pasaron á aquella Antilla para la expedición á Méjico.

Los gastos de la Guadalupe llegaron en aquel año á 511,276 francos; y los de la Reunion, incluso el sueldo de las tropas de infantería y artillería de marina de guarnición á 1.491,180 francos. Reuniendo todas estas sumas á las del estado anterior, tendremos que la Francia gastó de su presupuesto en las tres colonias referidas, y en un solo año, la cantidad de 13,283,939 francos.

Veamos ahora á cuánto ascendió el presupuesto de ingresos, único que representa los impuestos pagados por dichas colonias para el ejercicio de 1864 en la Martinica y Guadalupe, y para el de 1863 en la Reunion. Mas como en ese presupuesto figuran algunas cantidades suministradas por la metrópoli, es menester deducirlas, para que así se conozca exactamente cuál es la suma verdadera que pagan aquellas colonias.

Los ingresos de la Martinica ascendieron	
á francos.....	3.235,307
Los de Guadalupe.....	3.444,601
Los de la Reunion.....	6.388,623
<hr/>	
Total.....	13.068,531

De todo lo expuesto aparece:

1.º Que la metrópoli francesa emplea anualmente de sus propios fondos, cantidades considerables en aquellas tres colonias.

2.º Que dichas cantidades se invierten, no sólo en los ramos que pertenecen al Estado, sino aún en los locales de cada colonia.

3.º Que éstas no envían á su metrópoli, ni un solo franco, aunque bien pudiera hacerse, ya recargándolas de impuestos, ya con el sobrante que suele quedar despues de satisfechas todas sus necesidades; pero en este caso se forma un *fondo de reserva* para subvenir á los gastos que puedan acarrear acontecimientos extraordinarios.

4.º Que á pesar del cuantioso subsidio anual que dá Francia á sus tres colonias, y que de él pudiera prevaler-



se para intervenir en sus presupuestos locales, éstos son votados libremente por sus consejos generales; cuyo voto es definitivo y ejecutorio; segun lo previene el número 15 del artículo 1.º del Senado-consulta promulgado el 4 de julio de 1866.

5.º Que no obstante carecer los Consejos generales de potestad legislativa, esos presupuestos no se presentan á las Cámaras francesas; pero en medio de esto téngase muy presente, que ni Martinica, ni Guadalupe ni la Reunion, envían Diputados á su metrópoli.

Con más munificencia que la Francia procede la Gran Bretaña en el mundo colonial que posee, y obra larga sería, y no por cierto del caso, trazar el cuadro de las relaciones rentísticas que median entre todas ellas y su metrópoli. Limitaréme, pues, á las posesiones que se hallan en América, de las cuales están muchas en las mismas aguas que Cuba y Puerto-Rico. Ninguna de ellas tiene Diputados en el Parlamento británico, y por eso Inglaterra que tanto respeta el sagrado derecho de propiedad, no conoce de sus presupuestos, dejándolos exclusivamente entregados al exámen y aprobacion de las legislaturas coloniales. Aquella metrópoli paga de sus propios fondos todas las tropas veteranas que guarnecen sus colonias; y tambien toda la marina que defiende sus costas y protege su comercio. Libres de esta carga, el único derecho que la Gran Bretaña se ha reservado en sus colonias de América, es el de imponerles alguno que otro tributo para regular su mútuo comercio; pero cualquier exceso que en este punto se pudiera cometer, reprimido está con el correctivo de que el producto total de estos impuestos se ha de invertir necesariamente en uso y provecho de la colonia en donde se recaudan.

Mas ¿qué es lo que hoy sucede en los presupuestos de Cuba y Puerto-Rico? Sucede que el Gobierno es quien impone todas las contribuciones, y decreta su inversion, sin que el país intervenga en su libre exámen y aprobacion, pues la levísima parte que se ha dado en la Habana al Consejo de Administracion, es absolutamente ilusoria, así porque sus miembros son nombrados por el Gobierno, como por la forma de las instituciones que rigen á las Antillas.

Cierto es, que en estos últimos años el Gobierno ha presentado á las Córtes los presupuestos de aquellas Islas, pero esto mismo confirma la aseveracion que acabo de hacer, porque sean cuales fueren las atribuciones de las Córtes, ellas no pueden discurrirlas ni votarlas cuando Puerto-Rico y Cuba carecen de la legítima intervencion que deben tener. Desde la Constitucion de 1812 hasta la que actualmente rige en España, todas han consagrado el principio de que las contribuciones han de ser discutidas y aprobadas por la representacion nacional; principio tan antiguo en España, que aunque omito trazar su historia, en gracia de la brevedad, no puedo ménos de transcribir lo que ordenaron los reyes Enrique II en Madrid en 1367, Enrique III en 1393, Juan II en 1420 y Carlos I en las Córtes de Madrid de 1523, cuyas disposiciones se hallan comprendidas en la ley I, título VII, libro VI de la Novísima Recopilacion, que dice así:

«Los Reyes nuestros progenitores establecieron por leyes y órdenes fechas en Córtes, que no se echasen ni repartiesen ningunos pechos, servicios, pedidos, ni monedas, ni otros tributos nuevos, espacial ni generalmente en todos nuestros Reinos, sin que primero sean llamados á Córtes los procuradores de todas las ciudades y villas de nuestros Reinos, y sean otorgados por los dichos procuradores que á las Córtes vinieren.»

Nada más terminante que esta ley; y como á las Córtes en que han sido aprobados los presupuestos de las Antillas, no han asistido sus representantes por falta de llamamiento, es inconcuso que en esta materia se ha procedido ilegalmente, no dejando de ser bien notable que cuando tanto se habla de *asimilar* las Antillas á la metrópoli, cabalmente se nos desasimile en asunto tan vital.

Si la aprobacion por las Córtes de los presupuestos ultramarinos sin ser representadas aquellas provincias, es anticonstitucional, yo no admito que la presencia en el Congreso de Diputados por éstas, baste para legitimar la intervencion de los representantes peninsulares en el examen y voto decisivo de dichos presupuestos.

En los períodos en que las Antillas tuvieron Diputados á Córtes, nunca les fueron presentadas á éstas los presupuestos de aquéllas, por la razon muy sencilla de que

entonces no los había: de manera que sobre este punto no se pueden invocar precedentes. Mas hoy que aquéllos existen, nada parece á primera vista más justo ni más conforme á los principios constitucionales que el que sean discutidos y votados por las Córtes, siempre que á éstas asistan los Diputados ultramarinos, pero á poco que se medite, se conocerá que esa misma justicia y esos mismos principios constitucionales se oponen á que tal se haga. ¿Con qué derecho pueden discutir y aprobar los presupuestos de las Antillas, unos Diputados que en nada contribuyen para los gastos que figuran en tales presupuestos? Si ellos deben intervenir en el exámen y aprobacion de los de la Península, es á título de contribuyentes y de representantes de éstos; mas no siéndolo en Cuba ni Puerto-Rico, evidente es que ni pueden, ni deben tomar la voz para tener en ellos la más leve intervencion aprobatoria ó desaprobatoria. Si se mezclan directamente y con voz decisiva en este asunto, ¿se podrá decir que son los contribuyentes de las Antillas quienes votan y aprueban sus presupuestos? Ciertamente que no.

Si Cuba enviase Diputados á las Córtes bajo la misma base de poblacion libre adoptada en la Península por la ley electoral de 18 de julio de 1865, su número total seria de 23. Mas ¿cuántos son los Diputados peninsulares? Trescientos cuarenta y siete. Y ¿qué viene á ser aquel cortísimo número, único que representa á los contribuyentes de las Antillas comparado con el grandísimo de los no contribuyentes? El resultado inevitable será que el presupuesto vendrá á caer en manos de éstos, quienes á su arbitrio podrán imponer la ley á aquéllos; y esta ley tendrán que sufrirla con tanta más fuerza cuanto que á los diputados peninsulares se reuniría la poderosa falange de 300 ó más Senadores que tampoco contribuyen á la formacion de los presupuestos de Cuba. Aquí es muy importante recordar lo que sucede en Inglaterra, país eminentemente constitucional y de verdadera libertad. Cuando al Parlamento se presentan los presupuestos de la nacion, la Cámara de los Comunes es la sola que tiene derecho de disminuirlos adicionarlos ó modificarlos, y aunque los miembros de la Cámara de los Lores contribuyen á los gastos de la nacion en proporeion á sus riquezas, ja-

más pueden alterarlos ni modificarlos en lo más leve, pues todas sus facultades se reducen á simplemente aprobarlos ó desecharlos. Esto prueba el alto respecto que la Gran Bretaña tributa á la propiedad y á los principios del Gobierno representativo, pues no obstante que los Lores son contribuyentes, se les prohíbe la facultad de alterar los presupuestos, tan sólo por la razón de que se sientan en el Parlamento en virtud de un privilegio de su clase, y no á nombre del pueblo inglés. Si, pues, esta es la práctica constitucional seguida en aquel país, maestro y modelo de libertad, ¿bajo de qué título los Diputados y Senadores de la Península é Islas adyacentes, que en nada contribuyen para los gastos de las Antillas, ¿bajo de qué título, repito, pueden discurrir aquellos presupuestos, ni menos aprobarlos, á pesar de la escasa intervencion que pueden tener los poquísimos Diputados ultramarinos, que vinieran á las Cortes?

Esta situación llevadera sería si hubiese conformidad de ideas y de intereses entre los españoles aquende y allende los mares; pero es menester que todos seamos francos y confesemos que en el punto que nos ocupa, hay un completo antagonismo. Por una tendencia natural, el interés de la Península es pagar lo ménos posible; y como á esta tendencia se junta la deplorable condicion en que se halla su Erario, ocharáse sobre las Antillas la mayor parte de las cargas pecuniarias que debieran pesar sobre la metrópoli, pues para eso habrá en las Cortes una inmensa mayoría. En estas circunstancias, ¿de qué sirven en ellas los Diputados ultramarinos? porque, ó votan con los peninsulares ó votan contra ellos. Si lo primero ¿no los acusarán sus comitentes de traidores? ¿no se desacreditarán los futuros nombramientos de Diputados á Cortes? Si lo segundo, ¿no quedará demostrada la inutilidad de nuestros Diputados en el Congreso español? ¿no se lamentarán aquellos países de que el peso de las contribuciones que los abruma, les ha sido impuesto, no ya por sus propios Diputados, sino contra la voluntad de estos?

Y si se reflexiona sobre las graves consecuencias que de aquí pueden originarse en el orden político, entónces se acabará de conocer cuán peligrosa es la admision de

representantes ultramarinos en las Cortes, y el empeño de establecer en este punto una asimilacion incompatible con la índole de buenas instituciones.

Es menester que seamos sumamente circunspectos en materia de contribuciones. Por querer imponerlas sin aprobacion de los contribuyentes, Inglaterra aceleró la pérdida de sus colonias conocidas antes con el nombre de las *Trece provincias* y hoy *Estados Unidos*. No recibió en balde tan amarga leccion aquella previsorá potencia, y consultando á un tiempo los deberes de la justicia y de una sabia política, decretó las medidas que ya he indicado.

Ni se diga que Cataluña vota en las Cortes las contribuciones generales de Valencia, Asturias y otras provincias de la Península, y que cada una de éstas vota á su vez las respectivas de las demás. La paridad que establece es del todo inexacta, porque ni Cataluña, ni Valencia, ni Asturias, ni ninguna otra de las provincias peninsulares ó islas adyacentes tienen, ni presentan á las Cortes presupuestos especiales como las islas de Cuba y y Puerto-Rico. En la Península no hay más que un solo presupuesto, en él no aparece ninguna de sus provincias bajo de su nombre particular, ni tampoco ninguna constituye una entidad aislada; por el contrario, todas se presentan confundidas formando un sólo cuerpo homogéneo y compacto; y en tal estado, muy lógico y constitucional es, que los Diputados de todas ellas congregados en las Cortes, discutan y aprueben el presupuesto general que á todas les comprende. Mas las Antillas tienen cada una un presupuesto especial absolutamente distinto del de la Península; distincion que procede, no sólo de la gran distancia que las separa de su metrópoli, sino de las peculiaridades circunstancias en que se encuentran, y en virtud de las cuales se han pedido y piden leyes especiales para su gobierno.

Yo tiemblo ante la idea de que vengán Diputados de Cuba á las Cortes, porque su presencia es para mí el signo fatal de que Cuba nunca gozará de verdadera libertad. ¿Puede ser ésta compatible con la discusion y votacion de sus presupuestos en las Cortes, bajo de cualquier punto de vista que el asunto se considere? Mientras Cuba no sea quien de ellos, y de todo lo relativo á ellos exclusivamen-

te conozca, es delirio pensar que Cuba pueda ser libre. Todos debemos saber, que el principal obstáculo para que se le conceda libertad son los presupuestos, pues la cuestion pecuniaria domina la cuestion política, y de seguro que si Cuba fuese pobre, ó á lo menos no se le hubiese dado la fama de rica, su situacion politica no sería hoy tan deplorable. Si aun dada la legislatura provincial, sería muy difícil conseguir que los presupuestos no saliesen de Cuba, la venida de sus Diputados á las Córtes, de cualquier modo que fuese, convertiría esta dificultad en imposibilidad, porque ellos aun sin pensarlo, traerían virtualmente consigo los presupuestos, no sólo porque pertenecen á la esfera de sus atribuciones como Diputados, sino porque también vendrían especialmente autorizados para tratar de la cuota con que Cuba debiera contribuir para los gastos generales de la Nacion: mas como esta cuota no se puede graduar sin que al mismo tiempo se tome en cuenta el importe de los gastos locales y el de las fuerzas productivas de Cuba, resultaría que el presupuesto total cubano sería asunto del exámen y voto de las Córtes. Si Diputados antillanos han de venir á la Metrópoli, sea cual fuese el motivo que se alegue, forzoso será resignarse á que Cuba y Puerto-Rico pierdan el precioso derecho de imponerse á sí mismas y de votar sus contribuciones. Por más medios que se inventen, por más palabras y frases que se busquen, por más artículos que se dicten en la Constitucion provincial, y por más restricciones que se pongan á los Diputados ultramarinos que vengán á las Córtes, todo, todo será en vano: pues ellos aun contra su propia voluntad, y más que ellos sus colegas peninsulares, romperán cuantas trabas se les quieran imponer, y, usando de un derecho propio, arrancarán con fuerza irresistible sus presupuestos á las Antillas, porque es menester no alucinarnos, Diputados ultramarinos en las Córtes y exámen y votacion de aquellos presupuestos son *bajo el meridiano de Madrid*, no ya términos sinónimos, sino elementos esenciales de una misma cosa. Hágase lo que hoy se pide, y desde ahora pronostico que el tiempo me dará razon.

Entre los pueblos libres, no todos cifran su principal libertad en un mismo objeto, ni todos dan á ese objeto la

misma preferencia. Poco se cuidaron del impuesto las repúblicas de la antigüedad, y sus principales esfuerzos dirigiéronse á mantener el equilibrio entre las clases sociales y el derecho de nombrar á los funcionarios públicos. Mas las naciones modernas no sólo consideran como principal fundamento de su libertad el goce de los derechos políticos, pues que con ellos aseguran el de los civiles, sino el de imponerse á sí mismas sus contribuciones y velar atentamente sobre su más provechosa inversion. Por difundido que esté en Cuba el sentimiento de la libertad, hay algunas personas todavía que son casi ó del todo indiferentes á ella, porque habiendo vivido siempre en medio del absolutismo, no perciben las ventajas de un gobierno liberal. Pero no acontece lo mismo cuando se trata de contribuciones, porque todos están interesados en pagar lo ménos posible, y que lo que se pague, se invierta justamente en las necesidades del país. Fíjese pues, la mente en tan poderosa consideracion, porque arrancar los presupuestos á Cuba para traerlos á la Península y discutirlos en las Cortes, no obstante la intervencion de los Diputados cubanos en ellas, es un acto de inmensa gravedad que hará palpar todos los corazones desde la punta de Maisí hasta el cabo de San Antonio.

8° Considerando bajo de otro punto de vista la presencia de los Diputados ultramarinos en las Cortes, recordemos lo que ha sucedido en tiempos anteriores, pues los hechos son más elocuentes que todos los raciocinios. ¿Qué bien, digno de patriótica recordacion, produjeron á Cuba los Diputados durante los períodos en que los hubo, á pesar de que vinieron entre ellos varones esclarecidos? Llamados á las Cortes por la Junta Central del Reino en 1810, asistieron á la formacion del Código fundamental que se promulgó en 1812; pero ninguna influencia ejercitaron en él, porque todo fué obra exclusiva de otras manos. En 1811 suscitóse en las Cortes una cuestion de la más grave trascendencia para Cuba, pues se trataba nada ménos que de cortar repentinamente el tráfico de negros africanos y aún de abolir inmediatamente la esclavitud. No fué por cierto la voz de los Diputados cubanos la que sosegó aquella tempestad; fué tan sólo la muy hábil y memorable representacion que apoyada por el Gobierno

de la Isla, elevaron entónces á las Córtes el Ayuntamiento, la Junta Consular y la Sociedad Patriótica de la Habana.

Bajo la bandera de la Constitución de 1812 se congregaron nuevas Córtes, y á ellas vino por la provincia de la Habana el Sr. D. Francisco Arango, el hombre en aquellos tiempos, y áun quizá hoy si viviera, de más aptitud para desempeñar tan noble encargo. Mas aquel ilustre ciudadano que tenía buenas relaciones en España, y que en virtud de ellas había prestado eminentes servicios á su tierra natal, ¿qué alcanzó para ella mientras fué Diputado hasta 1814? Lo único que sacó á pesar de sus esfuerzos, fué volver á Cuba casi arruinado, y sirviendo de triste y desalentador ejemplo á los buenos patricios que quisieran imitarle.

Hundióse la Constitución de 1812, por el terrible decreto de 4 de mayo de 1814 promulgado en Valencia, pero la insurreccion que estalló en enero de 1820 la enarboló de nuevo como pendon de libertad. Abriéronse las Córtes segunda vez, y Diputados hubo tambien por las provincias de Ultramar. Publicóse entónces una funesta ley arancelaria que si se hubiese ejecutado en Cuba habría sido su completa ruina. Mas ¿qué hicieron ni qué pudieron hacer en tan críticas circunstancias los Diputados cubanos que asistieron á esas lamentables discusiones? Nada, absolutamente nada; y sin el grito enérgico de las corporaciones de Cuba sostenido vigorosamente por el dignísimo General Mahy que entónces la gobernaba, la terrible ley á pesar de los representantes de Cuba en las Córtes, habría recibido su cumplimiento y ocasionado los más grandes desastres á nuestra Antilla.

A estos Diputados sucedieron otros en 1822, y entre ellos hubo tres, cuales fueron los Sres. D. Félix Varela, D. Leonardo Santos Suarez y D. Tomás Gener, que brillaron por su ilustracion y cívicas virtudes. Pero ¿qué fué lo que consiguieron tan esclarecidos varones en beneficio del país que los había honrado con su confianza? El doloroso desengaño de que los más patrióticos esfuerzos de los Diputados ultramarinos en las Córtes, son impotentes para satisfacer las muchas y urgentes necesidades de aquellos pueblos. Por eso fué que los dos primeros,



asociados de mayor número de Diputados peninsulares, elaboraron y sometieron á las Córtes un proyecto de ley que alterando profundamente la índole de las Diputaciones provinciales de Ultramar, proponía revestirlas hasta de atribuciones políticas en que se las autorizaba no sólo á suspender el cumplimiento de las leyes que en la metrópoli se hiciesen contra los intereses de aquellos países, sino aún para suspender á los gobernadores que abusasen de su poder.

Pero los desgraciados acontecimientos que á la sazón cayeron sobre España, desbarataron los proyectos con que ya desde entonces se pretendía dar una legislación especial á las provincias ultramarinas, devolviéndole gradualmente el mayor número posible de atribuciones hasta que llegada la hora de la reforma de la Constitución de 1812 se pudiese dar una propia á los pueblos de Ultramar sin necesidad de que éstos enviasen Diputados á las Córtes. Prueba irrecusable de la convicción en que ya se estaba de la ineficacia de la Diputación ultramarina para labrar la felicidad de países tan lejanos y de tan notables diferencias con su metrópoli.

En octubre de 1823 volvió Fernando VII á empuñar su cetro absoluto, y hasta después de su muerte no se reunieron nuevas Córtes. Del 1834 al 1836 hubo en ellas Diputados por Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, únicos restos del vasto imperio español del otro lado de los mares. Yo pregunto y desafío á todo el mundo á que me diga, ¿cuál fué el beneficio que de aquellos Diputados sacaron entonces las provincias de Ultramar? ¿No reinaba en Cuba con omnímodas facultades el duro General Tacón? ¿No sepultaba en los calabozos, conculcaba las leyes, atropellaba los tribunales y desterraba á decenas sin sentencia ni aún formación de causa, hasta á los hombres más honrados é inocentes? Y ¿qué fué lo que alcanzaron en días tan calamitosos los Diputados cubanos? No faltó entre ellos quien alzase su voz contra los desmanes de Tacón; pero ningún eco tuvieron sus clamores en el salón del Congreso ni en los oídos del Gobierno; y los males de Cuba, en vez de aliviarse, agraváronse más y más. Vinieron nuevas Córtes y llegó la hora en que Tacón debiera caer, mas no cayó al impulso de ningún Diputado cubano,

pues que ya no los había, sino al de causas extrañas á éstos, y al vigoroso embate de dos ilustres Diputados peninsulares, sin cuyo influjo aquel jefe habría continuado afligiendo á Cuba por más tiempo. ¿Serían ahora más felices los nuevos representantes que vinieran? ¿Serían ellos los mortales afortunados que alcanzasen en el Congreso la completa libertad de las Antillas? ¡Ojalá que Dios lo permita!

9.ª La política seguida por las naciones europeas que tienen en Ultramar colonias de su raza, es de suma importancia para el punto que discutimos. A excepcion de Portugal, ninguna otra llama á sus Córtes ó Parlamentos, Diputados por sus colonias ó provincias ultramarinas. La Gran Bretaña, que es la potencia más colonizadora, y que con más acierto sabe gobernarlas, otorgóles desde un principio cartas ó constituciones, en virtud de las cuales tienen, segun se ha visto, sus legislaturas particulares. Holanda, nacion tambien colonizadora, ha permitido y permite á su colonia la Guayana, que se rija por las libres instituciones de que goza, sin haber llamado nunca representantes de ella á su metrópoli. Lo mismo hace Dinamarca en pequeño; y aun Francia, á pesar de haber sido una de las potencias más centralizadoras del mundo, y de haber sufrido tantas revoluciones desde 1789, sólo ha convocado una vez á los Diputados de sus colonias para que tomasen asiento en sus asambleas.

Esa vez fué cuando, proclamada la república en 1848, el Gobierno provisional de entónces llamó á la Asamblea constituyente Diputados por algunas de sus colonias. Cierta es que éstos asistieron tambien á la de 1789 en que se formó la Constitucion de 1791, pero su presencia no fué como erróneamente se piensa, en virtud de convocatoria especial, puesto que ellos se presentaron espontáneamente en París, y los miembros de aquella Asamblea sólo por deferencia los admitieron. Aquella misma Asamblea declaró por el artículo 8.º de la Constitucion de 1791, que *“las Colonias y posesiones francesas en el Asia, Africa y América aunque formaban parte del imperio francés, no quedaban comprendidas en aquella Constitucion.”* Desde entónces hasta hoy, Francia ha concedido á sus colonias, instituciones especiales, más ó menos libres, ó más ó menos ab-

solutas, segun las vicisitudes de los tiempos, pero sin llamar al seno de la representacion nacional á los Diputados de ellas. Estos ejemplos no deben ser perdidos para España; pues cuando tantas naciones libres y amaestradas por la experiencia, no llaman á sus metrópolis representantes por sus colonias, es porque sin duda han conocido los graves inconvenientes que para el buen gobierno de ellas produce semejante sistema.

Pero ¿qué necesidad tengo de buscar ejemplos extraños cuando ésta fué la política tradicional de España? Que á sus antiguas Córtes no fueron llamados Procuradores por América es un hecho que atestigua la historia. No perecieron en los campos de Villalar, como erróneamente se repite, las libertades de Castilla, y aunque heridas desde entónces mortalmente por la austriaca dinastía sobrevivieron por algun tiempo á tan rudo golpe.

Bajo el cetro de la primera Isabel de Castilla, descubierta fué el Nuevo Mundo por el inmortal Colon en 1492, y despues de tan memorable acontecimiento, juntáronse muchas Córtes en España. Moncion no haré de las de Valencia, Aragon, Cataluña ni Navarra, porque á ninguno de éstos reinos, sino tan sólo al de Castilla la América perteneció.

De 1498 á 1598 se reunieron cuarenta veces las Córtes en Castilla, pero á ninguna fueron convocados procuradores por América. Ni cómo habían de serlo, cuando en 1563 ya las Córtes ni se juntaban por brazos ni Estamentos, ni tampoco eran representadas en ellas todas las ciudades y villas que ántes tenían derecho á formarlas, pues que sólo diez y ocho gozaban de este privilegio?

En todo el siglo décimo séptimo se reunieron catorce veces, habiendo sido las últimas, las de 1665, porque jamás se congregaron bajo el triste reinado de Carlos II; pero en toda esa centuria, tampoco fueron convocados, ni aparecieron en ellas procuradores por América.

Bajando al siglo décimo octavo, vemos que sólo hubo seis, cerrándose el catálogo en 1789, en que las ciudades y villas del Reino fueron convocadas en Madrid con el objeto de jurar al príncipe D. Fernando y tratar otros negocios si fuese conveniente proponerlos.

De este breve resúmen aparece, que de 1498 á 1789

se juntaron sesenta veces las Córtes en Castilla, y que para ninguna de ellas fueron convocados los procuradores de América en las tres centurias que corrieron.

No se me objeccione, que en la Recopilacion de leyes de Indias se habla de procuradores enviados á la metrópoli por los Ayuntamientos de las poblaciones de aquellos reinos, porque tales procuradores no tenían el carácter de los de Castilla, ni eran nombrados en virtud de Real convocatoria que al efecto se expidiera á los pueblos de América, ni venían á tratar de los asuntos generales del Reino, ni á sentarse en Córtes, mas sólo á servir de personeros ó agentes de ciertos asuntos particulares de los Ayuntamientos que los enviaban. Oigase lo que ordenó Carlos I en Barcelona á 14 de noviembre de 1519, y en Toledo á 6 de dicho mes de 1528, cuyas disposiciones forman la ley 1.ª, tit. 11, lib. 4.º de la Recopilacion de Indias.

“Declaramos que las ciudades, villas y poblaciones de las Indias puedan nombrar procuradores que asistan á sus negocios y los defiendan en nuestro Consejo, Audiencias y Tribunales para conseguir su derecho y justicia y las demás pretensiones que por bien tuvieren.”

Pero esta ley, á pesar de que en nada se refería á los procuradores á Córtes, fué revocada en 11 de Junio de 1621 por la 5.ª del mencionado título y libro, en la que se prohibió á los Ayuntamientos de las ciudades que nombrasen tales procuradores, salvo en los casos muy graves y urgentes, precediendo siempre la licencia del virey ó de la audiencia del distrito, si aquel estaba muy distante. Y no se olvide que todo esto aconteció cuando entónces y aún largo tiempo despues, se juntaron Córtes en Castilla.

Los Diputados de América vinieron por primera vez á las Córtes en 1810, y á ellas asistieron hasta 1814, en que cesó la Constitucion de 1812. Reapareció ésta en 1820, y desde entónces hasta octubre de 1823, en que de nuevo cayó, hubo diputados americanos. Muerto Fernando, proclamóse el Estatuto Real en 1834, y á su sombra vinieron procuradores por las provincias de Ultramar hasta 1836, en que la revolucion de la Granja abolió el Estatuto y se proclamó de nuevo la Constitucion de 1812.

Pero ¿cuántos fueron los años en que la América tuvo Diputados á Córtes en aquellos diferentes períodos? Cuatro,

de 1810 á 1814; tres, de 1820 á 1823; y dos, de 1834 á 1836, ó sean nueve años en todo. Comparando este cortísimo término en que hubo Diputados americanos con el de más de tres siglos que no los hubo, aparece demostrado que la política tradicional de España no fué una política de asimilacion, á lo ménos en cuanto á diputados. Agréguese á esto otra consideracion de mucho peso, y es que el voto casi unánime de las Cortes de 1837 no sólo se pronunció por el gobierno de leyes especiales en Ultramar con exclusion de Diputados en la Metrópoli, sino que aún algunos de los mismos que en 1810 fueron favorables á la entrada en las Cortes de Diputados americanos, esos mismos fueron los promovedores de la exclusion de éstos en las futuras Cortes, y de un régimen especial para las provincias ultramarinas.

Aquí parece que debiera yo levantar la pluma; pero como en ningún caso admito Diputados ultramarinos en las Cortes, es preciso aumentar el número de los miembros de las legislaturas provinciales, así para hacerlas ménos accesibles á la influencia del poder, como para que puedan desempeñar sus funciones con más desahogo.

Si consultamos á las Colonias extranjeras que en éste y en otros puntos pueden servirnos de pauta, veremos que cuando á la Guayana, Martinica, Guadalupe y Borbon ó Reunion se les otorgaron Consejos coloniales en 1833, diéronse á la primera diez y seis miembros y treinta á cada una de las tres últimas. Mas ¿cuál fué entonces su poblacion respectiva? La tabla siguiente lo manifiesta:

	Blancos y libres de color.	Esclavos.	TOTAL.
Guayana.....	3,000	11,000	14,000
Martinica.....	16,000	97,000	113,000
Guadalupe.....	25,000	99,000	124,000
Borbon ó Reunion...	30,000	70,000	100,000

De aquí resulta que habiéndose dado á la Guayana diez y seis miembros con una poblacion libre de 3,000 personas, aparece un consejero por cada 187 personas; y

si se incluye toda la poblacion libre y esclava, se obtendrá un consejero por cada 875 habitantes.

Diéronse treinta miembros á Martinica, y como su poblacion libre ascendió á 16,000, resulta un miembro por cada 533. Si se computan además los 97,000 esclavos que entónces habia, tendrémós un consejero por cada 3,766 habitantes de todas clases.

La poblacion libre de Guadalupe y sus dependencias, fué de 25,000; mas como se le concedieron treinta miembros, tócale un consejero por cada 833 personas. Si se atiende al total de la poblacion libre y esclava entónces viene á salir un miembro por cada 4,133.

Los libres de Borbon fueron 30,000 y 30 el número de consejeros, por consiguiente hubo un consejero por cada mil. Contando tambien con los esclavos para este cálculo, resultará que por cada 3,333 se nombró un consejero.

Largo seria recorrer una por una las colonias inglesas; así es que me limitaré á pocos ejemplos.

El Canadá pasó definitivamente de la Francia al poder de Inglaterra por el tratado de paz de 1763, y en 1791 ya se le dió una legislatura compuesta de una Asamblea popular y de un Consejo legislativo, constando aquella de cincuenta miembros, los cuales en 1829 se habian elevado á 84 con una poblacion de casi 450,000 habitantes: es decir que habia un diputado por cada 5,357 personas.

Mucho ántes que el Canadá, Jamaica tuvo Gobierno representativo, cuya Cámara popular se compuso de 48 miembros á pesar de que su poblacion libre sólo era de 30,000 blancos y 10,000 de color. Diósele pues un representante por cada 930 habitantes libres.

La Asamblea popular de Barbadas con 16,000 blancos, 62,000 esclavos y un cortísimo número de libres de color, tuvo 22 miembros.

La Asamblea electiva de Antigua se compuso de veinte y cinco miembros, no obstante que apenas tenia 2,500 blancos y 3,700 esclavos.

Los islotes del Banco de Bahama contaron en su Cámara popular de 20 á 30 miembros, mientras que los blancos no pasaban de 2,000, ni los esclavos llegaban á 2,250.

Cuando en este siglo se dió una legislatura al Cabo

de Buena Esperanza, toda su poblacion era de 250.000 almas; y sin embargo se asignaron 46 miembros á la Asamblea popular.

En 1839 otorgóse una Constitucion á la Nueva-Zelanda y aunque toda su poblacion fué 73,473, la cámara electiva se compuso de 36 Diputados.

Si yo tomase por base los datos anteriores y los demás que me ofrecen otras muchas colonias inglesas que tienen legislaturas, sacaria para la Asamblea popular de Cuba, muchos centenares de diputados; pero darle tal proporcion seria uno de los más grandes absurdos. Limitándome pues á números racionales, creo que en el estado actual de nuestra poblacion los miembros electivos no deben bajar de ciento. Dado este aumento, llano es, que el otro Cuerpo colegislador debe tambien aumentarse, pero no en igual proporcion, sino siguiendo lo que se practica en las experimentadas colonias inglesas, que han recibido gobiernos representativos en este siglo, en el pasado y antepasado. Páreceme por tanto, que el número de los miembros de la segunda Cámara en Cuba puede elevarse á 30 ó 40 á lo más.

Vengamos, por fin, á considerar las legislaturas provinciales que pedimos para las Antillas bajo un punto de vista *enteramente nuevo*. (1)

No ignoro que estas Corporaciones se detestan en la metrópoli, ora por mirarse como de origen extranjero y anti-español, ora por temerse que rompan la unidad nacional y que sean la palanca más poderosa en que Cuba y Puerto Rico se apoyen para alcanzar su independencia.

Creencia general es que el establecimiento de aquellas legislaturas en nuestras islas seria una importacion del inglés; pero yo no vacilo en afirmar que si toda España lo cree, España toda está en un error. Aun suponiendo que tal institucion procediese del extranjero, esto no es motivo para rechazarla, sobre todo, cuando en el artículo tercero del interrogatorio político se propone la creacion de un Cuerpo consultivo cerca del gobierno; Cuerpo que realmen-

---

(1) Esto es parte de un artículo publicado en *La Política* de Madrid del 3 de diciembre de 1869, con el título de *Una pregunta y su respuesta*.—V. M. M.

te nada tiene de español, pues que viene de la Francia, mientras que las legislaturas provinciales que se piden son en su origen y embrión una planta indígena, planta española, y muy española, como paso á demostrarlo.

Bajo la dominacion romana tuvo España sus *conventus provinciales* ó asambleas anuales de los diputados de las ciudades para tratar de los asuntos de la provincia; pero sin detenernos en ellas, porque desaparecieron con la destruccion del imperio de Occidente, á cuyas ruinas sucedieron siglos de tinieblas, de confusion y de sangre, lleguemos al décimo sexto, en que ya España se presentó á los ojos de la asombrada Europa como señora de casi un mundo en el otro lado de los mares. ¿Pero qué es lo que nos enseñan las leyes que dictó para aquellas vastas regiones?

En medio de la tan decantada asimilacion, vemos que así en el orden religioso como en el político, se estableció una separacion, ó mejor dicho, especialidad, entre la metrópoli y sus colonias.

Para el régimen de su Iglesia, España celebró Concilios nacionales, y el último fué el décimo séptimo de Toledo, en 694. Despues del descubrimiento del Nuevo Mundo todos fueron provinciales, pues ellos se consideraron suficientes para mantener la fé católica y la disciplina eclesiástica. Mas ¿qué hizo el gobierno español en materia tan esencial, y á la que por sus antiguas y católicas creencias siempre dió el lugar más importante? Lo que hizo fué equiparar la América á la metrópoli, pues así como á las provincias de ésta les permitió celebrar concilios provinciales, así tambien á las de América. Apénas conquistado Méjico, reunióse allí en 1524 una junta apostólica, impropriamente llamada primer Concilio general de Méjico, porque aún no habia en todo aquel país ni arzobispo ni obispo. Presidióla el vicario apostólico, fray Martín de Valencia, franciscano, y asistieron diez y nueve religiosos, la mayor parte de la misma orden, cinco clérigos, tres ó cinco letrados y el famoso Hernán Cortés. Despues de esta junta vinieron los verdaderos Concilios mejicanos, que se celebraron en los años de 1555, 1565, 1585 y 1771.

Si Méjico tuvo sus Concilios provinciales, á imitacion de los de la metrópoli, el Perú tambien tuvo los suyos; y en Lima, su capital, juntáronse en 1552, 1567, 1582, 1601



y 1772. Es, pues, incuestionable que aquellos países tuvieron, pocos años despues de la conquista, sus juntas provinciales para gobernarse en el orden eclesiástico, juntas que en el orden civil equivalen á las legislaturas provinciales que ahora pido.

Quizás se replicará que esto se limitó á las materias eclesiásticas sin haberse extendido jamás á los negocios políticos. Error lamentable; y para imponer silencio á los que tal afirmen, transcribiré aquí dos leyes memorables: una es la 2.<sup>a</sup> del tit. VIII, lib. 4.<sup>o</sup> de la Recopilacion de Indias, hecha por Carlos I. en Madrid á 25 de junio de 1530, y cuyo tenor es el siguiente:

“En atencion á la grandeza y nobleza de la ciudad de Méjico, y á que en ella reside el virey, gobierno y Audiencia de la Nueva España, y fué la primera ciudad poblada de cristianos, es nuestra merced y voluntad y mandamos que tenga el primer voto de las ciudades y villas de la Nueva España, como lo tiene en estos nuestros reinos la ciudad de Búrgos, y el primer lugar despues de la justicia en los *Congresos que se hicieren* por nuestro mandado, porque sin él no es nuestra intencion ni voluntad que se puedan juntar las ciudades y villas de las Indias.”

Y á vista de ley tan terminante en que se habla de juntar las ciudades y villas de las Indias y de Congresos en Nueva España, gozando Méjico, su capital, del primer voto allí, lo mismo que Burgos en los reinos de Castilla, ¿habré quien ose negar que las legislaturas y congresos provinciales en América son instituciones verdaderamente españolas?

Otra ley, tambien de Carlos I., para el gobierno del Perú, llamado entónces Nueva Castilla, hecha en Madrid el 14 de abril de 1540, y confirmada por Felipe II en Aranjuez el 5 de mayo de 1593, dice así:

Es nuestra voluntad y ordenamos que la ciudad del Cuzco sea la más principal y primer voto de todas las otras ciudades y villas que hay y hubiere en toda la provincia de la Nueva Castilla. Y mandamos que, como principal y primer voto, pueda hablar por sí ó su procurador en las cosas y casos que se ofrecieren, concurriendo con las otras ciudades y villas de la dicha provincia, ántes y primero que ninguna de ellas, y que les sean guardadas todas las

honras, preeminencias, prerogativas ó inmunidades que por esta razon se le debieren guardar. (1)

Verdad es que esta ley no es tan explícita como la anterior, porque no se encuentra en ella la palabra *Congreso*; pero su tenor manifiesta que á él se refiere, puesto que habla de la reunion de todas las ciudades y villas del Perú y de darse al Cuzco el primer voto en todas las cosas de que se tratase en esas juntas. Además, España consideró á Méjico y al Perú como á las provincias ó colonias más importantes del Nuevo Mundo, equiparólas en sus preeminencias y prerogativas, y, por lo tanto, no pudo negar al Perú en punto tan esencial lo que á Nueva España habia concedido, sobre todo, cuando la mayor distancia del primer país al centro del poder hacía más necesaria aquella concesion.

Estas dos leyes, pues, patentizan que desde la primera mitad del siglo XVI estableciéronse para Nueva España y el Perú congresos ó legislaturas especiales en que las ciudades y villas de aquellas regiones fueran representadas. Y esto es tanto más notable, cuanto que á la sazón no habia cesado enteramente la reunion de las Cortes en Castilla, pues en el siglo corrido de 1498 á 1598 juntáronse cuarenta veces. Si la intencion del gobierno no hubiera sido entónces dar á aquellos países una representacion local, claro es que, ó los habria llamado á tomar parte en las Cortes, ó no hubiera mandado establecer Congresos particulares en aquellas tierras.

Ni se diga que el nombre de Cuba ó de otra Antilla no suena en las dos leyes anteriormente citadas. Existen documentos oficiales del todo ignorados, por estar inéditos, en que consta que desde la primera mitad del siglo XVI hubo en algunas Antillas españolas, juntas ó asambleas de procuradores, elegidos por los pueblos, para tratar de todos los asuntos concernientes á su prosperidad.

Para resolver las encarnizadas disputas que en la isla de Haití, llamada Española por Colon su descubridor, se habían suscitado desde el principio del siglo XVI sobre la esclavitud ó libertad de los indios, el cardenal Jimenez de Cisneros, regente entónces del reino, nombró de go-

(1) *Recopilacion de leyes de Indias*, libro IV., tit. 82, ley 42

bernadores de aquella isla y de las Indias á tres religiosos jerónimos de su confianza, que, exentos de pasiones é intereses, pudiesen juzgar de los hechos con toda imparcialidad y prudencia.

A pedimento de los habitantes de la Española, los padres jerónimos convocaron á todos los procuradores de ella, los cuales fueron elegidos por las ciudades de Santo Domingo y de la Concepcion y por las villas de Santiago, Bonao, Buena Ventura, Puerto de Plata, Compostela de Azua, Santa María del Puerto de la Yaguana, Salvaleon de Higüey, Puerto Real y Lares, San Juan de la Magnana y Salvatierra de la Zabana.

Remitiéronse éstos procuradores con licencia de los jerónimos, y empezaron sus sesiones el 20 de abril de 1518 en el monasterio de San Francisco, continuándolas desde el 26 en la Casa de la Contratacion donde estaban los padres jerónimos alojados. Importantes fueron las materias de que en esa junta se trató, y, conformándose los procuradores á las instrucciones que de sus respectivos ayuntamientos habían recibido, acordaron elevar al Supremo Gobierno, para que sobre ellas proveyese las peticiones que en resúmen insertaré. Y sin que yo todas las apruebe, porque de aprobarse no son, muy curiosa es su lectura, ya para conocer la primitiva historia de las Antillas españolas, tan ignorada todavía, ya para destruir el comun error en que se está de considerar como ideas modernas en materias de libre cambio algunas que sustentaron nuestros progenitores desde principio del siglo XVI. Hé aquí las peticiones:

Confirmacion de privilegios.—No sea perpétuo el gobernador.—Vuelva la Audiencia real y no haya más jurisdiccion que la del rey: quítese la del almirante.—Hágase juicio de residencia á los gobernadores cada tres años, y visítese la Audiencia.—Libertad general de comercio en todos los puertos de España é Indias, aun á extranjeros, pagando sus derechos.—Sean francos de derechos los frutos de esta isla, así al salir de aquí como al entrar en España.—Pregónese franquezas y mercedes á los que vinieren á poblar y permanecieren siquiera los cinco años de vecindad.—Prémiese á quien introduzca nuevas granjeras, como pan, vino, seda, de que se hace experiencia por

Sus Altezas.—Franqueza de todo derecho en el comercio que hagan las islas entre sí.—Franqueza á cualquiera que venga á poblar, de cuanto trajese para su casa.—No se arriende el almojarifazgo por las vejaciones que causan los almojarifes con sus avalúos.—Acúñese en esta isla moneda de oro, cuyo metal se extrae de ella, pues ahora, á pesar de ser de más quilates que el de San Juan (Puerto-Rico) y Cuba, todo corre por el mismo precio.—Súbase el oro á su valor y más, como en Canarias, donde la moneda tiene un precio más alto que en Castilla: subiendo la moneda, se evitará que se saque todo el oro que anualmente se coge en la isla, el cual asciende á veces á 130,000 pesos, cuya cantidad se exporta, segun se vé en los registros, pues todo mercader compra oro.—Bájase el derecho del oro, y tambien el de fundidor.—No se pague por las licencias de sacar oro.—Merced de la escobilla y relaves para los hospitales.—Licencia para traer por esclavos á los caribes de Tierra-Firme y por *naborias* á los de las islas Lucayas, Jigantes y otras inútiles.—Licencia para traer de Tierra-Firme por esclavos los que allí lo son de otros indios.—Sean perpétuos los repartimientos de indios, y residan éstos en las estancias de los españoles.—No tengan indios ningun ausente, ni gobernador, ni oficiales, ni sus familiares, salvo si fuere vecino para permanecer y casado.—Ningun gobernador ni oidor tenga parte en las armadas para introducir indios en la isla.—Licencia general para llevar á ella negros bozales, francos de todos derechos.—Socorra Su Alteza esta isla con mil negros al fiado.—Vengan los obispos de esta isla á residir en ella.—Permítase á todo extranjero avecindarse, excepto genovés y francés.—Franqueza en la sal.—Dénse tierras á los propios.—Limosnas para Iglesias.—Bájense los derechos de los clérigos por enterramientos, etc.—Oblíguese á todo vecino casado á que traiga su mujer.—Tasa en los derechos de escribanos, alguaciles y carceleros.—Haya juez superior de lo eclesiástico en la isla, que es gran trabajo apelar á España.—Libertad de salir de esta isla para otras, ó para España.—*Libertad de juntarse los procuradores de la isla sin intervencion de gobernador ni audiencia.*—No enagene Su Alteza esta isla, ni parte de ella.—Cada pueblo elija anualmente su alguacil y fiel.—No se hagan más mercedes de escribanías,

que sobran las que hay para perdernos en pleitos y revueltas.—Asiéntese con los obispos que el diezmo de azúcares sea uno de 50.»

Es de notar que en una de estas peticiones se solicitaba que los procuradores nombrados por los pueblos pudiesen reunirse para tratar de los asuntos de ella, sin la intervencion del gobernador ni de la Audiencia. Yo no calificaré aquí la justicia é injusticia de tal pretension; pero ella misma revela que existía la costumbre de reunirse los procuradores, con intervencion de la autoridad, para tratar de todos los negocios de la Española.

Ni se contentaron los procuradores con la remision de sus peticiones al monarca; que al mismo tiempo presentaron tambien un memorial á los padres jerónimos, pidiéndoles que mandasen ejecutar inmediatamente la mayor parte de ellas, dando luego cuenta á la córte, pues el mal estado de la isla exigía pronto remedio. Con este propósito trascribiré aquí un párrafo de aquellas peticiones:

“Que no haya sino un gobernador por cabeza, y si Audiencia se pone, sea tambien cabeza de ella el gobernador y tenga facultad para ejecutar lo que viere conviene, *sin esperar respuesta de Castilla, de do no puede bien proveerse cosa, pues quando viene la provision ya es diversa la necesidad.*»

Esto manifiesta que desde el principio se sintió el gravísimo inconveniente de que los negocios de la Española se sacasen de ella para discutirlos y resolverlos en Castilla.

Vengamos á la isla de Cuba, llamada entónces Fernandina.

Empezada á conquistar á fines de 1511, ya en marzo de 1528 se reunieron en la ciudad de Santiago los procuradores nombrados por ella y por las villas de la Asuncion ó Baracoa, San Salvador del Bayamo, Santa Maria del Puerto del Príncipe, Sancti Espirito, Trinidad y San Cristóbal de la Habana, que eran entónces las únicas poblaciones que existían en Cuba. Celebró aquella junta sus sesiones en marzo del dicho año, ya en casa del provisor D. Sancho de Céspedes, ya en la iglesia; y acordáronse varios capítulos, pidiendo á S. M. que los aprobase, segun

aparece de la carta que le dirigió en dicho mes y año desde la ciudad de Santiago. (1)

Mas ¿cuáles fueron las peticiones, cuya aprobacion solicitaron del supremo gobierno?

“Que S. M. enviase 700 negros y negras, ó licencia para sacarlos de Cabo Verde.

“Que por la escasez de negras se permitiese á los negros casarse con otras mujeres, las cuales yo creo que serían indias, pues no es dable que la peticion se refiriese á las blancas.

“Que los indios no *jamurasen* ni cavasen la tierra.

“Que se revocasen varias cédulas relativas á indios.

“Que las viudas y sus hijos continuasen en la posesion de los indios encomendados á sus maridos y padres.

“Que de Santa Marta, Tierra Firme, Higueras, Yucatan, Nueva España, Panuco y Rio de Palmas, se introdujesen como esclavos los indios que los caciques tenían por tales.

“Que como muchos españoles casados no tenían indio alguno, y otros, sin serlo, poseían excesivo número, S. M. proveyesen en ello; y que si sobre la libertad de los indios había de hacerse experiencia, fuese en algunos de los que ciertos castellanos tenían de sobra.

“Que S. M. declarase que la prohibicion de ir á tierras recién descubiertas no se entendiese para comerciar, pues lo impedía el gobernador Gonzalo de Guzman.

“Que los gobernadores no pusiesen juez de minas, y que estos fuesen los alcaldes ordinarios.

“Que se prorogase el tiempo para pagar el décimo de oro.

“Que todo el oro cogido en la isla se marcase por de cuatrocientos cincuenta maravedís.

“Que mandase S. M. acañar dos cuentos de moneda para aquella isla.

“Que se confirmase la merced de que cada dos años hiciese residencia el teniente de gobernador.

“Que se abriesen caminos, pues la isla era intransitable.

---

(1) Esta carta existe manuscrita en el archivo de Simancas.—Cumpliendo la voluntad del autor la publicamos por primera vez en Cuba en el Apéndice que irá al fin de esta obra.—V. M.

"Que S. M. prestase á la isla 1,000 pesos por dos años y permitiese sisa en los mantenimientos para enviar caudrillas contra los indios alzados que ponian en peligro la isla."

Tan léjos estuvieron aquellas juntas de ser ilegales ó sólo toleradas por los gobernantes de la isla, que el Gobierno Supremo las aprobó, mandando por la provision expedida en Toledo á 15 de enero de 1529 que cada pueblo de Cuba nombrase anualmente un procurador, y que todos se juntasen una vez al año, en tiempo de fundicion, en la ciudad de Santiago, para tratar de cuanto á la isla pudiese convenir. Esta provision se conserva manuscrita en los archivos de Simancas, y de ella se hace mencion en una Memoria firmada en Santiago de Cuba á 24 de agosto de 1529 por Pedro de Paz, la cual se halla tambien en dicho archivo.

Continuaron en Cuba dichas juntas, pues en la carta que el Ayuntamiento de la villa de Puerto Príncipe dirigió á la emperatriz en 20 de abril de 1532 se leen estas palabras:

"Manda V. M. que todos los años, en tiempo de fundicion, vayan á Santiago los procuradores de las villas, y, juntamente con los de la ciudad, informen á V. M. lo que cumplé á su servicio. Fué de nuestra parte Alejandro de Aguilar, varon prudente."

Que esas juntas se congregaron en años posteriores, aparece evidentemente en otra carta que los procuradores de la isla elevaron á Carlos I en Santiago á 17 de marzo de 1540 (1), y en la que se dice: "Los procuradores de Santiago y otras villas de la isla Fernandina... hacemos saber como nos habemos juntado para le avisar de las cosas de que esta isla tiene mayor necesidad y para suplicar mande proveer en ellas." Poco más adelante prosigue: "Para platicar en el remedio desto, avemos venido á esta ciudad en este tiempo de fundicion, *señalado por V. M. para que los procuradores de la isla vengan aquí y informen á V. M. del estado de la tierra.*"

En 28 de abril de 1542 juntáronse de nuevo los pro-

---

(1) Esta carta manuscrita, se conserva en el archivo de Simancas. Legajo 22 de cartas. Véase el Apéndice.—V. M.

curadores en la ciudad de Santiago de Cuba, y, despues de varias sesiones que tuvieron, pidieron al emperador que se sirviese aprobar todo lo que habian acordado en ellas; mas como sería largo repetir aquí todas las materias que entónces se discutieron, omítolas en gracia de la brevedad (1).

Todavía en 1544 no dejaban de reunirse en Santiago los procuradores para tratar de todos los asuntos importantes de Cuba. Así consta de la relacion ó carta que dichos procuradores escribieron á Cárlos I en 22 de marzo de aquel año, y la que existe manuscrita en el archivo de Simancas en el legajo 22 de cartas.

Y despues de todo lo que acabo de exponer, gandaré equivocado en decir que aquellas juntas celebradas en algunas Antillas españolas fueron el gérmen nacional y sólido fundamento de las legislaturas que pido en mi Informe para las provincias de Ultramar? De ninguna manera, porque tales juntas encerraban todos los elementos que constituyen un sistema representativo local.

1.º La eleccion de los procuradores fué popular, pues eran nombrados por ayuntamientos tambien populares, como se hacía en Castilla para las Córtes.

2.º La representacion era completa, y aún más completa que en Castilla, porque los procuradores de ésta eran solamente nombrados por cortísimo número de ayuntamientos que tenían voto en Córtes, miéntras que en la Española y Cuba sucedía todo lo contrario, pues tomaban parte en la eleccion todos los ayuntamientos.

3.º Esas juntas no fueron casuales sino periódicas, pues en Cuba debían congregarse los procuradores todos los años en tiempo de fundieion.

4.º Los procuradores tuvieron iniciativa sin estar obligados á deliberar únicamente sobre los puntos que el gobierno quisiera someterles.

5.º Esa iniciativa fué tan amplia que se extendió á los asuntos civiles, eclesiásticos, económicos, sociales, políticos, y á cuanto cumplía al pró de las Antillas. Para convencerse de esta verdad basta tender la vista sobre las

---

(1) Ese documento existe en el archivo de Simancas, Cartas, legajo 31. véase el Apéndice.—V. A.



materias que en aquellas juntas se discutían, cuyos acuerdos se enviaban á la Corte para que la corona los aprobase ó les pusiese el  *veto*.

6.º Como el gobierno de la metrópoli pudo sancionar ó desaprobar lo acordado por las juntas, vese aquí una prerrogativa semejante á la ejercida por el gobierno inglés en los asuntos discutidos por las legislaturas de sus colonias.

7.º Aquellos procuradores tambien pidieron en caso de urgencia que el gobernador de la isla de Cuba ejecutase lo acordado por las juntas sin aguardar la aprobacion de S. M., bien que debía darle cuenta de lo que se había hecho. Y en este modo de proceder ya se descubre aquí el principio de la doble intervencion del gobierno de la colonia y del de la metrópoli; intervencion que tiene tambien lugar en las colonias inglesas que gozan de legislaturas.

8.º y último. Para completar la analogía entre los representantes de Castilla que en las Cortes se congregaban y los de las juntas de las Antillas españolas, dióseles á todos un mismo nombre, cual fué el de *procuradores*, pues el de diputados es de origen muy reciente.

Cuando estas cosas pasaban, Inglaterra aún no había fundado ninguna colonia en el Nuevo Mundo. No diré yo por esto que despues de haberlas adquirido imitase el sistema de España en las suyas, porque sé muy bien que las legislaturas de las posesiones inglesas son la fiel semejanza del gobierno británico; pero si España diese hoy á sus provincias de Ultramar legislaturas especiales, éstas no serían por cierto importacion del inglés, sipo el restablecimiento de una antigua institucion esencialmente española, modificada y perfeccionada por la experiencia de los siglos.

Si la libertad hubiera continuado en España, las juntas de procuradores de las Antillas, embrión de las legislaturas que para ellas pido, habríanse desarrollado con vigor y echado profundas raíces en su suelo; pero la férrea mano de la austriaca dinastía, ahogando en Castilla la libertad, mató tambien el gérmen de la que empezaba en el Nuevo Mundo á brotar.

Mas contra aquellas legislaturas se alza un grito,

condenándolas como máquinas de independencia. No las miraron así por cierto nuestros antepasados, á pesar de que siempre se mostraron suspicaces en este punto aún contra Colon, Hernan Cortés y los Pizarros.

Semejantes legislaturas, léjos de promover la independencia como se pretende, estrecharán la union entre las Antillas y su metrópoli. Imagínanse muchos que dichas corporaciones serian un Parlamento igual al de los pueblos soberanos. Tan engañosa suposicion da bien claro á entender que se desconoce su índole. Ningun punto de derecho internacional, ningun asunto político de aquellos que encienden las pasiones en los Congresos europeos ó americanos, ningun debate entre partidos ardientes que se disputan el poder, ninguna de estas cuestiones ni otras semejantes entran en el estrecho círculo de las legislaturas provinciales, pues sus atribuciones se reducen todas á objetos puramente locales. Ni se crea que pueden derogar las leyes generales del reino ni aún hacer por sí solas las que han de regir la provincia, porque es preciso que éstas obtengan ántes la aprobacion del jefe gobernador; y si bien entónces ya pueden, por lo comun, aplicarse provisionalmente, su sancion ó voto depende siempre del gobierno de la metrópoli: de manera que las deliberaciones de aquellas asambleas se hallan sometidas no á un simple, sino á un doble freno. Además el jefe superior de la provincia está autorizado como representante de la Corona para suspender y aún disolver la legislatura, convocando otra dentro de un plazo determinado. Una de las grandes ventajas de esta institucion, consiste en que el país interviene directamente en sus propios negocios, y al paso que así se satisface á una de las más justas exigencias de todo pueblo civilizado, el Gobierno se descarga de la enorme y odiosa responsabilidad que pesa exclusivamente sobre él en los sistemas absolutos.

Esos temores de independencia se han manifestado tambien y con más energía, contra los discursos pronunciados en las Córtes por algunos Diputados ultramarinos; y ellos fueron cabalmente uno de los argumentos que se emplearon en 1837 para privar de representacion en Córtes, á las provincias de Ultramar. Oigamos lo que dijo el Sr. Argüelles en la sesion del 10 de marzo de 1837,

contestando al Sr. Vila y al Sr. García Blanco, que era eclesiástico.

"Con las más rectas intenciones se ha puesto algunas veces al Gobierno en un conflicto al tratarse de las autoridades de aquellas provincias, y esto por sí sólo prueba la necesidad de que se rijan por leyes especiales."

"En las Cortes españolas, cualquiera que sea el calor, la vehemencia, el fuego de los Sres. Diputados; cualquiera que sean los extremos á que nos puedan conducir el patriotismo en la improvisacion, sus efectos no serán tan inflamatorios que su eco pueda producir disturbios en las provincias de la Península, porque tienen un remedio de que carecen las provincias de Ultramar por la distancia en que están de nosotros. Una órden, una providencia es un correctivo de que se carece en Ultramar. Los Diputados de América tienen el mismo derecho de hablar que los de la Península; tienen el mismo derecho para promover sus intereses, hacerlo con el calor análogo á su fibra, el Gobierno puede ser interpelado por ellos; y si con motivo de los últimos sucesos de la Isla de Cuba dijese, es un tirano el Gobernador, es un déspota, un opresor, que tienen cartas, datos ó representaciones de individuos ó cuerpos; ¿créa el Sr. Vila que el Gobierno podrá sostener á ningún Gobernador, á ningún Magistrado apostrofado de este modo? ¿Se atrevería nadie á ir á la Isla de Cuba á gobernar, sabiendo que al primer paquete que viniese de la Península le habían de llegar semejantes noticias? Llegó á tanto el deseo de complacer á los americanos, que se suprimió el título de Virey, por que dijeron que era ofensivo; se abolió, sin embargo de ser un monumento histórico de nuestras glorias; se quitó hasta el estandarte, que no era en ningún modo ofensivo sino otro monumento histórico de feliz recordacion. Se dirá: pero ¿cómo es posible creer que personas tan poseídas de amor pátrio hagan interpelaciones, y usen de palabras con objeto de sublevar aquellos países? Contestaré con lo que dice un distinguido americano á quien he aludido ya, D. Lorenzo de Zabala, Diputado en 1820 y 21 por la provincia de Nueva España. En el año 1831 publicó en París una obra preciosa con el título de "Ensayo histórico de la revolucion de Méjico, desde 1808 á 1830."

“Este autor refiriendo la historia de los sucesos que contribuyeron á separar nuestras posesiones de América de la metrópoli, voluntariamente y sin que yo crea que otro motivo le impulsase á ello más que el que mueve á todo historiador veraz, cuando refiere los hechos cuya relacion se ha propuesto, dice así: Los Diputados americanos, testigos del efecto prodigioso que habían hecho en América los discursos de sus predecesores, no creyeron poder coadyuvar en favor de la causa de su país de otro modo mejor que promoviendo en el seno de las Cortes cuestiones de independencia que presentasen á sus conciudadanos lecciones y estímulos para adquirirla. Esta autoridad señores, es para mí de tanto peso como lo es sin duda S. Crisóstomo para el Sr. García Blanco.”

Tal fué el lenguaje de un patricio insigne en la metrópoli; pero el más cruel enemigo de la libertad americana.

La índole de las legislaturas provinciales no se presta á tan duras acusaciones; porque la esfera en que se mueven, es como ya he dicho, infinitamente más reducida que la de los Diputados á Cortes.

Nunca se deben confundir los acontecimientos que nacen de la naturaleza humana con los que proceden de las instituciones políticas. Los Estados Unidos se separaron de Inglaterra, no por haber tenido legislaturas, sino porque ya habían llegado á un estado de madurez en que podían tener vida propia, y porque su metrópoli quiso despojarlos violentamente de algunos de sus derechos. Sin esta conducta, aquellos países, á pesar de sus libres instituciones, hubieran continuado por algun tiempo bajo la dependencia británica. Otras muchas colonias inglesas esparcidas por toda la tierra, tienen tambien legislaturas, y algunas desde el siglo XVII; pero ninguna, por cierto, ni pequeña ni grande, ni débil ni fuerte se ha declarado independiente. Día llegará en que tal hagan algunas que cuentan con elementos poderosos para constituirse en naciones; mas esto no procederá de la libertad de que gozan sus Asambleas legislativas sino de aquella ley eterna que prescribe que individuos y pueblos se emancipen, luego que lleguen á la edad en que puedan regirse sin tutela. Ahí está ese Canadá, ese ejemplo admirable

de gobierno colonial, y merced á él se ve el extraordinario fenómeno de que, lindando con la nacion más libre de la tierra, teniendo su inmensa mayoría el mismo origen y hablando la misma lengua, lucha contra sus halagos y se empeña en mantenerse unido á la metrópoli que tan sabiamente le ha otorgado las mejores instituciones.

Hundidas en el despotismo vivieron por tres centurias las colonias Américo-Hispanas. Algunas hicieron desde el pasado siglo enérgicas tentativas para sacudir la dominacion de su metrópoli, y todas, por fin, lograron su independencia ántes del primer tercio de la centuria que corre. Mas ¿atribuiránse estos sucesos á la libertad de que nunca gozaron, y á las legislaturas que si al principio tuvieron, despues no funcionaron? No olvide España esta leccion; gobierne con justicia á las Antillas que le quedan, y otorgándoles franca y completa libertad, afianzará su dominacion en unos pueblos que sólo aspiran á ser hijos de una buena madre, pero no á vivir esclavos bajo el cetro de un tirano. Madrid 29 de marzo de 1867.

---



## FRAGMENTOS INEDITOS

sobre la refutacion de las objeciones hechas al  
Voto particular. (1)

En 25 de Abril de 1867 los Sres. Comisionados D. Tomás Terry, Conde de Pozos Dulces, Agustin Camejo, José Julian Acosta, José Miguel Angulo y Heredia, S. Ruiz Bálviz, José Morales Lamus, José Antonio Echeverría, Nicolás Azeárate, Antonio Rodriguez Ogea, José de la Cruz Castellanos y Manuel Ortega, que constituian el grupo reformista, contestaron extensamente á las preguntas 3.ª, 4.ª, 5.ª, 6.ª, 7.ª, 8.ª y 9.ª del interrogatorio político, proponiendo la gran reforma política que en concepto de los mismos exigian la justicia y conveniencia nacional en el gobierno de las Antillas. En dicho informe se contestan los principales argumentos que contra la representacion en el Congreso nacional dejó expuestos el Sr. Saco en su *Voto particular*. La refutacion inédita de éste empieza así:

1.ª—Se dice: "Hay quien pretende que la cuestion de los Diputados ultramarinos está ya juzgada y condenada, y que no puede suscitarse de nuevo para volverse á un sistema proscripto por las Cortes Constituyentes de 1837 y por las demás que le han sucedido; deduciendo algunos de aquí que el artículo 80 de la Constitucion vigente se opone á la representacion en Cortes de las Antillas españolas."

(1) En una nota del artículo *La Revolucion de España y la esclavitud de Cuba*, inserto en *La Política* de 19 de Noviembre de 1868, dijo el Sr. Saco que pensaba reimprimir su *Voto*, acompañándolo de varios fragmentos interesantes y de la refutacion completa de todas las objeciones que le hizo un enbano á quien apreciaba. Entre sus manuscritos no hemos encontrado más que los apuntes que ahora se dan á luz por primera vez.—V. M. M.

Cierto es que yo asomé en mi Voto este argumento; pero si la impugnacion que se le hace se refiere á mí, incurrirse en grave error; y para demostrarlo, repetiré lo que entónces dije:

"Estas, las Córtes, confirmaron su resolucion, promulgando un decreto que sirvió de base al artículo segundo de los adicionales á la Constitucion de 1837, que ya he citado más arriba, y con el que tambien se han conformado todas las posteriores. Si de esto quisiera yo prevaleirme, concluiría, que la cuestion de los Diputados ultramarinos está ya juzgada y condenada, y que por lo mismo no podría suscitarse de nuevo para volver á un sistema proscripto treinta años há por las Córtes constituyentes de 1837, y por las demás posteriores. Mas no me apoyaré en este argumento para ahogar la voz de ninguno que quiera promover tal cuestion; ántes al contrario, prescindo enteramente de él, y abro campo á todas las discusiones, porque no es la ley existente la que debe prevalecer en esta materia, sino la justicia y conveniencia de los pueblos ultramarinos."

Y despues de este lenguaje ¿podrá emplearse semejante argumento contra mí? Que lo decida el lector imparcial.

2.º—Trátase de impugnar (1) la cita que hice en mi voto de un discurso pronunciado por el Sr. Argüelles en 1837 oponiéndose á la entrada de Diputados ultramarinos en las Córtes, porque éstos habian promovido en épocas anteriores cuestiones que fomentaban la independenciam de América, y que lo mismo podría hacerse en lo futuro.

La justicia y la verdad exigen que no se alteren los hechos, ni ménos mis intenciones. Cuando cité el pasaje de Argüelles estampado en mi voto, no fué con el objeto de fundarme en él para "combatir la venida á las Córtes de los Diputados de Ultramar." ¿Ni cómo hubiera podido así ser cuando en mi mismo voto anatematicé esa cita, acompañándola de estas palabras: *Tal fué el lenguaje de un patrio cio insigne en la Metrópoli, pero el más cruel enemigo de la libertad americana.*"

En prueba de que no tuve la intencion que se me supone, observaré que la cita contenida en mi voto no se halla en la parte argumentativa en que me opuse á la ve-

(1) Véase la página 124 de la *Informacion sobre reformas en Cuba y Puerto Rico.*



nida de Diputados antillanos á las Córtes, sino en la defensa que hago de las legislaturas especiales de Cuba y Puerto Rico, pues rechazadas por algunos como máquinas de independencia, yo dije que la misma acusacion se habia hecho contra la institucion de Diputados, y por eso transcribí al intento el mencionado pasaje de Argüelles.

Aparece pues, claramente, que todo lo que acerca de este asunto se trae, debe dirigirse exclusivamente á la memoria del difunto mejicano D. Lorenzo Zabala, que así lo dijo en una obra sobre la revolucion de Méjico, y á los manes de D. Agustín Argüelles, pero de ningún modo á mí, pues aunque me opuse á la venida de Diputados ultramarinos á las Córtes, no invoqué el argumento de la independencia, sino otros muy poderosos que se han pasado en silencio.

“Nó, así se dice, no servirán nuestros Diputados en las Córtes nacionales para inflamar en los antillanos ideas de independencia:—para lo que sí servirán es para que los cubanos y portorriqueños estudien y se interesen cada vez más en las cuestiones de España: para que sus Diputados contribuyan á dar á conocer á los peninsulares las especialidades de aquellas islas, y los interesen vivamente en su creciente prosperidad: para que insulares y peninsulares concurren juntos al Parlamento en que hacen las leyes nacionales, en que se ventilan todos los negocios que importan á la patria, y allí se tratan y discuten y fomenten, como fomentará seguramente con provecho de las Antillas y de la metrópoli, la recíproca estimacion de sus representantes todos Diputados de la nacion española el santo y fecundo comercio de los sentimientos y de las ideas: servirán en suma nuestros Diputados á Córtes para que respaldece la armonía que existe entre todos los intereses, entre todos los derechos de los españoles europeos y americanos.”

Este párrafo más tiene de poético que de sólido. Que los Diputados cubanos y portorriqueños estudien y se interesen en las cuestiones de España, no es malo por cierto; pero *necesita* ésta para resolverlas con acierto y provecho suyo que los tales Diputados vengán á las Córtes? De ninguna manera. Que vengán á ellas esos Diputados para dar á conocer á los peninsulares las especialidades de

aquellas islas, ¿no es confesar expresamente que los representantes peninsulares no conocen las necesidades de éstas? Pero si no las conocen, ¿cómo podrán legislar acerca de los negocios de las Antillas? Pero ahí están los Diputados antillanos, que les servirán de maestros, según se indica en el párrafo anterior. Mas ¿estarán dispuestos esos discípulos á oír las lecciones de tales maestros? Y suponiendo que así sea, ¿quién responde de que aquellas, en vez de buenas, no serán malas, á lo ménos en muchos casos? Ese *santo y fecundo comercio de sentimientos y de ideas* entre los Diputados á Córtes, antillanos y peninsulares, que tan ventajoso se supone *para que resplandezca la armonía que existe entre todos los intereses, entre todos los derechos de los españoles europeos y americanos*, ¿no está expuesto á convertirse en un foco de discordia, de odios y recriminaciones? ¿No es evidente que muchas cuestiones de las Antillas, sometidas á la deliberacion de las Córtes encontrarán una viva resistencia, y que no serán resueltas conforme á las necesidades de ellas y á los deseos de sus Diputados? Y entónces ¿podrá existir esa angelical armonía que tanto se pondera? ¿No producirá, por el contrario, el disgusto de los representantes americanos y la irritacion y aún mal querer de cubanos y portorriqueños? Y nada de esto resultará, cuando establecidas las legislaturas provinciales, cada cuerpo se mueva en su esfera particular.

3.—Preténdese impugnar una mínima parte de mis argumentos más sólidos, diciendo lo que sigue:

“Los diputados cubanos y portorriqueños no servirán de nada, porque si ellos proponen las leyes, no serán aceptadas; y si las propone el Gobierno, se aceptarán aunque ellos las combatan.”

Aquí se supone que yo hablé en términos tan absolutos, que las leyes propuestas por los Diputados ultramarinos no serían aceptadas, y sí las del gobierno, aunque aquellos las combatesen. Insistiendo en esta idea, añaden mis impugnadores: “Si fuera cierto que la voz de sus naturales no habia de servir *nunca* sino para que el gobierno y las Córtes desestimasen sus pretensiones, etc.”

Duéleme verme combatido de esta manera, pues sacando el cuerpo á la fuerza de mi argumentacion, se desnaturalizan mis raciocinios.

En la primera *proposicion* de mi voto, la cual contiene, no una razon, sino un grupo de ellas, probé que la falta de conocimientos de los Diputados peninsulares en las materias concernientes á Cuba y Puerto Rico es un obstáculo invencible para que sobre ellas puedan legislar con acierto, y á fin de esforzar más mi argumento, añadí:

“Esto sentado, y aún admitiendo la mejor intencion en los Diputados peninsulares, jamás se podrá vencer ni subsanar el vicio capital de que adolecerían las leyes para Ultramar, porque éstas, ó serán propuestas por los representantes de las Antillas, ó por el Gobierno.

“Si por aquellos, de esperar es que serán favorables á las dos Islas. Supongamos que son votadas por una mayoría del Congreso; pero se podrá afirmar que esa mayoría ha procedido con verdadero conocimiento y con íntima conviccion de que es justo y saludable á las Antillas lo que ha votado, cuando ignora sus necesidades, y cuando los elementos de su informacion sólo descansan en la relacion de lo que haya oido á algunos Diputados ultramarinos; relacion que en parte ó en su totalidad bien pudiera ser errónea, ó apasionada, ó estar expuesta á otros inconvenientes? A la verdad que este modo de legislar, por útil que pudiera ser en alguno que otro caso á las Antillas españolas, es, por lo comun, modo muy vicioso de legislar.

“¿Son propuestas las leyes por el gobierno? Si son favorables á las Antillas y las vota una mayoría del Congreso, siempre resultará lo que ya he dicho, y es, que esa mayoría vota sobre una materia que no entiende, y que por lo mismo no será más que ciego instrumento en manos del gobierno. ¿Son contrarias á los intereses de Cuba y Puerto Rico? Consolatorio es pensar que no faltarán Diputados antillanos que las combatan; pero como el gobierno ha de tener siempre mayoría en el Congreso, so pena de caer, ó de disolver las Cortes, esas leyes serán votadas. Y si esto ha de sucedar á pesar de ser contrarias á los intereses de Cuba y Puerto Rico, ¿de qué sirve entónces la presencia de esos Diputados en el Congreso? ¿Cómo se recibirían en aquellas Islas unas leyes dictadas contra la opinion y voto de sus legítimos representantes? ¿No se irritarían los ánimos de aquellos isleños y se empezarían á rumiar planes que los sacasen de tan comprometida situacion?

Ved aquí una de las consecuencias fatales á que forzosamente nos arrastraría la presencia de Diputados ultramarinos en las Córtes."

Este pasaje demuestra dos cosas: primera, que léjos de haber yo dicho que esas leyes, si propuestas por los Diputados ultramarinos *nunca* serían aceptadas, y si propuestas por el gobierno *siempre* serían aprobadas, dije todo lo contrario, pues admití que ora propuestas por los Diputados ultramarinos, ora por el gobierno, podrían ser aceptadas. Segunda: que esas mismas leyes así votadas estarían sujetas en muchos casos á los gravísimos inconvenientes que expuse, y sobre los cuales se han dignado cerrar los ojos mis hábiles impugnadores.

4.º Veamos la fuerza que tiene la cuarta impugnacion que á mi voto se hace.

"Se dice tambien que los muchos asuntos que ocupan la atencion del Congreso, y sus frecuentes disoluciones serán motivo para que no se atienda á los intereses de las Antillas; pero este doble argumento se dirige más contra el Congreso mismo que contra los Diputados cubanos y portorriqueños."

Antes de continuar, es necesario advertir que mi doble argumento no se enderezó ni contra el Congreso, ni contra los Diputados ultramarinos, pues mi intento sólo fué manifestar los graves inconvenientes que la multitud de negocios peninsulares que ocupan al Congreso, sus frecuentes suspensiones y disoluciones y cambios de Ministerio ocasionarían en el pronto despacho de los negocios de las Antillas.

No se olvide tampoco que los argumentos de mi voto son de dos especies: unos, que se dirigen contra la institucion de Diputados á Córtes por las provincias de Ultramar sin que éstas tengan legislaturas especiales; y otros, contra la vanidad de tales Diputados, á pesar de que en las Antillas hubiese legislaturas.

Los argumentos á que se alude en la impugnacion, pertenezcan exclusivamente al primer caso, mas no al segundo. El doble argumento de que me serví, encaminóse *íntegramente* al caso de los Diputados ultramarinos en las Córtes sin legislatura especial en las Antillas; pero la impugnacion á que aludo, desnaturaliza mis argumentos, confundién-

dolos y aplicándolos á partes diferentes de mi voto. Esta observacion bastaria para destruir completamente cuanto aquí se dice contra él; pero ya que se supone que mi argumentacion se dirigió contra la venida á las Cortes de esos Diputados, existiendo legislaturas en las provincias ultramarinas, no dudo afirmar que mis raciocinios, si nó en tanto grado como en el primer caso, son aplicables aun al segundo hasta cierto punto; porque en el deseo de hacer necesaria en las Cortes la presencia de los Diputados antillanos se les dan atribuciones que deben ser peculiares de aquellas legislaturas; y ved aquí como de este modo las frecuentes suspensiones y disoluciones de las Cortes y los cambios continuos de Ministerio retardarian y entorpecerian muchos y urgentes negocios de aquellas islas, no obstante que tuviesen legislaturas. Pero este punto que no hago ahora más que asomar, recibirá más adelante su complemento.

5° Impúgnase tambien otro de mis argumentos, haciéndome decir lo que sigue:

"La flaqueza humana es de todos los hombres: los Diputados antillanos pueden extraviarse, y en ese caso no seria dado aprovechar el único correctivo posible, que es la opinion de los representados, expresada por la prensa periódica."

A la verdad que me asombra semejante modo de impugnar, y todo el que lea atentamente mi voto, no encontrará en él semejante argumento. Ciertamente hablé de la flaqueza humana: cierto tambien que hablé de la influencia de la prensa periódica en la opinion pública y en la de los Diputados; pero jamás enlacé, como se hace en la impugnacion, la flaqueza humana con la influencia de la prensa periódica. Si la flaqueza humana mencioné, fué tan sólo para reconocer, que al paso que vendrían á las Cortes Diputados antillanos, llenos de patriotismo; tambien vendrian otros animados únicamente de aspiraciones personales. Bajo de este punto de vista, y sólo bajo de éste, fué como hablé de la flaqueza humana; y pretender, como desgraciadamente se hace, que yo ligué en mi argumentacion la flaqueza humana con el influjo de la prensa periódica, es alterar completamente la naturaleza de mis raciocinios.

Tan cierto es lo que digo, que cuanto expuse acerca del influjo de esa prensa en representantes y representados, fué bajo de una relacion del todo diferente, á saber: los graves daños que resultan de que vengan á legislar Diputados ultramarinos á tan larga distancia de su país. Así lo comprueban las siguientes palabras de mi voto:

"Esta última consideracion, es otro de los argumentos contra la idea de que vengun á las Córtes Diputados ultramarinos. Casi á dos mil leguas del país que representan, no es dable que en las cuestiones que se agiten, pueda la opinion pública ilustrarlos con la prontitud que se requiere ni tampoco contenerlos á tiempo en sus extravíos para enderezarlos á buena parte."

Ni quiero tampoco omitir el error que se comete, suponiendo que consideré la prensa periódica como el *único correctivo posible* de la opinion pública. Ensalcé su poderosa influencia; pero no pude mirarla como *único correctivo*, pues que el derecho de reunion de los ciudadanos, el derecho de peticion, la voz de los representantes en las Asambleas legislativas y otros elementos políticos y sociales de los pueblos, son un freno que contienen y enderezan los errores y desmanes á que están expuestos.

Bien pudiera yo pasar ya á otro asunto; pero son tan extrañas y anti-parlamentarias las ideas que emite aquí la *impugnacion*, que debo detenerme algunos momentos para refutarlas.

Para esquivar la necesidad en que están los Diputados de ser sometidos á la continua vigilancia de la prensa periódica, lo cual no puede hacerse desde Cuba y Puerto-Rico con los representantes de ellas que vengun á España, se dice: que "*los Parlamentos no son reuniones de improvisadores calenturientos, sino Cámaras legislativas á que no suelen, á que no deben llevarse ideas nuevas y de dudosa aceptacion, sino ideas ya discutidas y maduradas en la opinion pública.*"

Y qué; porque los parlamentos no sean reuniones de improvisadores calenturientos, ¿ya deja de ser necesaria aun para los Diputados más sensatos y juiciosos? Sin que los Parlamentos sean reuniones de improvisadores calenturientos, ¿deja por eso de haber en ellos cierto número que lo son, y para quienes la opinion pública enérgica-

mente expresada por el órgano de la prensa es el freno más poderoso? Decir que á las Cámaras legislativas "*no deben llevarse á discusion ideas nuevas y de dudosa aceptacion, sino ideas ya discutidas y maduras en la opinion pública;*" es no sólo desconocer la índole de los Parlamentos, sino olvidarse de lo que en ellos frecuentemente sucede. Gozando, como debe gozar, cada uno de sus miembros de iniciativa, tiene derecho de proponer, no ya las *ideas discutidas y maduras* en la opinion pública, sino aún las *más nuevas y de dudosa aceptacion*.

Cuando en 1789 se propuso por primera vez en la Cámara de los Comunes de Inglaterra la abolicion del tráfico de esclavos, ¿era esa por ventura una idea ya *discutida y madurada* en la opinion pública? Tan no lo era, que sólo pudo lograrse el triunfo de tan noble pensamiento al cabo de 20 años de continuos debates en el Parlamento y de estar ejerciendo su constante influjo la prensa sobre la opinion pública. Cuando los católicos aspiraron por primera vez á sentarse en él, ¿era esa una idea ya *discutida y madurada* en la Gran Bretaña? Tan no era así, que los católicos no pudieron alcanzar su objeto sino al cabo de una prolongada lucha y del fundado temor de una guerra civil entre Inglaterra y la Irlanda. Debo también decir, que ocurren frecuentemente mil incidentes imprevistos, que sin ser proyectos de leyes, ocupan la atencion de los Parlamentos sin prévia preparacion; y que por lo mismo necesitan del apoyo de la prensa para ilustrar, ya esos mismos incidentes, ya las interpelaciones de cualquier género que sean. Cuando el inglés Cobden inició la gran reforma mercantil que tan ventajosa ha sido á su patria, ¿era esa una idea ya *discutida y madurada* en la nacion Británica? Tan lo contrario fué, que los pocos individuos que se pusieron á la cabeza del movimiento, se encontraron casi solos, y sólo á fuerza de constancia y de trabajo, lograron cambiar la opinion pública que tan contraria les era. Y despues de estos ejemplos y de otros muchos que pudiera citar, así en Inglaterra como en diferentes naciones, ¿se nos vendrá á decir, "*que á los Parlamentos no deben llevarse á discusion ideas nuevas y de dudosa aceptacion, sino ideas ya discutidas y maduras en la opinion pública;*" ¿Y quién osará negar que el triunfo

glorioso de esas y de otras nuevas ideas no se debe casi enteramente al saludable influjo de la prensa periódica en el ánimo de los miembros que forman los Parlamentos? Pero aún suponiendo que á éstos no se lleven sino ideas ya discutidas y maduradas en la opinion pública; no por eso deja de ser utilísima la prensa periódica, porque bien pueden ocurrir nuevos incidentes que hagan cambiar ó modificar la naturaleza de los negocios, y en tales casos la prensa es necesaria para ilustrar y dirigir la opinion pública por la nueva senda que debe tomar.

Se dice también, que *"el único correctivo de los Diputados flacos, de los desleales, de los que por maldad ó por error fallen á lo que de ellos esperaban sus representados, está en el desprecio ó en la desaprobación de éstos que siempre hay tiempo de demostrar."*

Sin admitir yo en términos tan absolutos, que el único correctivo de los Diputados á que se alude, sea el desprecio ó la desaprobación de sus representados, dejaré correr esa idea en los términos que se expresa, para preguntar: ¿no es la prensa periódica el medio más eficaz que contribuye á difundir ese desprecio ó desaprobación? ¿no es ella la que con más eficacia influye en formar en los hombres ese sentimiento de desprecio?

Ni admito tampoco la frase en que se dice, *que siempre hay tiempo de demostrar ese desprecio ó desaprobación.* No. La manera más eficaz de impedir los males á que puede dar origen la siniestra conducta de los Diputados, es acudir en tiempo oportuno para contener sus extravíos. Mientras se discuten los negocios, mientras son palpitantes las cuestiones, entonces es cuando la prensa debe descargar sus golpes sobre aquellos que se olvidan de su deber, pues reservar el castigo moral para tiempos posteriores, es exponerse á que nunca se imponga, ó á lo ménos que sea muy débil por lo mismo que es tardío.

Se dice por último, que los derechos de las Antillas no estarán *de seguro mejor garantizados sin Diputados en el Congreso Nacional que con ellos.*

Ya aquí se sale de la cuestion, porque de lo que se trata es de la influencia periódica en los Diputados y nó de que éstos vengán ó dejen de venir de Ultramar al Congreso Nacional. Sobre este último punto, muy largo dis-



currí en mi voto, y refiriéndome á él, no vacilo en repetir, que los derechos de las Antillas solamente estarán asegurados cuando tengan buenas legislaturas locales, y que los Diputados que aquellas tierras envíen á las Cortes, lejos de propender á la libertad y conservacion de esos cuerpos legislativos, serán sus enemigos más formidables.

Para probar que la concesion de Diputados á Cortes por las provincias de Ultramar falsearía en ellas el sistema representativo, fundéme en la dificultad que muchos de los elegidos tendrían para venir á España, ya por la distancia, ya por otras consideraciones que expuse.

Pero ¿cómo se me inapugna? Empiézase por suponer que yo dije que: "si los nombrados son ricos, no estarán dispuestos á abandonar el cuidado de sus intereses, y *sólo vendrán por miras de particular utilidad.*" Como en estas últimas palabras no se hace ninguna excepcion, claro es que se me imputa haber yo dicho, que *todos* los ricos que vendrían, *sólo* sería por miras de interés personal. Para demostrar la inexactitud de este aserto, trascribiré las palabras de mi voto: "Es pues seguro, que de los que se denominan ricos en las Antillas, pocos vendrían, y que de entre esos pocos, *algunos* lo harán más por utilidad propia que por servir al país." Lo mismo repetí en otro pasaje de mi voto: "La consecuencia necesaria de todo lo dicho es, que los ricos no vendrían sino en corto número, y que *algunos de éste*, no tanto sería por patriotismo, cuanto por miras privadas." Estas dos citas demuestran la enorme diferencia que hay entre lo que yo dije y lo que otros me hacen decir. Ni tampoco está demás recordar que esa falta ó debilidad no la apliqué *exclusivamente* á los ricos, que tambien la extendí á ciertos pobres y á otros de mediana fortuna.

Dije que la distancia era uno de los obstáculos de la venida á las Cortes de los Diputados ultramarinos; pero á esto se me responde, "que esto podía tener una gran fuerza por los años de 1837, pues hoy el viaje de las Antillas á Madrid se hace en ménos tiempo del que entónces se consumía desde las Canarias; y en poco más de los dias que se empleaban desde las provincias extremas de la Península." Todo esta no significa más sino que en 1837 la distancia oponía á la venida de los Diputados de las

Antillas á las Córtes un obstáculo mayor que hoy; pero de aquí no se infiere que ese obstáculo haya desaparecido, y de que no sea muy poderoso todavía. Por grandes que sean las facilidades que ofrecen el vapor y los caminos de hierro, nadie podrá establecer comparacion entre un viaje de Canarias, de Barcelona, Cádiz ó Bilbao á Madrid y un viaje á esta Capital desde Cuba ó Puerto-Rico.

Para probar que la distancia ya influye poco en la venida de los Diputados, invócase lo ocurrido en la Junta de Informacion, pues "Hemos visto (así se dice) venir para volver á irse pronto despues, á casi todos los Comisionados elegidos por las Antillas, á muchas personas nombradas por el Gobierno que residían allí."

Cabalmente esa misma Junta de Informacion prueba lo contrario de lo que se afirma, y corrobora mi argumento.

Que la distancia no es obstáculo para venir á la Península, preténdese tambien probar con los numerosos estudiantes de Cuba y Puerto-Rico que se encuentran en algunas Universidades de España; con el gran número de familias distinguidas de las Antillas, residentes en Madrid, y con algunos cubanos y portorriqueños empleados en la Península en todas las carreras del Estado.

En cuanto á los estudiantes, ni son tantos como se pretende, pero aun cuando fuesen muchos, eso nada probaría. Entre esos estudiantes y los Diputados á Córtes de las Antillas no cabe comparacion, pues aquellos generalmente son hijos de familia, que no tienen intereses propios que cuidar, que viven con una corta mesada, que no vienen á figurar en un alto puesto social, que no dejan en su país ni hijos ni mujer, y que en vez de sufrir quebrantos, vienen en pós de una carrera lucrativa, pues por el fatal sistema de enseñanza que rige en las Antillas, muchos jóvenes tienen que salir de ellas para buscar en España ó en el extranjero los conocimientos de que se les priva en su propia tierra. ¿Y son éstas por ventura las circunstancias en que se hallan los Diputados que vendrían por Cuba y Puerto-Rico? El buen sentido repugna á semejante comparacion.

Que de aquellas islas hay familias distinguidas en Madrid, cierto y muy cierto es; pero esas familias residen

allí por su gusto ó por otros motivos que las sean provechosos; pero no es ésta la condicion de un Diputado Antillano, el cual tiene que obedecer, en muchos casos, no á su voluntad, sino á un compromiso público que le coloca en una situación difícil y embarazosa. Por esta misma razon no pueden equipararse esos Diputados á ciertos cubanos y portorriqueños empleados en la Península, pues con el hecho sólo de ser empleados, ya viven de su sueldo, pudiendo arreglarse con más ó ménos economía; mientras que el Diputado Antillano tiene que sostenerse de sus propias rentas, y con una decencia de que no le es dado prescindir sin mengua y desdoro del país que representa.

Se dice igualmente que "el día de la comunión política de las provincias de Ultramar con las de la metrópoli en el Congreso Nacional, sería mayor sin duda el número de los antillanos residentes ó transeúntes en Madrid,—lo cual no serviría seguramente sino para fomentar la recíproca estimacion de los que son hermanos por la naturaleza y es justo y conveniente que lleguen á serlo por la ley."

Mal medio en verdad se escoge para fomentar la recíproca estimacion de peninsulares y antillanos, pues no serían muchos los que de éstos viniesen á España tan sólo por ver la cara y oír los discursos de sus Diputados. Para fomentar esa recíproca estimacion vale mucho más una buena medida económica. Un decreto ó ley que declarase libre de derechos la entrada de los productos de las Antillas en España y de los de ésta en aquella, serían infinitamente superiores á cuantos Diputados cubanos y portorriqueños pudiesen venir á las Cortes. Pensar que éstos serán el lazo de recíproca estimacion entre las Antillas y su Metrópoli es una fatal ilusion. Para que así fuese, sería preciso, ó que todos los Diputados ultramarinos fuesen dóciles instrumentos del Gobierno y de los representantes peninsulares, ó que éstos y aquél siempre complaciesen á los antillanos en todas sus aspiraciones; pero como ni lo uno ni lo otro ha de suceder, necesariamente habrá en muchos casos divergencias y acalorados debates entre los intereses y pretensiones de la metrópoli y las colonias. De aquí resultará, que ese pretendido vínculo de union por medio de los Diputados, se conver-

tirá en una fuente de disgustos y muchos odios. Aun sin debates, aun sin notable divergencia de intereses, la muchedumbre de negocios peninsulares á que deben atender las Córtes, las hará descuidar, mal de su grado, muchos asuntos urgentes de las Antillas, y que por lo mismo reclaman una pronta resolución. ¿Y esta lentitud, esta demora en el proceder no ocasionarán agrias quejas contra la metrópoli? Ved aquí, cómo esos Diputados que se nos quieren presentar como órganos de *recíproca estimación* vienen á ser fatalmente los que destruyen esa ilusoria armonía que tanto se decanta.

Dije tambien, que la gran ventaja que ofrece la reeleccion de Diputados, no es fácil conseguirla en Cuba ni en Puerto-Rico. Mas á esto se me contesta, que "*estas reelecciones* recaen generalmente en todos los Parlamentos del mundo como en el Congreso español, en hombres que aunque no hayan heredado ni adquirido pingües rentas, han encontrado carreras reproductivas con que residir en la Córte sirviendo á los intereses de su familia." No esperaba yo por cierto que se me hiciese tal raciocinio; porque todo hombre sensato conocerá, que no es lo mismo asistir un español residente en España al Congreso de Madrid, un francés al Cuerpo legislativo de París, un belga á las Cámaras de Bruselas, y un inglés al Parlamento británico, que un cubano ó portorriqueño que tiene que surcar los mares con grandes gastos ó incomodidades, y alejarse á casi dos mil leguas de distancia de sus intereses, de sus hogares, de sus relaciones y amigos y aún de sus más caras familias.

Que la estimacion pública sea la recompensa, como se pretende, del desempeño de sus deberes, y aún del sacrificio que haga, grato y muy grato es al corazon humano; pero no es esta la punta que ciegamente dirige al hombre, pues él procura unir el público aprecio á los intereses; y si bien hay algunos que saben sacrificar éstos al servicio de la patria, su número es muy corto, porque tanta abnegacion no es el patrimonio de la humanidad.

Por último, la renta á que se alude de 3,000 pesos para los Diputados de Cuba y de 2,000 para los de Puerto-Rico, podrá servir solamente para los que no tengan familia y vivan muy frugales en Madrid, pues ella es in-

suficiente para los que tengan mujer ó hijos, ya los traigan consigo, ya los dejen en su país. Por otra parte, cómese una inadvertencia, al fijar esa renta en 3,000 pesos para Cuba y en 2,000 para Puerto-Rico, porque como esas cantidades no han de gastarse en aquellas islas sino en Madrid, debieron ser iguales para una y otra Antilla, pues el precio de la vida en esta capital lo mismo es en igualdad de circunstancias para un cubano que para un portorriqueño.

NO HAY NECESIDAD DE DIPUTADOS PARA TRATAR DE LA  
ABOLICION DE LA ESCLAVITUD.

Se dice que hay necesidad de Diputados á Córtes para tratar de la abolición de la esclavitud; pero tal pretension es contraria á lo mismo que se propone por el grupo reformista en su informe sobre la organizacion política de las Antillas. En la *base décima cuarta* se dice: "cada una de las citadas Corporaciones (la Diputacion insular y la Junta provincial que forman la legislatura) tiene iniciativa para discutir, deliberar y acordar sobre todos los asuntos que peculiarmente interesen á la isla respectiva; y con especialidad: aquí se empiezan á enumerar esos asuntos, y en el núm. 5.º se lee lo que transcribo: "sobre las medidas convenientes para abreviar la sustitucion del trabajo libre al esclavo." Esto quiere decir claramente, que la legislatura cubana debe estar autorizada para tratar y resolver la cuestion de la esclavitud. Pero si lo está por una de las atribuciones que *especialmente* se le conceden; ¿por qué se piden entónces Diputados á Córtes para ese mismo asunto? ¿No es esto despojar á la legislatura insular de tan preciosa atribucion, traspasándola á los Diputados á Córtes? ¿Se pretenderá que tanto éstos como aquélla puedan deliberar y resolver sobre la cuestion de la esclavitud? Y si los Diputados la resuelven en un sentido, y la legislatura en otro, ¿no resultará una confusion ó un choque que no sólo será funesto á las Antillas, sino á las prerogativas de sus legislaturas especiales?

A la verdad que la resolucion de esta materia incumba mucho más á Cuba y Puerto-Rico que á la metrópoli, porque ellas son las directamente interesadas en remover

los peligros y en alejar las fatales consecuencias que pudieran hasta arruinarlas. Si el honor de la metrópoli está empeñado en lavar la mancha de la esclavitud, tambien lo está el de las colonias; y seguro es, que éstas procederán con más cautela y circunspección que aquélla, sin abrir los debates apasionados de las Córtes, y que pueden ocasionar disturbios y levantamientos entre los negros de las Antillas. Para que las legislaturas de éstas, y no las Córtes, sean las que traten de asunto tan delicado, hay una consideracion muy poderosa. Si la libertad dispensada á los esclavos emana de las legislaturas, ellos la mirarán como un bien que éstas les conceden, resultando de aquí un sentimiento de gratitud y de buen querer á sus antiguos amos; pero si son las Córtes las que decretan la emancipacion, entónces los esclavos creerán que la metrópoli es la que los hace libres á despecho de sus amos, y que éstos se someten de mal grado á la imperiosa ley dictada por España. Semejante idea no es una grata perspectiva para las Antillas pues no está calculada para apagar los ódios y conciliar el buen querer entre los libertos y los que fueron sus señores.

---

## LA ESCLAVITUD EN CUBA

### Y LA REVOLUCION DE ESPAÑA.

“Aunque no teugo esclavos, soy cubano, y, como tal no puedo ser indiferente á la suerte de mi patria. Nunca he aspirado al título de abolicionista; pero fuílo cuando en Cuba nadie lo era, y á extirpar en su suelo la esclavitud, no de un golpe, sino gradual y progresivamente, encamináronse algunos de los escritos que desde mi primera juventud empecé á publicar.

El error de muchos abolicionistas consiste en que miran esta grave cuestión bajo un solo punto de vista, cual es la libertad del esclavo, sin advertir que á su lado existen los intereses del amo y del Estado. Si en Cuba hay una humanidad negra, también hay una humanidad blanca, que siendo superior por su número, y más todavía por su ilustración y por otros títulos recomendables que posee, no es justo ni político se la sacrifique á las violentas exigencias de la primera, exigencias que en último resultado serian funestas, no sólo á los mismos esclavos, sino á la metrópoli.

Quisieran algunos que, atropellándose cuantas consideraciones se deben guardar en punto tan espinoso, se libertasen repentinamente á todos los esclavos de Cuba, pero esos señores que con tanto énfasis nos prodigan sus frases pomposas sobre los derechos del hombre, y que quieren darse aire de liberales y filántropos ante la Europa, cuando nada arriesgan porque nada tienen en Cuba que perder, harian mejor en suscribirse con algunas cantidades de dinero para ayudar á España y á Cuba en la buena obra de la emancipación.

Mas ¿puede esta efectuarse de un golpe en aquella Antilla, sin arruinarla completamente?

Ni la metrópoli ni la colonia tienen recursos con que indemnizar á los amos de esclavos; indemnizacion que no sólo es justa y necesaria, por ser la esclavitud una propiedad sancionada, fomentada y siempre reconocida por las leyes españolas, sino porque es un medio de que el propietario se valdría para pagar el salario de los brazos libres que habria de emplear para suplir la falta del trabajo forzoso.

Verdad tan palpable es esta, que todas las metrópolis la han admitido al libertar los esclavos de sus colonias.

Inglaterra gastó en indemnizar á los amos la gruesa suma de CIENTO MILLONES DE PESOS; debiendo advertir que les anticipó casi la mitad seis ó siete años ántes del plazo en que debian ser libres los esclavos.

Francia indemnizó tambien á sus colonos, y si bien la república se mostró con ellos mezquina y lenta en el pago que de justicia les debia, ocasionando por esto graves males, al fin los indemnizó.

Indemnizacion tambien señaló Dinamarca á sus colonos. Suecia hizo lo mismo; y últimamente la Holanda ha hecho otro tanto.

Tenemos, pues, dos cosas que jamás se deben olvidar: una, que siempre se han respetado los derechos de los colonos, procurando indemnizarlos; otra, que esta indemnizacion nunca la han pagado las colonias, sino únicamente las metrópolis. Y dicho sea de paso, estas nunca han tenido escrúpulos en hacerlo, á pesar de que estaban convencidas de que muchedumbre de esclavos habian sido importados de contrabando en sus colonias.

Segun mis cálculos, Cuba cuenta hoy unos *trescientos cincuenta mil esclavos*; y, por mucho que haya bajado su valor con los recientes sucesos de los Estados-Unidos, no se puede fijar en menos de *cuatrocientos pesos* el de cada uno, por término medio. Antes, pues, de dictarse el decreto de abolicion en masa, necesario es saber de donde pagará la metrópoli á los propietarios cubanos la enorme suma de *ciento cuarenta millones de pesos*, ó sean *dos mil ochocientos millones de reales* á que ascenderian los esclavos. Y por ventura, ¿tiene España esta cantidad? Perdoneme el lee-



tor que haga tal pregunta. Pero aun suponiendo que la tuviese ¿estaria ella dispuesta á emplearla en la emancipacion de los esclavos de Cuba?

Esta dedicaria gustosa á obra tan benéfica y patriótica gran parte de sus recursos; pero, abrumada de contribuciones, teniendo que pagar el costosísimo personal de su administracion, una escuadra y un ejército muy numerosos, los sueldos de las legaciones españolas en toda la América, los pesados gastos de la colonia de Fernando Póo, y por último, remitiendo actualmente á su metrópoli, bajo el nombre de *sobrantes*, algunos millones de duros, imposible es que, en medio de tan depreciable situacion, la infeliz Cuba consagre, como quisiera, parte alguna de sus fondos al rescate de sus propios esclavos.

Ante semejante perspectiva, ¿quién osará sostener que debe darse repentinamente la libertad á los esclavos de Cuba? Pero si esto es imposible por falta de dinero, ¿lo tambien por otras razones muy poderosas.

La esclavitud es contemporánea á la conquista. Con ella hemos vivido por más de tres siglos y medio, y confundidos é íntimamente identificados todos los grandes intereses de Cuba con tan fatal institucion, no es dado romper de un golpe con ella *sin hundir á Cuba en el mar que la circunda*. La emancipacion en masa desorganizaría al instante todos los trabajos, pues la mayor parte de los esclavos abandonarían las haciendas para gozar, á su brutal manera, del don de la libertad. Y entonces, ¿cómo reponer de pronto el inmenso vacío de tantos brazos arrancados súbitamente á la agricultura y á los demás ramos de la produccion cubana? Pensar que los esclavos permanecerían en esos campos, triste recuerdo de sus dolores, es un completo delirio. No se transforma el hombre en un día, y por grandes que sean los prodigios de la libertad, su mágico poder no alcanza á tan repentina transformacion. Los negros huirían de las tierras que regaron con su sudor, y, derramándose por los pueblos y ciudades, por las orillas del mar y de los ríos, por los bosques y los montes, entregaríanse á la vagancia, á la más asquerosa inmoralidad, al robo, al asesinato y otros crímenes, cortejo inseparable de hombres semi-salvajes.

Llevadas de estas consideraciones, ninguna de las

metrópolis ha libertado á los esclavos de sus colonias, sin haber ántes dictado medidas preparatorias que impidiesen en lo posible las fatales consecuencias que sobre ellas habrían caído con una resolución precipitada.

Inglaterra, la primera, que rompió la marcha, empleó muchos años de preparacion ántes de decretar la libertad de sus esclavos. Dio el primer paso en esta carrera el 15 de Mayo de 1823, y trabajando continuamente en este asunto, no promulgó hasta agosto de 1833 la ley en que, sometiendo desde entónces todos los esclavos á un sistema de aprendizaje de siete años, les reservó la libertad para el de 1840. Véase aquí como Inglaterra no procedió á la ligera en asunto de tanta gravedad, pues que de Mayo de 1823 á 1840, en que debía cesar la esclavitud en sus colonias, corrieron diez y siete años, y si bien sus negros alcanzaron la libertad ántes de ese último año, fué porque los colonos tuvieron por conveniente acelerar el plazo que se les habia concedido.

En Francia deben distinguirse dos períodos: el de la revolucion del siglo pasado, y el del reinado de Luis Felipe hasta la república, en 1848.

La Asamblea Constituyente, congregada en 1789, en nada tocó á la esclavitud de las colonias francesas; pero salieron de su seno las primeras chispas del incendio que devoró á Santo Domingo; pues proclamando la igualdad política entre los blancos y los libres de color, hijos de padre y madre tambien libres, ensangrentóse aquella region. Esta medida, y los manejos criminales de algunos franceses que no por haber nacido de cierto fanatismo político, dejan de merecer ese nombre, agravaron la situacion de aquella infeliz Antilla; y para colmar su infortunio, la convencion sancionó por aclamacion el terrible decreto de 4 de Febrero de 1794, en que declaró libres y ciudadanos á todos los esclavos de las colonias francesas. En la memorable sesion celebrada en aquel dia, infausto para ellas, el sanguinario Danton exclamó en su frenesí: *Hoy ha muerto el inglés*; pero el inglés no murió: Danton espiró en la guillotina, y Francia perdió á Santo Domingo, su colonia más preciosa. Escaparon de la tormenta, aunque con angustias y zozobras, la Martinica, porque cayó en poder de Inglaterra, que la retuvo hasta la paz

de Amiens, en 1802, y las lejanas islas de Francia y de Borbon, que ni publicaron aquel decreto, ni permitieron desembarcar en sus playas á los agentes de la Convencion que lo llevaban, ni tampoco reconocieron el feroz gobierno de aquella época.

No fué esta la suerte de la Guadalupe: allí corrieron arroyos de sangre entre los blancos, ingleses y franceses, y los negros libres y esclavos. Devastada la colonia, no habia ya casi labradores, ni haciendas que cultivar, y amenazados del hambre, sus habitantes armaron corsarios para salir á robar en el mar el alimento que la tierra les negaba. En tan calamitosas circunstancias, Hugués, agente de la Convencion en aquella isla, no queriendo publicar la Constitucion de la república, escribió el 9 de agosto de 1796 al ministro de las Colonias una carta dolorosa en que se leen estas palabras: . . . "¿Quién podrá contener á noventa mil individuos fuertes y robustos, irritados por largas desgracias? ¿Quién impedirá los funestos efectos de la ignorancia y del embrutecimiento en que los ha hundido la esclavitud? ¿Serán tres mil personas de las que, dos mil detestan tanto el orden de cosas como el gobierno republicano? La Constitucion, léjos de ser un beneficio para la colonia, será su pérdida . . . *sólo por gracia es como puede llevarse á estos desgraciados al estado á que el Gobierno quiere llamarlos.*" Estas últimas palabras son una leccion elocuente y terrible que nunca debieran olvidar los presuntos reformadores que, en su delirio, pretenden curar en un dia las dolencias de la humanidad.

La mano fuerte de Napoleon, empuñando las riendas del gobierno, restableció en todas las colonias francesas no sólo la esclavitud, sino el comercio de esclavos: y con esta medida se cerró la primera época de la emancipacion en Francia. Vengamos á la segunda.

Sin tomar en cuenta las leyes preparatorias que para llegar gradualmente á la extincion de la esclavitud se promulgaron desde 1830, un miembro de la Cámara de diputados presentó á esta en 10 de Febrero de 1838, un proyecto de abolicion *parcial*, que combatido por el gobierno, no surtió el efecto que su autor y otros diputados deseaban. El 26 de Mayo de 1840 nombróse una comision

compuesta de cuatro pares, ocho diputados y cinco individuos no pertenecientes á ninguna de esas Cámaras. Esta comision presentó al gobierno en Marzo de 1843 un célebre informe, redactado por su digno presidente. Dividiéronse los pareceres, y formalizáronse dos votos, uno de la mayoría y otro de la minoría. Aquella propuso que se sometiesen los esclavos, durante diez años, á un sistema de aprendizaje, y que vencido este plazo, todos quedasen libres desde el 1.º de Enero de 1853. El voto de la minoría era que se entrase inmediatamente en la abolicion gradual, señalando para concluir la el término de veinte años.

Este breve relato manifiesta que, tanto en un caso como en otro, se concedia un largo plazo para extinguir la esclavitud. Pero ántes de convertirse en ley esos proyectos, vino la república en 1848, y, fiel hasta cierto punto á sus violentas tradiciones, declaró de un golpe la libertad de los esclavos por el decreto de 27 de Abril de aquel año. Conmoviéronse las colonias. En la Martinica hubo asonadas, sangre, muertes é incendios. Horrores semejantes repitieron en Guadalupe en el 49 y 50; y á tal extremo llegaron los males en la Guayana, que algunos de sus principales habitantes propusieron la cesion de la colonia á los Estados-Unidos.

Suecia, á pesar de que sólo tenía el cortísimo número de 531 esclavos en su única colonia de San Bartolomé, no los libertó simultáneamente, pues, habiendo manifestado el rey á los Estados, en 1844, que creía llegada la oportunidad de abolir la esclavitud, la legislatura de 1846 votó la cantidad anual de 50,000 francos para que el gobierno fuese libertando paulatinamente á los esclavos.

Dinamarca inició esta obra por un rescripto real de 22 de Noviembre de 1834, y sin detenerme en todos los pasos que dió hasta el logro final de sus deseos, lleguemos á 1846, en que, á consecuencia de una proposicion hecha por un diputado á los Estados, vióse obligado el gobierno á presentar un proyecto de ley para la completa emancipacion. El 28 de Julio de 1847 publicóse un decreto en que, declarándose libres á los nacidos desde ese dia, abolíase tambien la esclavitud, pero no inmediatamente, sino despues de doce años. Las turbulencias de las Antillas francesas en 1848, escitaron á los negros de las dinamar-

quesas, y poniéndose en abierta insurreccion, fué preciso darles la libertad, despues de haberse derramado mucha sangre.

Hasta 1853 no entró Holanda en el movimiento abolicionista. En dicho año se nombró una comision para entender del asunto, y desde entóncees á 1855 presentáronse treinta y nueve proyctos, siete para las Antillas y treinta y dos para Surinam, situado entre la Guayana francesa é inglesa. Examinados detenidamente, extendiéronse dos informes, uno para esa colonia en Agosto de 1855, y otro para las Antillas en Mayo de 1856, y de ellos resultó un proyecto de ley que fué presentado á la segunda Cámara de los Estados generales el 24 de Setiembre de 1857. Pero Holanda, no satisfecha todavia, retiró aquel proyecto para modificarlo de nuevo, trasformándolo en otro que fué sometido á las Cámaras en 25 de Octubre de 1858, el cual no se convirtió en ley sino despues de haber pasado algunos años.

Y cuando todas las metrópolis que nos han precedido en la carrera de la abolicion han marchado con tanta lentitud y circunspeccion, ¿pretenderemos nosotros resolver en un dia la gravísima cuestion que envuelve, no ya la prosperidad de Cuba, sino su misma existencia?

A diferencia de los colonos ingleses y franceses que opusieron á sus metrópolis la más tenáz resistencia, Cuba está dispuesta á entrar en la nueva senda, con tal que no sea para arruinarla. Estos nobles sentimientos horran al pueblo cubano, y así por ellos como por un principio de rigurosa justicia, oírsele debe en asunto de tan gran trascendencia. Y al decir que oírsele debe, no aludo ni remotamente á pedir que vengan Diputados por Cuba á las Córtes españolas. (1).

Cuando el gobierno inglés trató de abolir la esclavitud en sus colonias, recomendó á las legislaturas de estas

(1) En el voto particular que en calidad de comisionado por Cuba, presenté el 29 de marzo de 1867 á la Junta de Informacion reunida entóncees en Madrid para tratar de varios asuntos de Ultramar, expuse las muchas y sólidas razones que tengo para no admitir Diputados á Córtes por aquellas provincias. Ese Voto, sin saberlo yo, imprimíase en Nueva York con otros documentos relativos á dicha Junta, formando todo un grueso volumen, que un amigo ha tenido la bondad de prestarme, y en el cual he visto con dolor que mi Voto está plagado de errores. Para limpiarlo de ellos, forzoso me será recomprimirlo, acompañándolo de varios apéndices interesantes, y uno de ellos contendrá la refutacion completa de todas las objeciones que le ha hecho un cubano á quien aprecio.

que se ocupasen en resolver esa cuestion; pero las colonias, en vez de secundar los deseos de su metrópoli, pusieron con ella casi en rebelion; y entónces, y solo entónces, fué cuando el gobierno y el Parlamento, usando de su alta potestad legislativa, procedieron con total independencia de las legislaturas coloniales. Cuba no se halla en este caso; y si tuviese la legislatura por que incesantemente he llamado toda mi vida, á ella deberia someterse el asunto de que se trata, y seguro estoy de que lo resolveria satisfactoriamente; pero como de legislatura especial carece preciso es consultar para el acierto á todas las corporaciones principales de la isla y á las personas influyentes que la habitan.

A mi me parece que, sin la más leve perturbacion, sin perjudicar á los propietarios, y sin contraer empréstitos, yo pudiera elaborar y presentar á Cuba un plan de emancipacion muy sencillo, muy poco costoso, y por lo mismo, muy practicable. Este plan no podrá manumitir todos los esclavos ni en cuatro ni en seis años. Tampoco señalará tiempo ni dia fijo en que se llegue á la total desaparicion de la esclavitud, no sólo porque es aventurado y peligroso presentar á los esclavos la libertad en perspectiva, prometiéndosela á determinado dia, sino porque, contándose solamente con recursos eventuales para indemnizar á los amos, el plazo final de la esclavitud necesariamente ha de prolongarse ó acortarse, segun que aquéllos disminuyan ó aumenten.

Aunque empleo frecuentemente en este papel las palabras *abolicion*, *emancipacion*, *libertad* de los esclavos, quisiera que, al tratarse de esta materia, se usasen lo ménos posible, ó que se proscribieran del todo, pues más sirven para alarmar, que para resolver la cuestion. Proclamar la libertad de los esclavos ántes de que llegue la hora de dársela, es arrojar una ton incendiaria en la sociedad cubana, porque se despiertan deseos que, no pudiendo realizarse de pronto, incitan á los esclavos á sediciones y levantamientos. Si ellos pueden llegar á ser libres sin que se empleen esas palabras, qué necesidad hay de estarlas repitiendo, cuando su sonido puede ser fatal, no sólo á sus amos sino tambien á ellos mismos? Aconseja, pues, la prudencia que apliquemos otras voces que,

no estando expuestas á esos peligros, dan el mismo resultado.

Recuerdo que cuando el 15 de Mayo de 1823 se hizo en el Parlamento británico por Mr. Buxton la primera mocion para que se tratase de la libertad de los esclavos en las colonias inglesas, el célebre Canning, acogiendo esa mocion á nombre del gobierno, propuso que se suprimiese la palabra *libertad* y que en su lugar se dijese: *Es conveniente adoptar medidas decisivas y eficaces para mejorar la condicion de la poblacion esclava en los paises de la dominacion de S. M.*

Este lenguaje circunspecto de Canning es más necesario en Cuba que en las colonias inglesas, porque Inglaterra estaba en mejor aptitud que lo está hoy España para reprimir cualquiera tentativa de los esclavos y remediar los males que podieran nacer. No olvidemos que en ese mismo año estallaron sediciones en la Guayana y en Jamaica, y que fueron producidas por ciertos debates acalorados y por las indiscretas predicaciones del clero protestante, que desde el púlpito ensalzaba los beneficios que el Parlamento y el rey se proponian conceder á los esclavos. En este punto debemos ser muy sóbrios de palabras, pues lo que importa es ejecutar mucho y hablar lo ménos posible. Fundado en estas consideraciones, excluiré del plan que me propongo bosquejar esas voces mal sonantes en Cuba, y aunque pudiera sustituirlos la palabra *manumision*, derivada del latin, muy pocas veces la emplearé; dando al referido plan el título de *Proyecto para transformar en Cuba el trabajo rústico y urbano*. Al emitir estas ideas, no faltarán algunos que me tachen de exagerado y aún de ridículo; pero el hombre reflexivo, que conoce la influencia de los nombres en las cosas, sabrá apreciar la importancia de mi reserva.

Aquí pudiera concluir este artículo; pero fáltame todavía que tocar un punto en que van envueltos los más grandes intereses de España. Lanzada ésta en el inmenso piélago de la revolucion, nadie es capaz de pronosticar cuáles serán sus vicisitudes, ni su final desenlace. De los hombres que hoy ocupan el poder, nada temo por la suerte de Cuba, pero aunque improbable, no es absolutamente imposible que los destinos de la nacion caigan en ma-

nos de algun partido violento que comprometa la existencia de Cuba. Contra tan peligrosa eventualidad debo esforzar desde ahora mi ya apagada voz, para hacer á España el más eminente servicio, diciéndole una terrible verdad.

Antes de hundirse el trono de Isabel II y á los cuatro dias del *pronunciamiento* de la marina española en las aguas de Cádiz, tuve una entrevista en Paris con un ilustre personaje político de muy poderosa influencia en el partido progresista; y como el principal objeto de ella era hablarle de la esclavitud en Cuba, tuve el gusto de encontrarme en todo conforme con sus ideas. Así fué que, no habiendo necesidad de entrar en largas explicaciones, expúsele brevemente los poderosos obstáculos que impiden una abolición repentina, y al concluir, díjele las siguientes palabras: «Si algun gobierno en España, de cualquiera naturaleza que sea, osare lanzar un decreto aboliendo de un golpe la esclavitud, creo que ningun Capitan General le dará cumplimiento; pero si intentase ejecutarlo, estoy convencido de que entónces, uniformada la opinion por la comunidad de intereses, los peninsulares unidos á los cubanos lo resistirían, pudiendo llegar hasta la independencia ú otra cosa.» No pronuncié estas palabras como arma de intimidacion, sino tan sólo como un aviso de lo que sucedería, fundándome en un precedente de años anteriores.

En una Memoria titulada *La supresion del tráfico de esclavos africanos en la isla de Cuba examinada con relacion á su agricultura y á su seguridad*, que publiqué en Paris á principios de 1845, y que se halla reimpressa en el tomo II de la *Coleccion* de mis obras, léese á la página 144 lo que ahora transcribo.

«La continuacion de la *trata* es un proceso criminal abierto contra Cuba. Hasta ahora Inglaterra sólo ha desempeñado el oficio de fiscal; pero de un dia á otro puede revestirse del carácter de juez, y juez inexorable. De esta trasformacion ya vimos una sombra en los memorables acontecimientos de 1840. En 25 de Mayo de aquel año, el gabinete inglés mandó á su embajador en Madrid que pasase al gobierno español una nota, pidiéndole que ampliara las facultades de la *comision mixta*, residente en la Ha-



Habana, para que procediese á la pesquisa y libertad de todos los negros introducidos en Cuba desde el 30 de Octubre de 1820. Igual instancia renovó en 17 de Diciembre del mismo año; y en 20 de Enero de 1841 contestó el gobierno de Madrid que, siendo el asunto de muy grave naturaleza, debía oír, ántes de resolverlo, á las autoridades de Cuba. Estas ocurrencias causaron en la Habana una sensacion profunda; y como no hay cosa que reuna más las opiniones que la identidad de intereses, los blancos todos, de aquende y allende el mar, formando una masa compacta, no sólo se opusieron á las pretensiones británicas, sino que entre los mismos peninsulares, hubo algunos muy influyentes y acaudalados que concibieron el proyecto de emancipar á Cuba, si la metrópoli asentía á los deseos del inglés. Cumple á mi propósito transcribir aquí las notables palabras de un Ayuntamiento tan fiel como el de la Habana, en la representacion que elevó al gobierno supremo en aquellas críticas circunstancias. Hélas aquí:

«Esa dependencia será perpétua, si se conservan los elementos de orden, que por fortuna existen en la inviolabilidad de las propiedades; será perpétua, cuando el Gobierno ilustrado de España extienda su mano protectora á este país; y si sus habitantes han sabido resistir al ejemplo, y aún á las sugestiones de otros puntos de América; si han sabido, en defensa del Gobierno, derramar su sangre, é invertir cuantiosas sumas de pesos, no sólo en Europa, sino en las vecinas provincias de los que ántes eran sus hermanos, no podrá haber tenor alguno de que desmientan su acrisolada fidelidad sino en el caso, *imposible en justicia*, de que hayan de ceder á la imperiosa ley de su propia conservacion.»

Los dos párrafos anteriores no necesitan de comentario, y lo que veintitres años há se intentó hacer en circunstancias ménos graves, hoy no dejaría de ejecutarse en situacion mucho más crítica.

Es necesario y urgente disipar ilusiones y sacar á ciertos hombres de España del lamentable error en que están, figurándose que Cuba tendria sumisa al enello á un decreto exterminador. Ilusion es tambien pensar que, si ella lo resistiese, correria suerte igual á la de Santo Domingo. Engañanse tales hombres, y deben tener enten-

dido desde ahora, que, si tan terribles momentos llegasen, *Cuba se perdería, pero no para ella, sino para su metrópoli.*

Un movimiento en Cuba es peligroso cuando los blancos estén divididos; pero cuando todos marchen acordes á un mismo fin, entónces no hay que temer. Entre Cuba y Santo Domingo francés no cabe comparacion, pues mientras este contaba casi 500,000 esclavos, y solo 30,000 blancos, Cuba puede contraponer á sus 350,000 esclavos más de 800,000 blancos, que ya bastante fuertes por su número, sólo más todavía por su influencia política y social.

Al bárbaro decreto de la Convencion resistieron energicamente las islas de Francia ó Mauricio y Borbon; y, no obstante que esta tenia 45,000 negros para 16,000 blancos, y aquélla apenas 6,000 de estos para 53,000 esclavos, esas dos islas se salvaron sin revoluciones ni sangre. Si Santo Domingo nos dá una leccion de dolor, Mauricio y Borbon nos dan otra de consuelo; y los que estudien aquélla, menester es que tambien aprenda ésta.

Pero aún hay para España otro peligro más formidable que la resistencia hecha por Cuba sola. Un decreto semejante al de la Convencion francesa pudiera tambien poner á esa colonia en la terrible alternativa, ó de parecer, ó de acogerse á la sombra de algun pabellon vecino. Mucho pudiera decir sobre materia tan grave; pero las delicadas circunstancias en que escribo este papel y los vitales intereses de mi patria, me imponen por ahora el más discreto silencio.

París en el boulevard-Saint-Michel, número 127, á 2 de Noviembre de 1868.—JOSÉ ANTONIO SACO.

PARIS, DICIEMBRE 22 DE 1868.

*Señor Don Miguel de Almagro,*

Mi querido amigo: al despedirme de V. para buscar en un clima más templado que el de París algun alivio á los graves males que me aquejan, desea V. que le manifieste francamente mi opinion sobre un punto, que en su concepto, y tambien en el mio, es de importancia vital para Cuba, nuestra patria.

Pregúntame V. si á la futura felicidad de esta conviene, que en la Constitucion política que con intervencion de sus representantes se le ha de dar en las próximas Córtes Constituyentes, se establezca la asimilacion entre Cuba y su metrópoli, enviando aquélla diputados á esta como se hizo bajo la Constitucion de 1812 y del Estatuto Real otorgado por la corona en 1834.

La opinion que siempre he tenido y que públicamente he sustentado en muchos de mis escritos desde 1835, la que tengo hoy, y la que siempre tendré hasta el último instante de mi vida, es, que la Diputacion á Córtes por Cuba sea cual fuere el talento y patriotismo de los diputados nombrados, es incapaz de sastifacer á las muchas é imperiosas necesidades políticas, económicas, morales y sociales de aquella isla, pues los obstáculos que sus dignos representantes encontrarán en el desempeño de su mision, son tan superiores á todos sus esfuerzos, que necesariamente se estrellarán ante una situacion invencible.

Mi conviccion es tan profunda en este punto, que si Cuba toda desde la punta de Maisi hasta el cabo de San Antonio pidiese Diputados á Córtes para asimilarse á España, yo me quedaria solo y firmemente me opondria á semejante pretension.

Ignoro, caro amigo, cual será la futura constitucion que las próximas Córtes Constituyentes otorgarán á nuestra Antilla; pero si desgraciadamente viniésemos á caer en ese sistema de asimilacion, desde ahora pronostico, que no pasarán dos diputaciones sin que Cuba se desengañe y arrepienta de haber pedido diputados que la representan en los Congresos nacionales.

Una legislatura Cubana sin el apéndice de diputados á Córtes, revestida de amplias atribuciones, á cuya sombra prosperen y se consoliden los mútuos intereses de la madre y de la hija; hé aquí la única institucion que puede asegurar el reposo y ventura de nuestra pátria, y la única, y sólo la única, que dándole completa libertad, hará duradera la cordial union entre Cuba y España.

Al apartarme de V., y quiza para nunca más verle, reciba un tierno abrazo de su affmo y constante amigo.

JOSÉ ANTONIO SAGO.